

afkar/ideas

REVISTA PARA EL DIÁLOGO ENTRE
EUROPA Y EL MEDITERRÁNEO

PRIMAVERA DE 2026 — NÚM. 77




EUROPA 8 EUR | MARRUECOS 43 DH | ARGELIA 400 DZD | TÚNEZ 9 TND

ORIENTE MEDIO EN GUERRA, ¿HASTA CUÁNDO?

IE Med.
Instituto Europeo del Mediterráneo

**POLÍTICA
EXTERIOR**



El mejor reconocimiento es que nos elijas para cuidar tu patrimonio

LOS PREMIOS INTERNACIONALES NOS LLENAN DE ORGULLO, PERO LA MAYOR SATISFACCIÓN ES TU CONFIANZA Y EL TRABAJO QUE REALIZAMOS PARA ENTENDERTE.

PORQUE ENTENDERTE ES CONOCER TU HISTORIA Y PENSAR EN TU FUTURO; ES CONECTAR TUS OBJETIVOS CON EL TALENTO DE UNA RED GLOBAL DE ESPECIALISTAS DONDE LA EXPERIENCIA SE COMPARTE, LAS SINERGIAS MULTIPLICAN CAPACIDADES, CADA DECISIÓN SE RESPALDA CON LA PERSPECTIVA MÁS AMPLIA. ENTENDERTE ES ACOMPAÑARTE EN CADA TRAVESÍA PARA CONVERTIR TU VISIÓN EN LEGADO.

GRACIAS, EUROMONEY, POR LOS PREMIOS. Y GRACIAS A TI POR CONFIAR EN NOSOTROS.

UN ENFOQUE ÚNICO PARA ENTENDERTE.
ES EL MOMENTO



MEJOR BANCA PRIVADA DEL MUNDO PARA ALTOS PATRIMONIOS (HNW)
MEJOR BANCA PRIVADA DE ESPAÑA PARA ALTOS PATRIMONIOS (UHNW)
MEJOR BANCA PRIVADA DE ESPAÑA PARA INVERSIONES ALTERNATIVAS
MEJOR BANCA PRIVADA DE ESPAÑA PARA FAMILY OFFICE

ÍNDICE



3 Editorial

4 Revista de prensa

— Entrevista

- 8 LÍBANO EN ESTADO DE GUERRA
Entrevista con Najat Saliba

— Gran angular

- 14 MARRUECOS, LA APUESTA POR EL EJE GEOECONÓMICO REGIONAL
Rachid el Houdaigui
- 18 ELECCIONES LEGISLATIVAS EN MARRUECOS: ¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EL 23 DE SEPTIEMBRE?
Saloua Zerhouini
- 24 SÁHARA OCCIDENTAL, AUTONOMÍA Y CREDIBILIDAD: DE LA GUERRA FRÍA A TRUMP
Bernabé López García
- 28 MARRUECOS, UNA ECONOMÍA A DOS VELOCIDADES
Zaynab El Bernoussi

- 32 EL MOVIMIENTO GEN Z 212 Y LA PRIVACIÓN EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN DIGITAL
Isabel Ruck

— Ideas políticas

- 40 LA GUERRA DE EEUU E ISRAEL CONTRA IRÁN: UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR
Gawdat Bahgat
- 44 EL IRÁN DE MOJTABA JAMENEI: UNA SUCESIÓN SIN APERTURA
Luciano Zaccara
- 48 GUERRA, TIRANÍA Y COLONIALISMO: LOS MALES INCURABLES DE ORIENTE MEDIO
Xavier Mas de Xaxàs
- 52 TURQUÍA ANTE LA CUESTIÓN KURDA EN SIRIA
Carmen Rodríguez López

— Tendencias económicas

- 58 ECONOMÍA AZUL: MOTOR DE CAMBIO, INTEGRACIÓN Y RESILIENCIA REGIONAL
Jérémie Fosse

- 62 ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE: UNA MAREA QUE IMPULSA A TODOS LOS BARCOS
Adriana Salazar, Alessandra Sensi

- 66 EL TURISMO AZUL MEDITERRÁNEO EN UNA ENCRUCIJADA
Angelo Sciacca

— Diálogos

- 72 EL ISLAM EN AMÉRICA LATINA: ESTADO DE LA CUESTIÓN
Baptiste Brodard
- 76 EL ISLAM EN EL SUDESTE DE EUROPA
Ina Merdjanova
- 80 ISLAM Y POLÍTICA EN EL ESPACIO POSTSOVIÉTICO: CÁUCASO Y ASIA CENTRAL
Bayram Balci

84 Publicaciones

IEMed.
European Institute of the Mediterranean

**POLÍTICA
EXTERIOR**

Directores

Senén Florensa, Belén Becerril

Redactoras jefas

Gabriela González de Castejón, Elisabetta Ciuccarelli

Redacción

Jordi Bertran

Infografía

Adriana Exeni

Redacción, administración y publicidad

Fundación Análisis de Política Exterior, Pº de la Castellana 53, 28046 Madrid. Tel. (+ 34) 91 431 26 28

www.politicaexterior.com

IEMed, Girona 20, 08010 Barcelona. Tel. (+34) 93 244 98 50

www.iemed.org

Suscripciones: suscripciones@politicaexterior.com

Distribución: SGEL (www.sgel.es)

© 2026. Fundación Análisis de Política Exterior (Madrid)

© 2026. Instituto Europeo del Mediterráneo, IEMed (Barcelona)

ISSN: 1697-0403 / Depósito Legal: M-49925-2003

Foto de portada: Getty Images

afkar/ideas es una revista editada por la Fundación Análisis de Política Exterior (Madrid) y el Instituto Europeo del Mediterráneo, IEMed (Barcelona). Los artículos publicados no reflejan los criterios de afkar/ideas expuestos en sus notas editoriales. La revista recoge distintos estudios y opiniones, fiel a su propósito de animar el debate periódico sobre la evolución de Europa y el Mediterráneo.



Esta revista ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte



Con el apoyo de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales



Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

La Fundación Análisis de Política Exterior y el Instituto Europeo del Mediterráneo, a los efectos previstos en el artículo 32.1, párrafo segundo del vigente TRLPI, se oponen expresamente a que cualquiera de las páginas de afkar/ideas, o partes de ellas, sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de la totalidad o parte de las páginas de esta obra sólo podrá ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos -www.cedro.org), si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



Revista impresa con papel procedente de bosques sostenibles

ORIENTE MEDIO EN GUERRA

Oriente Medio vive la enésima guerra iniciada a espaldas del derecho Internacional y del multilateralismo. Al cierre de esta edición, entraba en vigor un frágil alto el fuego de dos semanas –alcanzado después de cinco semanas de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán con ninguno de los objetivos de Donald Trump y Benjamín Netanyahu cumplidos: la cuestión nuclear sigue sin resolverse y el régimen permanece en el poder. Más bien al contrario: la República Islámica, aunque debilitada por los bombardeos y la recesión que ya había provocado las protestas de enero, ha demostrado ser muy resiliente mientras diezmaraba la economía global al cerrar el estrecho de Ormuz.

Trump se ha visto obligado a intentar frenar la guerra; el tiempo dirá si lo conseguirá. La alternativa era clara: o desplegar tropas sobre el terreno, cosa altamente impopular; o detener una escalada cuyas repercusiones económicas y políticas eran ya inasumibles.

Resulta evidente que hubo falta de análisis de las consecuencias a corto y largo plazo. Galvanizado por la operación venezolana, un Trump complaciente con Netanyahu ha subestimado a su adversario e ignorado factores clave como la geografía, proporcionando a Irán un instrumento –Ormuz–, hasta ahora inédito, que ha demostrado ser eficaz desde el primer momento y que podrá volver a emplear en el futuro para desestabilizar la economía global. Asimismo, esta estrategia ha erosionado su relación con parte de su base electoral y perjudica sus opciones de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026.

Al mismo tiempo, surge una cuestión fundamental: ¿cómo podrá Estados Unidos remediar el daño político infligido a su estrategia en la región? Décadas de política estadounidense en Oriente Medio e históricas alianzas han quedado seriamente debilitadas. La guerra ha perjudicado la seguridad regional y los países árabes del Golfo deberán ahora aprender a convivir con un Irán severamente castigado pero reforzado geopolíticamente, capaz de poner en riesgo tanto sus economías como su imagen como destinos seguros para turistas e inversores. En este contexto, podría abrirse una oportunidad para que los países del Golfo dejen de lado sus rivalidades y avancen hacia una mayor cooperación que les permita contrarrestar la influencia iraní.

Por otro lado, el alto el fuego, negociado por Pakistán entre EEUU e Irán, a espaldas de Netanyahu, también

representa un revés para Israel y para la narrativa que ha construido en torno al conflicto. El gobierno israelí sigue mostrándose reticente a la idea de abandonar su estrategia inicial y continúa atacando El Líbano, lo que podría poner en peligro el alto el fuego.

Pero son las sociedades civiles de la región las que están pagando el precio más alto, especialmente en Irán, Líbano y Palestina. Uno de los objetivos de la guerra era provocar un levantamiento interno en Irán; sin embargo, se ha terminado por inhibirlo. Si bien el apoyo al régimen parece reforzado, no cabe duda de que la represión también explica la relativa calma social. Pero la sociedad civil iraní, por desorganizada que sea, ha demostrado de forma reiterada su fortaleza y determinación, levantándose cíclicamente en contra del régimen de los ayatolás, sin necesitar el apoyo externo.

En el terreno internacional, Rusia y China parecen ser los más beneficiados. La guerra ha brindado una oportunidad a Vladimir Putin al levantarse parte de las sanciones sobre el petróleo ruso, aliviando la precaria situación económica del país, y ha desplazado el foco internacional desde Ucrania hacia Oriente Medio. China, por su parte, ha visto reforzado su papel de potencia fiable ante unos erráticos EEUU.

Por otro lado, la guerra ha vuelto a poner de manifiesto la limitada influencia de la Unión Europea en la región, condicionada por la falta de una política exterior común, la dependencia estratégica de EEUU en materia de seguridad y las divergencias entre Estados miembros. Quizá la derrota de Orbán en Hungría permita ahora avanzar. Habrá que estar atentos a las posibles represalias de Trump hacia los miembros europeos de la OTAN reticentes a apoyarle.

De cara a los próximos meses, la incertidumbre es elevada. Trump y Putin han apostado por un escenario de desorden internacional y debilitamiento de las estructuras multilaterales occidentales. Sin embargo, la combinación entre precios de la energía, y consiguientemente crisis económica, conflictos persistentes y falta de sensatez por parte del liderazgo político internacional podría ser decisiva de cara a unas sociedades civiles occidentales que muestran signos de fatiga. Queda por ver si las ciudadanía estadounidense e israelí extraerán lecciones de estos últimos meses y lo demuestran en sus respectivas citas electorales de otoño. /



LA GUERRA EN ORIENTE MEDIO: UNA OPORTUNIDAD PARA LOS PAÍSES DEL MAGREB
MALIK BEN SALEM-
COURRIER INTERNATIONAL
23/03/2026

“En el Magreb, la guerra en Oriente Medio parece percibirse como una fuente de incertidumbre y también como una oportunidad económica y diplomática. Mientras Argelia anticipa nuevos mercados para su petróleo y su gas, Marruecos espera estrechar más sus lazos con Israel y Estados Unidos.

En lo que se define como un ‘complejo ejercicio de equilibrismo diplomático’, Argelia intenta preservar sus relaciones con Irán sin perjudicar sus intereses geopolíticos, según explica un artículo del portal de información panárabe Middle East Eye (MEE). Desde el punto de vista económico, resulta evidente que la escalada de los precios de los hidrocarburos, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la paralización de ciertas explotaciones petroleras y gasísticas en Oriente Medio benefician a Argelia.

“Tenemos nuestra propia estrategia: diversificar nuestros socios, ser menos dependientes de las cadenas de suministro occidentales y evitar cualquier conflicto durante los tres años que quedan del mandato de Trump”, resume una fuente diplomática argelina.

Esta ventaja energética permitiría a Argelia no solo sanear sus arcas, sino también aumentar su capacidad de influencia ante la Unión Europea, justo en plena renegociación del acuerdo de libre comercio.

Para el vecino marroquí, la oportunidad que brinda esta guerra no es tanto económica como política. El reino alauí ve en ella una nueva ocasión para ‘reforzar su alianza con Washington e Israel, así como con los Estados del Golfo’. El objetivo de fondo es, lógicamente, recabar mayores apoyos en el crucial dossier de la marroquinidad del Sáhara Occidental.

El momento es especialmente relevante, dado que existen conversaciones secretas en curso

entre Marruecos, el movimiento independentista saharauí del Frente Polisario, Argelia y Mauritania, bajo los auspicios de la administración estadounidense. Según las informaciones reveladas por MEE, en mayo se celebrará una nueva ronda de contactos en Washington con el fin de alcanzar un acuerdo final cercano al plan marroquí de autonomía limitada para el Sáhara, ratificado en gran medida por la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en octubre de 2025.

Túnez, mucho menos resiliente ante la crisis que se avecina, podría beneficiarse de ella a corto plazo, especialmente en el sector del aceite de oliva, según el portal de noticias Afrik. [...] ‘Sin embargo, la otra cara de la moneda es negativa. Túnez importa la casi totalidad de su energía. Cada subida del precio del barril encarece la factura petrolera y se traslada al conjunto de la economía’.

A medio plazo, Túnez sufrirá, como Marruecos, el encarecimiento de precios de los insumos (fertilizantes y energía), lo que podría ‘reducir los márgenes de los productores’. No obstante, los países del Magreb cuentan con una baza a su favor: las importantes inversiones en energías renovables, especialmente en energía solar.”



ANTE EL PEOR ESCENARIO
EDITORIAL-EL PAÍS
22/03/2026

“De todos los escenarios posibles abiertos cuando el pasado 28 de febrero Donald Trump y Benjamín Netanyahu ordenaron atacar Irán –sin excusa alguna de legítima defensa o mandato internacional, sin autorización del Congreso de EE UU y sin informar a la OTAN–, la guerra se encuentra en uno de los más nefastos.

Los bombardeos sobre Irán hace días que dejaron de ser “quirúrgicos” –un eufemismo militar–, multiplicando el número de víctimas civiles; Israel ha llevado la guerra al Líbano, donde ha provocado el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas; y ha pasado a

atacar reservas energéticas críticas en Irán en aparente descoordinación con EE UU. Mientras, Trump inunda a diario los medios y las redes sociales con declaraciones contradictorias sobre el objetivo, la estrategia y la marcha de la guerra. En lo que sí se ha mostrado sólido y constante el mandatario estadounidense es en insultar a sus aliados. El viernes llamó ‘cobardes’ a los demás miembros de la OTAN que se niegan a verse arrastrados a una guerra ilegal que ni comparten ni comprenden, al igual que tampoco la apoyan la mayoría de los estadounidenses.

Por lo que respecta al régimen iraní, no solo resiste, sino que bombardea prácticamente a diario a sus vecinos del golfo Pérsico en un intento de extender la guerra. Al tiempo, aumenta la represión interna, ejecuta en público en la horca a opositores para demostrar su fortaleza y mantiene al mundo a las puertas de una crisis energética sin precedentes al atacar barcos en el estrecho de Ormuz, el cuello de botella de los hidrocarburos de Oriente Próximo.

La guerra no marcha ni de lejos como anuncia Trump. Tampoco lo hace como destaca la propaganda iraní, que presume de haber puesto a la fuga al enemigo mientras sus cielos han quedado en la práctica abiertos a las aviaciones israelí y estadounidense. Pero el explosivo escenario, en el que peligran vidas e infraestructuras críticas en toda la región a cada hora, puede ser todavía peor. Es preciso encontrar una vía para desescalar el enfrentamiento cuya deriva parece escapar al control de sus protagonistas cada día que pasa. Y para ello lo realista sería apoyarse en los elementos prácticos que la condicionan.

A Trump no le conviene un conflicto militar prolongado, no porque tenga un ápice de espíritu pacifista, sino porque el aventurerismo militar ha dividido a su base social en pleno año electoral. (...)

Conviene prestar atención además a los Estados del Golfo que están demostrando una actitud muy prudente a pesar de recibir ataques directos de Irán. No hay que olvidar que intentaron facilitar una solución diplomática. Y no por simpatía hacia

Teherán, sino porque sabían que ellos serían los más afectados por las represalias de Irán.

Y, a pesar de los desprecios de Trump, tampoco hay que olvidar el factor europeo. Hay que felicitarlo porque en la cumbre de Bruselas de esta semana se impusiera el pragmatismo de buscar soluciones a la crisis energética dejando de lado la retórica. Por otro lado, la UE acierta al reafirmarse en que la guerra responde a intereses que no son los de Europa. Pero una vez establecido el principio, ahora le toca utilizar toda su potencia diplomática –que es su mejor arma– e implicarse en buscar una solución que ponga fin a la aventura mortal en la que el actual presidente de EE UU ha embarcado a todos.”



AGUA EN EL MOTOR

EDITORIAL/ISSA GORAIEB-
L'ORIENT LE JOUR
20/03/26

“En esta guerra titánica que entra ya en su cuarta semana, se han permitido todos los golpes, incluso los más bajos.

[...] Desde el primer día de la ofensiva israelí-estadounidense, la República Islámica no ha dejado de bombardear intensamente las instalaciones petroleras de los reinos del Golfo. [...] Al problema de suministro que ya planteaba el bloqueo *de facto* del estrecho de Ormuz, se suma ahora el de la producción de estos combustibles. [...] Este grave episodio ilustra también las crecientes divergencias entre los socios estadounidense e israelí sobre los objetivos, las prioridades y el *modus operandi* de la guerra.

Israel está decidido a derrocar al régimen de los ayatolás, al que percibe como una amenaza existencial. Alternando la presión militar y la diplomacia, Estados Unidos parece más bien querer obligarlo a cambiar de comportamiento, tanto en el propio Irán como en el resto de Oriente Medio. [...] Una vez más, cabe preguntarse: ¿quién lleva la voz cantante en esta pareja de belicistas?

La pregunta adquiere un cariz especialmente angustioso para Líbano, convertido en la segunda carpa de este gran circo de múltiples pistas que incendia la región. Washington y Tel Aviv compiten en argumentos para calificar a Hezbolá de organización terrorista y exigir su desarme. Ambos esperan que el ejército libanés tome cartas en el asunto; sin embargo, ambos saben perfectamente que, a falta de un equipamiento adecuado y por el bien de la paz civil, las fuerzas armadas no podrían actuar de forma inmediata. Y mucho menos en un momento en que Israel arremete sin tregua contra la milicia, lo que convertiría ostensiblemente a la fuerza legal en auxiliar, si no en cómplice del ocupante: una situación insostenible para cualquier gobierno, por muy auténtica e irreversible que sea su voluntad de neutralizar a la milicia.

Por todas estas razones, el poder libanés ha abogado –en vano– por un alto el fuego efectivo, seguido de negociaciones directas bajo auspicios internacionales. Implacable, Israel solo contempla el diálogo bajo el fuego; un fuego que, por otra parte, no deja de ganar intensidad; un fuego que se extiende geográficamente con el gradual despoblamiento del sur de Líbano; un fuego aparentemente destinado a durar todo el tiempo que sea necesario, independientemente de la guerra contra Irán.

La gran cuestión es saber si, para un programa tan vasto, Tel Aviv cuenta o no con el respaldo total de unos Estados Unidos que se dicen comprometidos con la integridad territorial y la estabilidad de Líbano. Resulta absolutamente oportuno el llamamiento que Nawaf Salam ha lanzado a Donald Trump, la única persona capaz de poner fin a una guerra que nuestro país no desea; algo que, sin duda, puede halagar con éxito el monumental ego del presidente estadounidense. No menos contundente es, sin embargo, el demoledor alegato contra Hezbolá pronunciado, en otra ocasión, por el primer ministro. Lo cierto es que ya no basta con meras declaraciones de intenciones, y el gobierno libanés está obligado a ofrecer medidas concretas para reforzar su credibilidad. Las últimas amenazas de la milicia contra

los responsables –incluida la de recurrir a un golpe de Estado en toda regla o a la guerra civil– requieren, por tanto, mucho más que procesos judiciales episódicos que a menudo no tienen continuidad.

Las acciones militares de Hezbolá ya no son las únicas que merecen ser declaradas ilegales por el Estado. Es el propio Hezbolá quien ya no se detiene ante ningún exceso, ni respeta ningún límite, de manera que se sitúa a sí mismo al margen de la ley.”



IRÁN PIENSA QUE PUEDE
GANAR UNA LARGA GUERRA
DINA ESFANDIARY/ZIAD
DAOUD -NEW YORK TIMES
28/03/2026

“Irán no quería esta guerra, pero ahora tiene razones para prolongarla. Eso es un problema para el presidente Trump, que parece incapaz de reabrir el estrecho de Ormuz a pesar de sus amenazas. Es un problema para la economía global, que se está desplomando bajo un aumento vertiginoso de los costes de la energía. Es un problema para los líderes del Golfo que están perdiendo grandes cantidades de ingresos petroleros. Y perseguirá a futuros presidentes estadounidenses: Ormuz ya se ha cerrado una vez; puede volver a cerrarse.

A pesar del creciente número de muertos y la destrucción de infraestructuras, el alza de los precios del petróleo está amortiguando la economía iraní frente a los costes de la guerra. Irán ha respondido prácticamente a cada ataque con un contraataque, a cada amenaza con una amenaza equivalente. La lógica de sus líderes es fría pero calculada: hacer que esta guerra sea tan costosa para todos que nadie quiera iniciar otra. Para Teherán, los objetivos son sencillos. La República Islámica debe sobrevivir a este momento y asegurarse de no ser atacada de nuevo por Estados Unidos e Israel. Para lograrlo, Irán cree que debe imponer un precio: a Estados Unidos e Israel, a la imagen de estabilidad de los Estados del Golfo y a la economía global. Hasta ahora, lo está consiguiendo: Irán ha aprendido lo

fácil y relativamente barato que es mantener a la economía global como rehén.

Para Teherán, este es un momento crucial. El país sufrió años de dificultades económicas debido a las sanciones y la mala gestión, que provocaron una alta inflación y una moneda más débil. También enfrentó crisis políticas y de legitimidad, ambas agravadas por la brutal represión de las protestas, así como presiones sociales y ambientales tan severas que la grave escasez de agua llevó al presidente a advertir que Teherán podría tener que ser evacuada. Luego vino la ofensiva estadounidense e israelí, en la que dirigentes de ambos países hablaron abiertamente sobre un cambio de régimen en Teherán.

Esa situación provocó la respuesta de Irán: una escalada implacable y gradual. A diferencia de la breve guerra de junio, esta escalada no es simbólica. Irán sigue atacando a los Estados árabes del Golfo Pérsico donde más les duele, desde la energía hasta el turismo. Teherán ahora mantiene como rehén a la economía global al bloquear el estrecho de Ormuz, una medida que llevaba tiempo amenazando con ejecutar, pero que nunca había llevado a cabo.

Irán está haciendo todo esto a bajo coste. Utiliza una combinación de drones y misiles relativamente económicos para abrumar las defensas de sus adversarios. Estas defensas son más costosas: Irán despliega drones con un valor de entre 20.000 y 50.000 dólares contra interceptores que superan los cuatro millones de dólares. También utiliza minas, drones y embarcaciones con explosivos para ahuyentar a los barcos en el estrecho de Ormuz. En resumen, Teherán está en el lado positivo de la curva de costes. Y si bien las municiones iraníes no son ilimitadas, el ejército del país está mejorando su precisión a medida que avanza la guerra. Puede que disparen menos, pero disparan mejor.

Esta dinámica ha generado dos ventajas para Irán. En primer lugar, los altos precios del petróleo perjudican a Estados Unidos, pero fortalecen la posición de Irán. Esto llevó a la paradójica política de la administración Trump de flexibilizar

las sanciones al petróleo iraní. En segundo lugar, el cierre del estrecho perjudica menos a Irán que a sus vecinos. Las exportaciones de petróleo iraní solo han disminuido ligeramente desde el inicio de la guerra, mientras que las de sus vecinos se han desplomado. Con el aumento de los precios del crudo, Irán probablemente obtiene hoy más ingresos petroleros que antes de la guerra. Incluso su moneda, históricamente inestable, se ha fortalecido.

Todo esto tiene un precio. Irán continúa bajo intensos bombardeos, que afectan a zonas residenciales y a su red eléctrica. Teherán se ha enemistado con sus vecinos, varios de los cuales ahora piden a Trump que termine el trabajo. Si bien la estrategia iraní ha sorprendido a sus adversarios, con el tiempo, todos se adaptarán. Los países del Golfo podrían encontrar alternativas al estrecho, invirtiendo en rutas de desvío y oleoductos. Es muy probable que Estados Unidos y las potencias regionales preparen planes para evitar futuros cierres del estrecho. Nada de esto ayudará a los nuevos gobernantes de Irán a mantenerse en el poder. Una vez terminada la guerra, aún tendrán que lidiar con sus crisis internas económicas, políticas, sociales y ambientales, así como con la muerte de muchos de sus líderes.

Irán no deseaba esta guerra, pero ha aprendido a utilizarla. El estrecho de Ormuz representa una importante vulnerabilidad para la economía global. Teherán recordará el valor de poder cerrarlo. Esta influencia no resolverá sus profundos problemas internos, pero afianzará la presencia de Estados Unidos en Oriente Medio, a pesar de años de declaraciones sobre un posible alejamiento de la región.”



EL SAHEL: UNA ZONA DE GUERRAS OLVIDADA EN EL MAPA MUNDIAL DE LAS CRISIS
BENJAMIN ROGER-LE MONDE
21/03/2026

///Ucrania, Gaza, Irán. En medio del tumulto de un mundo en el que se

multiplican los conflictos, el que asola el Sahel suele pasar desapercibido. En el corazón de África, un continente que rara vez ocupa los grandes titulares de los medios, esta región minada por los grupos yihadistas se hunde, sin embargo, en un ciclo de violencia devastador. Por tercer año consecutivo, en 2025 concentró casi la mitad de las muertes relacionadas con el terrorismo en el mundo, según el último Índice Global de Terrorismo publicado el jueves 19 de marzo por el Institute for Economics & Peace.

Las últimas estimaciones – probablemente infravaloradas – de la ONG Armed Conflict Location & Event Data, calculan que 70.033 personas (civiles, militares y combatientes de grupos armados) han sido asesinadas en Mali, Burkina Faso y Níger desde 2016. De ellas, 54.352 han muerto durante los últimos cinco años. Es decir, tras la llegada al poder mediante sucesivos golpes de Estado –entre 2020 y 2023– de las juntas militares en estos tres países que hoy conforman la Alianza de Estados del Sahel.

Sus líderes –el coronel Assimi Goita en Mali, el capitán Ibrahim Traoré en Burkina Faso y el general Abdourahamane Tiani en Níger– han instaurado dictaduras militares que no toleran ninguna voz crítica. Se han autoproclamado presidentes sin elecciones y no tienen intención alguna de organizarlas. Los partidos políticos han sido disueltos y la prensa amordazada, lo que deja a quienes piensan diferente solo dos opciones: el silencio o el exilio. Solo se tolera la propaganda oficial.

En este contexto, quienes se atreven a mostrar la más mínima oposición se exponen a duras sanciones. [...]

A pesar de los discursos triunfalistas de las juntas, los yihadistas –afiliados al Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), la filial saheliana de Al Qaeda, o al Estado Islámico en el Sahel (EIS)– continúan expandiendo su influencia. [...] En estos tres países controlan zonas enteras donde imponen la sharia, recaudan impuestos u obligan a las mujeres a llevar el hiyab.

[...] las juntas y sus aliados rusos se muestran incapaces de frenar

su avance. Peor aún: sus métodos radicales no han hecho más que aumentar la violencia y avivar las tensiones entre comunidades.

[...] En este Sahel en ruinas, la población civil es la primera víctima. 'Están atrapados entre los golpistas y los yihadistas. Son ellos quienes pagan el precio más alto de esta guerra, pero en silencio, porque no se atreven a hablar', lamenta un exministro maliense. Aumento generalizado de los precios, cortes de electricidad, escasez de combustible, gasto público orientado a la defensa en detrimento de los sectores sociales, etc. Además de la inseguridad, los motivos de queja son, por tanto, numerosos.

En los países directamente amenazados, pero también en Occidente, crece la preocupación ante la expansión yihadista. [...]"



POR QUÉ LA GUERRA DE TRUMP CONTRA IRÁN EMPUJA A LA UE A APOSTAR POR LAS RENOVABLES **ZIA WEISE-POLITICO** **18/03/2026**

//Si Donald Trump hubiera querido que los europeos compraran más petróleo y gas, quizá no debería haber bombardeado Irán.

Aunque el suministro energético del Viejo Continente sigue estando garantizado, los precios del combustible y la electricidad se han disparado desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Teherán a finales de febrero.

En su afán por frenar esta subida repentina, algunos gobiernos han visto una oportunidad para atacar la legislación medioambiental de la Unión Europea, mientras que otros han aprovechado el encarecimiento de los combustibles fósiles para afirmar que la UE debe redoblar sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático.

Pero el impacto de los costes provocado por la guerra ha recordado tanto a los escépticos como a los defensores del medio ambiente en Europa que su continente, pobre en recursos, es vulnerable

a la volatilidad de los precios de importación mientras el petróleo y el gas constituyan una parte esencial de su *mix* energético.

Desde España hasta Polonia, los gobiernos se han unido esta semana en torno a un mismo mensaje: Europa debe acelerar su transición, abandonando los combustibles fósiles extranjeros en favor de una energía nacional limpia. [...]

La escalada vertiginosa de los precios de la energía que siguió a la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 provocó una caída generalizada del consumo de gas en Europa, y la situación actual bien podría tener un efecto similar, según ha anticipado la ministra neerlandesa de Clima, Stientje van Veldhoven [...].

La crisis iraní supone un fuerte incentivo para que todos los países evalúen cuidadosamente su uso del petróleo y el gas y estudien cómo pueden reducir no solo su dependencia geopolítica, sino también el impacto que esta tiene en su economía y su estabilidad social', estimó la ministra.

Para Estados Unidos, esto significa que uno de sus mejores clientes está perdiendo interés en sus productos. El Viejo Continente es, de hecho, el principal destinatario del gas natural licuado estadounidense, y Donald Trump ha intentado asegurarse de que los europeos compren aún más de sus combustibles fósiles.

Sin embargo, sin quererlo, su ataque contra Irán ha reforzado los llamamientos para que Europa tome la dirección opuesta.

El impacto actual es de una magnitud mucho menor que la crisis energética de 2022, que hizo que los precios del gas en Europa superaran los 300 euros por megavatio hora. Esta semana, el precio ha oscilado en torno a los 50 euros, mientras que antes de la guerra en Irán rondaba los 30 euros.

No obstante, como escribió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una carta dirigida el lunes a los líderes de la UE, 'el aumento de los precios de los combustibles fósiles ya está lastrando nuestra economía'.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear

Irán, lo que incitó a Teherán a bloquear la navegación en el golfo Pérsico, la Unión ya ha 'gastado 6.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles, lo que nos recuerda directamente el precio que pagamos por nuestra dependencia', añadió.

[...]

Los esfuerzos realizados por Europa para desarrollar las energías renovables –y, en algunos países, la energía nuclear– se inspiran en las lecciones aprendidas de la crisis de 2022.

'Para mí, es importante destacar que la situación de la UE es mucho mejor hoy de lo que era en 2022. ¿Por qué? Porque tenemos más renovables en nuestro sistema, porque hemos diversificado el abastecimiento, y porque hay menos horas en las que es el gas el que fija el precio de la electricidad', enumeró Dan Jørgensen, comisario europeo de Energía [...].

[...] Ursula von der Leyen señala que la proporción de las energías renovables en el *mix* eléctrico de la UE ha pasado del 36% en 2021 a casi el 50% en la actualidad.

Dado que el elevado coste del gas tiende a determinar el precio global de la electricidad en el sistema europeo, cuanto mayor es la cuota de energía limpia de un país, menores son sus costes. Diversas investigaciones han demostrado que los precios de la energía han subido mucho menos en España, país que se abastece de energías renovables, que en Italia, un país dependiente del gas.

Pero España y otros países preocupados por el medio ambiente no son los únicos que ven en la guerra en Irán un motivo para renunciar a las importaciones de combustibles fósiles.

'Observo que incluso algunos colegas que –digamos– tenían inquietudes cuando el clima era la razón para abordar este tema, ahora también ven que el peso de las consecuencias [de la guerra en Irán] es un motivo fundamental para actuar, porque reduce esos costes', declaró la ministra neerlandesa Stientje van Veldhoven.

Incluso en Varsovia, donde el clima suele ser un tema políticamente candente, el aumento de los costes de la energía está incentivando el desarrollo de las renovables."

"En Líbano, no vivimos en el caos, vivimos en un sistema corrupto de forma sistémica. Necesitamos detener la corrupción, pero llevará tiempo. No creo que antes de 10 años podamos ver el final".

Entrevista con *Najat Saliba* por *Andrea López-Tomás* (Beirut)

LÍBANO EN ESTADO DE GUERRA

Miembro del Parlamento libanés, la doctora Najat Saliba es una de las 12 diputadas del Bloque del Cambio que logró llegar a la cámara representativa hace cuatro años para trasladar los deseos de revolución de su pueblo. Es experta en cambio climático y control de la contaminación, con investigaciones punteras sobre el impacto de las pipas de agua o sobre cómo la mayor dependencia de los generadores, que ha aumentado en los últimos años, ha provocado un incremento del cáncer en la población. Aunque trabajó durante más de 20 años como profesora en la prestigiosa Universidad Americana de Beirut (UAB), la corrupción en su país la obligó a abandonar las aulas. Primero, impulsó proyectos de ciencia ciudadana y, después de la explosión del puerto de Beirut en 2020, decidió entrar en política. Ha recibido múltiples premios nacionales e internacionales por su papel como mujer en la ciencia, incluido el Premio Internacional L'Oréal UNESCO para Mujeres en la Ciencia.

afkar/ideas ha tenido la oportunidad de dialogar con Najat Saliba en su oficina en Beirut a

mediados de febrero antes de la nueva ofensiva israelí sobre Líbano.

Usted es una de esas personas que dejaron Líbano para estudiar en el extranjero, pero luego decidieron regresar para contribuir a su comunidad. ¿Por qué?

Dejé Líbano durante la guerra civil de una forma muy trágica, huyendo en barco hasta Chipre. Me trasladé a Estados Unidos donde ya vivía mi hermano. Allí, estudié la carrera, mi doctorado y dos años de formación posdoctoral. Entonces, tuve que decidir si quería comprometerme a iniciar una nueva línea de investigación en una universidad de Estados Unidos o regresar a Líbano. Decidí probar suerte en mi tierra y, para mi sorpresa, me contrataron en la Universidad Americana de Beirut. Veinte años después, sigo aquí. Me ha ido bien en la investigación, he recibido premios, y nunca he mirado atrás. Ha habido desafíos en el camino, pero poder estar en Líbano, realizar investigaciones relevantes para el país y para la región ha sido satisfactorio y gratificante. Me hice famosa como

científica especializada en transporte de polvo, pero luego también superé nuestras expectativas la cantidad de subvenciones que recibimos para investigar el consumo de pipas de agua y de cigarrillos electrónicos. El reconocimiento de la comunidad científica, especialmente cuando recibí el Premio Internacional L'Oréal UNESCO para Mujeres en la Ciencia, fue la culminación de 20 años de trabajo y dedicación para demostrar que Líbano, y especialmente la UAB, es capaz de realizar investigación de calidad a la altura de la investigación mundial. De hecho, fue la primera vez que una científica libanesa era reconocida en Líbano.

Su investigación está muy ligada al lugar donde vive. Investigó a fondo el impacto de los generadores, el uso del narguile o los elevados niveles de contaminación en Líbano.

Cuando me incorporé a la UAB, me aconsejaron que no lo hiciera, que, para ascender, debía realizar una investigación atractiva para todo el mundo. Pero no me convenció. Me dije: "Si estoy aquí, es para hacer

cosas relevantes para nuestras vidas”. Me centré en la investigación que realmente impacta en la vida de las personas a diario. Cuando empezamos a investigar sobre el narguile, la pipa de agua, nadie había abordado este tema antes, aunque fumar narguile se había extendido por todo el mundo, no solo en la región. Fue entonces cuando el Instituto Nacional de Salud estadounidense decidió financiar nuestra investigación y darnos todo lo necesario para desmontar el mito según el cual es una forma limpia de fumar. Pudimos realizar una investigación de vanguardia que fue referenciada por muchas asociaciones de salud, y fue adoptada por la Organización Mundial de la Salud. Nuestros resultados sentaron las bases para muchas leyes en Estados Unidos y otros países que prohíben fumar pipas de agua en interiores y espacios públicos. Fue un gran avance, y seguirá siendo uno de los temas de investigación más importantes a los que hemos contribuido para ayudar a salvar la salud de muchos jóvenes. Nuestros resultados demostraron que fumar narguile es mucho más peligroso que un cigarrillo. Ahora la gente lo da por hecho, pero hace 20 años, no era así.

¿Cómo pasó de enseñar química en la universidad a ser miembro del Parlamento libanés?

El epítome de todo esto fue la explosión del puerto de Beirut. Entrar en el Parlamento no fue una decisión de la noche a la mañana, sino una acumulación de frustración, ante la impunidad y la incapacidad del gobierno para ocuparse incluso de un pequeño problema, como los generadores diésel. Todo esto me llevó a dedicarme cada vez más a la investigación-acción. En 2018, salí de la universidad, no quería hacer más investigación, sino que quería estar con la gente en el terreno, ver cuáles son los problemas que enfrentan y cómo podemos ayudarlos. Creé la Academia del Medio Ambiente, hice ciencia ciudadana, involucré a la gente en la ciencia. Fue algo sumamente interesante hasta que ocurrió la explosión de Beirut, que demostró la ineficiencia y negligencia de los responsables de almacenar nitrato de amonio con fuegos artificiales y



Najat Saliba durante la entrevista en Beirut a mediados de febrero de 2026./A.L.T.

todos estos materiales inflamables y explosivos durante años, sin importarles la seguridad o las normas. Decidí que no había vuelta atrás. Justo después de la explosión, fui a caminar por la ciudad con mi amiga Carmen Geha. Solo oíamos el crujido de cristales bajo nuestros pies. No había carreteras, ni aceras. Todo era cristal. Caminamos desesperadas y asombradas, porque no podíamos creer lo que veíamos [se emociona]. Entonces, decidimos hacer algo aprovechando nuestra experiencia como académicas. Formamos un grupo de académicos activistas dispuestos a salir de la universidad y hacer algo por la comunidad. Ese mismo día por la noche reunimos a 150 por Zoom. Nos dividimos en función de nuestra *expertise* en cuatro categorías: medio ambiente, empresas de apoyo, sector sanitario y sector educativo. Nació Khaddit Beirut, la transformación de Beirut. Tras un año y medio, sistematizamos la organización bajo la UAB como Activistas académicos para el impacto y el aprendizaje en el bloque del Cambio (SAIL for Change). Fue mágico. Fue la energía adecuada. Realmente nos necesitábamos mutuamente para sanar y trabajar juntos para no sentirnos solos y

abandonados a nuestra suerte, porque el dolor era tan profundo.

El cambio climático y el control de la contaminación no han sido una gran preocupación entre los políticos tradicionales. ¿Cómo ha impulsado estos temas en la agenda política?

Hay muchos desafíos. En primer lugar, fui al Parlamento con toda esta experiencia en activismo académico, y siendo reconocida internacionalmente como la persona más competente en materia de medio ambiente en Líbano. Y casi no me incluyen en la comisión de Medio Ambiente, porque la elección de los miembros se hace en base a secta y distribución de partidos políticos. Esa fue mi primera sorpresa: al *establishment*, a los partidos convencionales que han gobernado este país desde la guerra civil, no les importa la experiencia. En segundo lugar, la frecuencia de las reuniones no se corresponde con la urgencia de los problemas ambientales, así que decidí hacerlo por mi cuenta, trabajando el doble o el triple. No lo consideran una prioridad, pero mucha gente comprende que es fundamental, porque afecta sus vidas, en términos de respirar bien, comer bien y beber agua potable.

"Vinimos a construir un Estado, y este solo se puede construir con un solo ejército, un solo presidente y un solo gabinete. Estoy a favor de la rendición total de Hezbolá al gobierno y al ejército"

¿Cómo se vive la injusticia ambiental en Líbano?

La injusticia radica en cómo esas personas corruptas utilizan el medio ambiente como recurso para explotar a la gente, perjudicarla y no ayudarla. Tras ser elegida diputada, analicé a fondo la gestión de residuos sólidos, las plantas de tratamiento de aguas residuales y la pérdida de cobertura arbórea de los bosques y la tierra. Vi que el mismo patrón se repetía: el *establishment*, los partidos que han gobernado desde la guerra civil, han construido intencionadamente plantas de tratamiento de aguas residuales que no funcionan para poder sacarles más dinero a los donantes. No les importa la agricultura, los cultivos, la seguridad ni la salud mental de la ciudadanía. Solo quieren construir algo inservible para seguir pidiendo más dinero, alimentar su clientelismo y la dependencia de la población. Solo les importa cómo explotar el medio ambiente para ganar dinero. No vivimos en el caos. Vivimos en un sistema corrupto y sistémico. Así que quienes piensan que Líbano es caótico y que no hay gobierno establecido, no es cierto. Tenemos un gobierno y el gobierno es bueno. Pero las personas que dirigen el gobierno o que lo han dirigido antes del primer ministro actual, Nawaf Salam, y algunos incluso ahora, han logrado controlar el sistema y estrangularlo en su beneficio.

Uno de sus actos más conocidos durante su etapa en el Parlamento fue su sentada de 243 días para instar a los parlamentarios a elegir un presidente. ¿Qué le enseñó esa experiencia?

Mucho. En primer lugar, rompí el techo de cristal y demostré que una mujer puede hacer una sentada con la misma eficacia y fuerza que un hombre. Creo que era la primera vez que una mujer decidía hacer una sentada en el Parlamento, día tras día,

durante 243 días. En segundo lugar, para mí fue fundamental demostrar la importancia de respetar y cumplir con los plazos de la Constitución. No se puede simplemente extender el plazo para elegir un presidente solo porque no le conviene a un partido. Lo mismo va a suceder ahora en las elecciones. Tenemos elecciones en un par de meses y la gente sigue preguntando si podemos tener elecciones o no, y esto es ridículo. Si las elecciones son el 10 de mayo, deberían ser el 10 de mayo. Punto. Entonces, el presidente del Parlamento, Nabih Berri, llegó muy lejos para silenciarnos y no mostrar la sentada.

¿Cuál es su balance de la legislatura como diputada por el Cambio?

El bloque del Cambio no llegó en 2022. La demanda de cambio comenzó en 2013, cuando unas 50 personas decidieron que ya era suficiente, que no se podía tirar la basura a un vertedero sin una estrategia. En 2015, surgió el movimiento "Apesta" con unas 200 personas que se negaban a ver basura en las calles. El Cambio empezó a crecer en número porque la gente no quería aceptar la forma en que los partidos tradicionales funcionan. En 2019, millones de personas salieron a las calles. En 2022, fue la primera vez que la gente decidió cambiar los partidos tradicionales y dar apoyo a 12 personas del bloque del Cambio en el Parlamento. Creo que, en 2026, aunque no sean los mismos diputados, el movimiento por el Cambio continuará. Podría evolucionar hacia algo diferente, pero está ahí, existe, lo sentimos. La gente ya no acepta ciegamente a los partidos convencionales como antes, y todos los partidos están cambiando su retórica porque quieren complacer a la gente que les exige responsabilidades. Antes no hacían mucha campaña ya que no sentían la necesidad. Ahora, en 2026, y de cara a prepararse para

las elecciones, se puede ver que todos intentan reformar y reestructurar sus partidos. Así que, si no pasa nada, al menos este cambio está sacudiendo los cimientos de todos los partidos.

Cuatro años después, algunas personas se sienten decepcionadas con el desempeño de los parlamentarios por el Cambio.

Veo la decepción en la gente. Querían que avanzáramos más rápido, que hiciéramos más. Nosotros también estamos frustrados, porque queríamos lo mismo. Ahora bien, por desgracia, cuando se está en el poder, las cosas avanzan con lentitud. Hemos logrado muchos cambios, y hemos impedido que den por sentada la voluntad de los libaneses, que hagan tratos a su costa. Estuvimos presentes en todas las discusiones para luchar contra la aprobación de leyes que no benefician a la ciudadanía. Sin embargo, no se va a juzgar a los responsables, no se les va a exigir que rindan cuentas. Ojalá se pudiera. Quiero ver a todos aquellos que robaron el dinero del país, que estuvieron involucrados en la explosión de Beirut en la cárcel. Necesitamos detener la corrupción, eso llevará tiempo porque las cosas van muy lentas. No creo que llegue antes de 10 años.

Usted ha sido miembro del Parlamento durante la peor crisis económica que Líbano haya experimentado, el bloqueo político más prolongado y la última guerra devastadora.

Es muy frustrante ver que fuimos incapaces de presionar al gobierno para que llegara a un buen acuerdo porque el Parlamento está dividido y porque tenemos diputados de Hezbolá que estaban a favor de la guerra, que decidieron ir a la guerra sin consultar. Más tarde, con el acuerdo del alto el fuego [En noviembre de 2024, Israel y Líbano firmaron un acuerdo de alto el fuego tras 13 meses de combates entre el ejército israelí y Hezbolá a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023], no se nos preguntó, no participamos en la negociación, no sabíamos qué incluiría, y ahora estamos pagando las consecuencias, porque en el acuerdo se afirmó que Israel tiene derecho a defenderse y está aprovechando cualquier oportunidad para hacerlo.

Este partido que nos llevó a la guerra y quienes participaron en la negociación son responsables de alguna manera, porque tomaron una decisión unilateral, que no representa la opinión de toda la población del país.

Ahora el tema principal en la agenda es el desarme de Hezbolá.

Vinimos a construir un Estado, y este solo se puede construir con un solo ejército, un solo presidente y un solo gabinete. Me niego siquiera a discutir la cuestión del desarme con Hezbolá. Creo que debería haber sucedido ayer, no hoy. Estoy a favor de la rendición total de Hezbolá al gobierno y al ejército. Esta tontería de si entregarán o no las armas debería cesar. Estoy completamente en desacuerdo con esta discusión, y todos los pretextos que dan de que podría darse una guerra civil o disturbios en el país no son válidos. Es inaceptable. Todos somos un solo pueblo que quiere vivir bajo la Constitución que nos une.

El país lleva más de un año bajo un acuerdo de alto el fuego, pero los ataques continúan a diario y la gente sigue muriendo. ¿Cómo trabajan en el Parlamento para detenerlo?

La decisión es ejecutiva, todo está en manos del gabinete ministerial y del presidente. En cuanto a la asignación de fondos y el apoyo a las personas que han perdido sus hogares, creo que el Parlamento ya ha actuado ofreciendo incentivos, rebajando impuestos y otorgando préstamos a la población del Sur. Todos entendemos que necesitamos reconstruir el Sur, porque cada parte pertenece a Líbano y no cederemos ni un solo metro cuadrado del país. Pero al mismo tiempo, queremos que Hezbolá coopere y ponga todas sus capacidades al servicio del ejército libanés. No estamos de acuerdo con que Israel viole el alto el fuego a diario. La única salida es fortalecer al presidente y al primer ministro para que utilicen todas sus influencias y obtengan el apoyo de la comunidad internacional para presionar a Israel a retirarse.

Cuando fue elegida, las principales luchas de los diputados por el Cambio eran la crisis económica,

"Lamentablemente, no se puede dejar de lado Líbano ni protegerlo de la influencia de la guerra que se está librando en la región"

la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas tras la explosión del puerto. ¿Termina la legislatura con la sensación de que estos asuntos siguen pendientes?

La rendición de cuentas será prioritaria en la próxima legislatura. La primera vez, los diputados por el Cambio vinieron a frenar la corrupción. Nuestro mayor enemigo y nuestra mayor tarea fue impedir que Hezbolá creciera y se apoderara del Estado. Así han sido estos primeros cuatro años. Creo que los próximos cuatro se centrarán en la rendición de cuentas, que debe ser uno de los principales impulsores de nuestro mandato en el Parlamento. Ahora que Hezbolá va a ser desarmado, el Estado va a recuperar su poder.

A los pocos días de hacer la entrevista, empezaron los ataques de Israel sobre Líbano, en su ofensiva contra Hezbolá. Contactamos con Najat Saliba por teléfono.

La guerra ha vuelto a Líbano. Ya son casi 1.250 muertos en apenas un mes y más de un millón de personas desplazadas.

Desafortunadamente, volvemos al punto de partida. Hezbolá está usando los misiles que escondió en Dahie [los suburbios sureños de Beirut] y al norte del río Litani, y probablemente en algunos túneles al sur del Litani que el ejército libanés no pudo encontrar. Los están usando para relanzar la guerra desde Líbano a expensas del pueblo libanés y, por supuesto, en beneficio de Irán. No están haciendo nada para beneficiar al país. Así que esto perjudica los esfuerzos del gobierno que estaba intentando ganar y fomentar la confianza entre el Estado y otros socios, amigos y aliados en el mundo. Sin embargo, ahora, con todo lo que está sucediendo, especialmente el lanzamiento de drones a Chipre y de misiles desde el sur y el norte de Líbano hacia Israel, se están impidiendo estos esfuerzos

del gobierno y volvemos a un estado de guerra. Lamentablemente, no se puede dejar de lado Líbano ni protegerlo de la influencia de la guerra que se está librando en la región.

Antes de la guerra, se intentó desarmar a Hezbolá, pero la actual ofensiva militar israelí parece haber devuelto al país al punto de partida en este asunto. Israel ha declarado que su objetivo es desarmar a Hezbolá y ha amenazado al gobierno libanés por no hacerlo. ¿Qué capacidad tiene el gobierno libanés para desarmar a Hezbolá?

Parece que no se puede frenar en absoluto a Israel, nadie en el mundo puede detenerlo. Desafortunadamente, se han mantenido firmes con el gobierno libanés y le piden que actúe para desarmar a Hezbolá y recuperar la autoridad total de los territorios libaneses. Esto no es fácil considerando que las fuerzas armadas libanesas están demasiado dispersas a lo largo de la frontera y en el sur, y ahora se les pide que realmente lleven a cabo el desarme en el norte de Líbano. Israel es muy, muy fuerte. Cuenta con el apoyo de los estadounidenses y está utilizando todas sus fuerzas para imponer todas las condiciones al gobierno libanés.

Una de las principales acciones del gobierno libanés ha sido aprobar una extensión del mandato del Parlamento de dos años.

La prórroga de dos años es inconstitucional. No contribuye a la construcción de un Estado en el país. Simplemente prolonga la vida del *establishment* que se ha dedicado a paralizar y destruir el país. He votado en contra rotundamente y procederemos a impugnar esta decisión. También estoy totalmente a favor de construir un Estado y de elaborar o aplicar la Constitución para que la situación se normalice. Desafortunadamente, aun así han logrado reunir la mayoría para aprobar la ley propuesta [de extensión]/.



Gran angular



- 14 MARRUECOS, LA APUESTA POR EL EJE GEOECONÓMICO REGIONAL**
Rachid el Houdaigui
- 18 ELECCIONES LEGISLATIVAS EN MARRUECOS: ¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EL 23 DE SEPTIEMBRE?**
Saloua Zerhouni
- 24 SÁHARA OCCIDENTAL, AUTONOMÍA Y CREDIBILIDAD: DE LA GUERRA FRÍA A TRUMP**
Bernabé López García
- 28 MARRUECOS, UNA ECONOMÍA A DOS VELOCIDADES**
Zaynab El Bernoussi
- 32 EL MOVIMIENTO GEN Z 212 Y LA PRIVACIÓN EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN DIGITAL**
Isabel Ruck

Manifestación impulsada por el Movimiento Generación Z 212. Rabat, 2 de octubre de 2025./ABU ADEM MUHAMMED/ANADOLU VIA GETTY IMAGES

Gracias a su posición geográfica, su importancia económica y sus condiciones de seguridad, Marruecos podría convertirse en un eje regional que conecte los flujos Norte-Sur, Sur-Sur y Este-Oeste.

Rachid el Houdaigui, Policy Center For The New South, Rabat.

MARRUECOS, LA APUESTA POR EL EJE GEOECONÓMICO REGIONAL

La política exterior de Marruecos atraviesa una transición estructural influida por la policrisis mundial, la diversificación de sus alianzas y la afirmación de nuevas opciones estratégicas. La centralidad otorgada a las nociones de "hub", "plataforma" o "corredor" refleja un desplazamiento semántico y funcional en el discurso nacional, que concede más prioridad a las consideraciones geoeconómicas mientras mantiene los fundamentos geopolíticos y de seguridad del interés nacional. Se trata, por tanto, de una evolución estructural que marca el paso de una política exterior de consolidación soberana interna (1958-1999) (R. El Houdaigui, 2003) a una política exterior de integración y proyección geoeconómica (desde el año 2000).

En el centro de esta mutación estructural se despliega una visión estratégica a largo plazo cuyo objetivo es posicionar a Marruecos como eje geoeconómico regional que conecte los flujos Norte-Sur, Sur-Sur y Este-Oeste. Su credibilidad se fundamenta en la solidez de sus logros institucionales y relacionales acumulados progresivamente. No obstante, el mantenimiento de esta trayectoria depende de la capacidad del Estado para preservar su coherencia frente a la volatilidad de los desafíos y la complejidad de los retos internacionales.

LA LÓGICA ESTRATÉGICA DE MARRUECOS COMO EJE

El contexto mundial ofrece, en efecto, una ventana de oportunidad sistémica favorable para países como Marruecos. La globalización y la política internacional

han experimentado una fase de reestructuración de las cadenas de valor y las alianzas bajo el efecto de las rivalidades geopolíticas, la competencia económica, la protección de los corredores y el control de los recursos energéticos y críticos (UNCTAD, 2023; OMC, 2025).

Desde nuestro punto de vista, la planificación de los intercambios se está rediseñando progresivamente en torno a tres polos con abordajes competitivos: el *de-risking* radical y el *friendshoring* estadounidense; la autonomía estratégica y el *nearshoring* europeo, y el *nearshoring* indirecto chino a través de la deslocalización en los mercados occidentales vecinos. Estas tendencias principales refuerzan los espacios intermedios, los cruces de flujos, en los que Marruecos está capacitado para desempeñar un papel de interfaz estratégica entre bloques competidores, siguiendo una dinámica comparable a la de Turquía o México. Si bien esta ambición aún no se ha formalizado de manera explícita en un único documento oficial, la convergencia del relato diplomático, las orientaciones estratégicas y las decisiones de la política pública reflejan una dinámica asumida hacia esta función de eje. El reconocimiento externo por parte de actores internacionales viene a consolidar esta trayectoria y le confiere un alcance sistémico.

La configuración geoeconómica de Marruecos sigue siendo, sin embargo, muy vertical debido a su interdependencia histórica con Europa y Estados Unidos. Europa es su primer socio comercial (el 62% del comercio exterior), lo que condiciona en gran medida los flujos de inversión y de personas, así como su inserción en las cadenas de valor industriales. En paralelo, Estados



Presentación de la "Junta por la paz" para Gaza, impulsada por Estados Unidos con el fin de gestionar la situación en la Franja de Gaza tras el alto el fuego acordado entre Hamás e Israel. Entre los países participantes se encuentra Marruecos. Davos, 22 de enero de 2026. /CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES

Unidos se impone como el principal socio estratégico y en materia de seguridad, una posición reforzada por el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara en 2020, lo que ha abierto nuevas perspectivas al integrar a Marruecos como "un *hub* regional de negocios e industrial" (Departamento de Estado de EEUU, 2025). Estas relaciones consolidadas crean, no obstante, nuevas formas de dependencia normativa, tecnológica y de capital respecto a Europa y Estados Unidos, que no están exentas de riesgos para los flujos comerciales. Por efecto acumulativo, las tensiones geopolíticas con Argelia y la parálisis de la Unión del Magreb Árabe privan a Marruecos de un *hinterland* regional y reducen la posibilidad de cualquier integración horizontal. De este modo, prolongan y refuerzan su inserción vertical en los flujos mundiales.

La ecuación estratégica que Marruecos se esfuerza por resolver prácticamente desde principios de la década de 2000 consiste en contener su dependencia estructural y compensar la falta de integración regional mediante una dinámica de diversificación hacia el Sur Global. En concreto, la integración africana (es decir, la Zona de Libre Comercio Continental Africana, ZLECAF) y el desarrollo de alianzas con China y las grandes potencias emergentes permiten atenuar estas limitaciones en beneficio de una apertura más horizontal, lo que conduce a la configuración progresiva del estatus de eje regional.

Si bien este esquema no constituye tanto una ruptura con los marcos existentes –especialmente el espacio euromediterráneo, reforzado, por cierto, por el nuevo Pacto para el Mediterráneo– como una inflexión, requiere, no obstante, un dominio preciso de los equilibrios y un esfuerzo de adaptación del dispositivo diplomático.

A la luz de estos cambios, se perfila una doble estrategia de agregación que consiste, por una parte, en federar alianzas heterogéneas y, por otra, en integrar los dispositivos de conectividad nacionales con los mecanismos regionales e internacionales. En lugar de someterse a lógicas exclusivas de alineación e interdependencia, este enfoque permite articular simultáneamente el marco normativo y geoeconómico europeo, el reconocimiento estratégico estadounidense, la diversificación estructural de la oferta china y la dinámica estructurante de la integración africana. Su flexibilidad permite preservar los márgenes de maniobra de la política exterior marroquí, al tiempo que persigue su objetivo de triangular los flujos estratégicos, diplomáticos y económicos complementarios entre la Unión Europea y África, entre China, Estados Unidos y Europa, y entre diferentes Estados de la África atlántica.

Esta capacidad de triangulación constituye el núcleo de la trayectoria del eje geoeconómico regional. Asimismo, da fe de una orientación desprovista de cualquier pretensión de dominación o hegemonía regional. Refleja, por el contrario, una función de intermediación estratégica. Por lo tanto, la visión debe entenderse como una respuesta a las necesidades de la modernización socioeconómica de Marruecos y como un esfuerzo de adaptación a una multipolaridad basada en la utilidad funcional de los actores estatales.

La movilización de los países del Golfo, a través de mecanismos de financiación bilaterales o triangulares, consolida el papel de Marruecos como interconexión estructurante hacia el África subsahariana

LOS PILARES DE UN EJE REGIONAL EN CONSTRUCCIÓN

La evolución de la posición de Marruecos pone de manifiesto una línea de actuación en constante evolución orientada a transformar la renta geográfica en una posición geoeconómica atractiva en los ámbitos afroatlántico y euromediterráneo. Si bien la diplomacia garantiza la conectividad institucional y normativa a escala internacional, el desarrollo económico y competitivo del territorio nacional constituye el mecanismo mediante el cual la renta geográfica se convierte en una palanca geoeconómica. Estas dos dinámicas complementarias convergen hacia el objetivo de convertir a Marruecos en un eje regional central, donde la "sobrevitalidad" Norte-Sur se vea atenuada por una asociación Sur-Sur que, aunque se enfrenta a las incertidumbres propias del largo plazo, se basa, no obstante, en parámetros de acción estructural.

La capacidad de acción de Marruecos se apoya en su excepcional posición geográfica, situada en la confluencia de tres espacios estratégicos de recursos: Europa, África y el Atlántico. Además, esta posición se ve realzada por un discurso diplomático que utiliza las figuras del "puente", el "hub", el "país encrucijada", la "interfaz" o incluso el "nexo de unión". De este modo, el discurso actúa como una palanca de competitividad, a través de la promoción de la utilidad de Marruecos para la seguridad del abastecimiento y la resiliencia de las cadenas de valor. Su fuerza y credibilidad se derivan del reconocimiento del valor del territorio nacional, en primer lugar gracias a infraestructuras operativas, como el puerto Tanger Med (2007), la estrategia de diversificación industrial iniciada en 2005, la plataforma financiera panafricana Casablanca Finance City (2010), las conexiones regionales existentes, en particular las redes eléctricas con España, y la integración efectiva de Marruecos en las cadenas de valor automovilística y aeronáutica euromediterráneas. Esta dinámica se verá reforzada por la inauguración de los puertos de Nador West Med y Dajla Atlántico, en 2026 y 2028 respectivamente, junto con el impacto de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible para 2030, la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde para 2050 y la estrategia de desarrollo digital Digital Morocco 2030. Por último, el proyecto de gasoducto africano atlántico (Nigeria-Marruecos) consolidará el corredor de seguridad y desarrollo afroatlántico.

Si bien la posición geográfica y su desarrollo económico constituyen tanto las ventajas como las limitaciones de las ambiciones geoeconómicas de Marruecos, la conectividad institucional y normativa a escala internacio-

nal permite regularlas, afianzarlas e incluso transformarlas en palancas de ventajas competitivas. En este sentido, el ministro marroquí de Industria y Comercio ha señalado que "el 77% de los intercambios comerciales de Marruecos se realizan con países que han suscrito acuerdos de libre comercio con el Reino" (MAP, 2023). El Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (1996) y el Estatuto Avanzado (2008) refuerzan la convergencia normativa. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (2004) y la adhesión a la iniciativa china de la Franja y la Ruta (2017) ofrecen a Marruecos oportunidades de integración en las cadenas de valor mundiales. La adhesión a la ZLECAF (2018) y la iniciativa atlántica marroquí (2023), destinada a integrar a los países sin litoral del Sahel en los flujos atlánticos, consolidan el arraigo africano de la economía nacional. Los acuerdos bilaterales, en particular el Tratado de Libre Comercio con Turquía (2004), o los partenariados con la India, Brasil y Rusia, refuerzan la seguridad jurídica y el atractivo económico del Reino. Por otra parte, la movilización de los países del Golfo, a través de mecanismos de financiación bilaterales o triangulares, consolida el papel de Marruecos como plataforma estratégica hacia el África subsahariana.

Asimismo, el estatus de eje no podría ser efectivo sin el pilar de la seguridad, en una región que se enfrenta a grandes necesidades en materia de protección y seguridad marítima. Marruecos se ha convertido progresivamente en un actor productor y exportador de seguridad en los espacios "gibraltareño", afroatlántico y mediterráneo occidental, a través de cuatro vectores de acción complementarios. El primero se enmarca en la cooperación militar multilateral, en particular en el marco del Diálogo Mediterráneo de la OTAN, de la iniciativa 5+5 Defensa y de las relaciones euromediterráneas. El segundo se refiere a la participación en ejercicios militares conjuntos, principalmente African Lion, Flintlock e Eager Lion. El tercero se centra en la gestión de las amenazas transnacionales a través de Frontex y las patrullas mixtas con España y el Centro de Vigilancia del Tráfico Marítimo (CSTM) en el estrecho de Gibraltar. Finalmente, el cuarto vector se centra en la cooperación de seguridad africana, que se plasma sobre todo mediante la gestión del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (Maritime Rescue Coordination Center, MRCC), responsable de la zona nacional y regional (norte y oeste de África), así como la iniciativa marroquí de crear y dirigir el Centro Africano de Cooperación Policial (CACP) de Salé.

Si bien estos pilares acreditan la solidez creciente del proyecto de eje, la cuestión de su resiliencia a largo plazo, su sostenibilidad y su estabilización sigue siendo central.

ESTABILIZAR EL EJE REGIONAL ANTE LOS DESAFÍOS ESTRUCTURALES

La consolidación y la credibilidad del papel de eje dependen de la capacidad de los poderes públicos para actuar como amortiguadores de los efectos de tres grandes desafíos.

El proyecto de Marruecos de convertirse en un eje regional está condicionado por la eficacia de un desarrollo

El proyecto de Marruecos de convertirse en un eje regional depende de la eficacia de un desarrollo territorial nacional inclusivo. Actualmente, tres regiones concentran el 60% de la IED y el 45% de la población, lo que pone de manifiesto fuertes disparidades territoriales y sociales

territorial nacional inclusivo. Actualmente, tres regiones concentran aproximadamente el 60% de la inversión extranjera directa (IED) y el 45% de la población, lo que pone de manifiesto, a este nivel y más allá, grandes disparidades territoriales y sociales (informe anual 2024 del CESE). En este contexto, la proyección geoeconómica marroquí debe poder concretarse bajo ciertas condiciones. Esto requiere la puesta en marcha de una estrategia impulsada por un posicionamiento centrado en la inclusión socioeconómica, en beneficio de las poblaciones y los territorios. La ambición de convertirse en un *hub* basado en la conectividad internacional y el atractivo de la IED es, por sí sola, insuficiente para alcanzar el objetivo esperado. La consolidación del desarrollo conjunto de las regiones del país mediante la integración del tejido productivo es un imperativo, fuente de mejora de las condiciones de vida tanto en zonas rurales como urbanas. En consecuencia, el enfoque estratégico debe basarse en el alineamiento de la ambición nacional y la transformación del tejido productivo como factor de cohesión social. La materialización del proyecto de eje regional sigue dependiendo, por tanto, de la consideración y la efectividad de dicho alineamiento.

La estabilidad regional constituye una condición previa para garantizar la seguridad de los flujos y el atractivo de las inversiones. Sin embargo, la ruptura estratégica con Argelia, combinada con una creciente inestabilidad en el Sahel, ejerce una presión en materia de seguridad sobre Marruecos y sobre el ritmo de su proyecto geoeconómico, hasta el punto de concentrar los recursos financieros y políticos en las prioridades de seguridad y defensa, en detrimento de las ambiciones de infraestructura y conectividad. Sin embargo, esta realidad no constituye un obstáculo estructural, sino más bien una especie de contratiempo estratégico que, por lo demás, queda contenido por la disuasión estratégica y diplomática. En efecto, Rabat dispone de recursos suficientes y de un margen de maniobra considerable que le permiten asegurar la puesta en marcha progresiva de su proyecto de eje regional. Por otra parte, no es contradictorio afirmar que la normalización de las relaciones entre Argelia y Marruecos y el relanzamiento de la integración regional horizontal aportan coherencia, en la medida en que el planteamiento marroquí es menos exclusivo y está profundamente comprometido con el ideal magrebí. A este respecto, el rey Mohamed VI ha recordado el compromiso de Marruecos con "el relanzamiento de la Unión del Magreb, sobre la base del respeto mutuo, la cooperación y la complementariedad entre sus cinco Estados miembros" (31 de octubre de 2025). En cambio, en una lógica de *realpolitik*, el consenso estratégico en torno al reparto político del liderazgo es la condición *sine qua non* para

la estabilidad regional. Es probable que el compromiso decidido de la diplomacia estadounidense cree las condiciones favorables para el diálogo, gracias a su mediación y su implicación en el proceso de resolución de la cuestión del Sáhara, basado en la autonomía.

Por último, en relación con las relaciones históricas con los países occidentales y con las recientemente estructuradas con China surgen ciertas cuestiones imprevisibles. La proliferación normativa europea transforma el acceso al mercado en una condicionalidad reglamentaria, que exige a los socios un esfuerzo de adaptación instantáneo y permanente. Las relaciones con Estados Unidos, aunque prioritarias para Marruecos, crean, por efecto rebote, una mayor asimetría política, reforzando la capacidad estadounidense de ejercer influencia económica, normativa y de seguridad. La oferta china de diversificación geoeconómica, por muy oportuna que sea, conlleva el riesgo de que Marruecos sea percibido como una "plataforma gris" y, por consiguiente, como una variable de ajuste de la dualidad comercial mundial. En este proceso, la polarización entre China y Estados Unidos, bajo el efecto de medidas y contramedidas, genera una incertidumbre estructural que debilita la previsibilidad de los intercambios y aumenta el riesgo de fragmentación de las cadenas de valor.

Por otra parte, las lecciones extraídas de las tensiones surgidas con la UE y de los periodos de enfriamiento de las relaciones entre Marruecos y Estados Unidos, así como de la compleja trayectoria de ciertas negociaciones chino-marroquíes, ponen de manifiesto la importancia de la agilidad diplomática y de la seguridad jurídica para la resiliencia estratégica. La agilidad consistiría en mantener a raya los riesgos vinculados a estas limitaciones aprovechando, al mismo tiempo, las oportunidades favorables para la consolidación del estatus de eje regional. Pero sin seguridad jurídica, la frontera entre limitaciones y oportunidades sigue siendo difusa e incierta. Esta cuestión, de hecho, se planteó en los debates de la 15.ª sesión del Consejo de Asociación entre Marruecos y la UE (29 de enero de 2026).

CONCLUSIÓN

El eje geoeconómico regional no es ni *storytelling* ni una moda diplomática, sino una estrategia de supervivencia del Estado sin pretensión alguna de dominación regional. Si se confirman las tendencias actuales y se preservan los equilibrios estratégicos, el horizonte de consolidación del estatus de eje marroquí puede situarse razonablemente a principios de la década 2040-2050, coincidiendo con la madurez operativa de los grandes proyectos de infraestructura y energía que se están llevando a cabo./

En las elecciones legislativas de 2026, está en juego la capacidad del sistema político para restaurar su credibilidad y demostrar que los comicios pueden ser un instrumento eficaz para transformar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Saloua Zerhouni es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Mohammed V de Rabat.

ELECCIONES LEGISLATIVAS EN MARRUECOS: ¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO EL 23 DE SEPTIEMBRE?

El 23 de septiembre de 2026, Marruecos celebrará sus sextas elecciones legislativas bajo el reinado de Mohamed VI y las cuartas desde la reforma constitucional de 2011. Esta reforma, impulsada en el contexto de las movilizaciones del Movimiento 20 de Febrero, revitalizó la esperanza de una democratización tras el fracaso de la alternancia "otorgada" de 1998. Más allá de la esperanza que suscitó, la nueva Constitución reforzó los poderes del Parlamento y del gobierno, y amplió los espacios de participación política, así como la esfera de los derechos y libertades, tanto individuales como colectivos.

Por otra parte, el reinado de Mohamed VI se caracteriza por la periodicidad en la organización de las elecciones y por la adopción de marcos jurídicos y normativos con el fin de regular su desarrollo. Esta dinámica también ha favorecido que la representación de las mujeres y los jóvenes en la Cámara de Representantes haya mejorado.

A pesar de la dinámica constitucional y la regularidad de las citas electorales, estos cambios no han conducido ni a una democratización efectiva ni al surgimiento de élites políticas capaces de poner en marcha reformas estructurales que respondan de manera relevante a las expectativas sociales. Los marroquíes jóvenes y no tan jóvenes siguen movilizándose fuera de las urnas para reivindicar mejoras en materia de educación, sanidad, acceso a la justicia y empleo, así como una reducción de las diferencias sociales y territoriales. Esta brecha revela los límites de una institucionalización del juego electoral que, si bien refuerza la estabilidad del régimen, tiene dificultades para producir políticas públicas que sean a la vez eficaces e inclusivas.

De cara a las legislativas de 2026, surge una cuestión central: ¿estas elecciones marcarán una diferencia o se inscriben en la continuidad de una secuencia electoral en la que los actores se renuevan y los roles se redistribuyen sin que se alteren ni el escenario ni las reglas de la contienda? ¿Qué dinámicas de poder, legitimidad y acceso a los recursos políticos se ponen en juego a través de este ciclo electoral? Este artículo aborda las elecciones legislativas de 2026 a través de tres dimensiones complementarias: la tensión persistente entre la dinámica de democratización y las lógicas de consolidación autoritaria; las recomposiciones de los partidos y la circulación controlada de las élites; y, finalmente, la abstención electoral y la desconfianza institucional.

¿DEMOCRATIZACIÓN O RESILIENCIA AUTORITARIA?

Desde la década de 1990, la cuestión electoral ocupa un lugar central en el debate sobre la democratización. Bajo el reinado del difunto Hasán II, el régimen adoptó dos reformas constitucionales (1992 y 1996) en un contexto de negociación con la coalición de partidos de la oposición llamada *Kutla*, que incluía, entre otros, la Unión Socialista de las Fuerzas Populares (USFP), el Partido de la Independencia (PI) y el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS). Las elecciones legislativas celebradas en 1997 supusieron un avance en materia de concertación, diálogo, transparencia y neutralidad de la administración.

Estas reformas no permitieron un triunfo electoral de los partidos de la oposición; únicamente brindaron la



Un grupo de turistas pasa ante un puesto callejero adornado con banderas marroquíes, en una calle situada entre la mezquita Kutubía y la plaza de Yemaa el Fna./RAQUEL MARIA CARBONELL PAGOLA/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

oportunidad al líder socialista Abderramán Yusufi de formar un gobierno de compromiso y reforma. Desde esta "alternancia otorgada desde arriba", sigue sin resolverse la cuestión de si las reformas políticas iniciadas por el régimen pretenden reforzar la liberalización del sistema para asegurar su pervivencia, o si constituyen una etapa en el proceso de democratización. Dicho de otro modo: ¿estas elecciones se inscriben en una lógica de reajuste y control, o reflejan una dinámica de transformación estructural del sistema político? Para responder a esta pregunta, conviene repasar la bibliografía dedicada a las elecciones en regímenes no democráticos e híbridos, así como los estudios que abordan la experiencia marroquí.

En términos generales, la bibliografía sobre las elecciones es abundante y destaca las múltiples funciones de estas instituciones según las configuraciones de poder. En los regímenes democráticos, se consideran tradicionalmente como un mecanismo de competencia que permite seleccionar a los gobernantes (Schumpeter, 1942), o como un "mercado político" estructurado por la racionalidad de los electores y los partidos (Downs, 1957). Según algunos investigadores, constituyen un mecanismo institucionalizado de incertidumbre que garantiza la posibilidad de una rotación pacífica del poder.

Por el contrario, en los regímenes no democráticos e híbridos, las elecciones no implican necesariamente

una competición equitativa ni una alternancia efectiva. Numerosos estudios definen estos regímenes como "autoritarismos electorales", en los que los comicios sirven para consolidar el poder de los dirigentes, cooptar a las élites y contener a la oposición, e incluso a segmentos más amplios de la sociedad (Boix y Svobik, 2008; Magaloni, 2006; Gandhi y Przeworski, 2006; Gandhi, 2008; Wright, 2008). En estas situaciones, las elecciones constituyen también un instrumento eficaz de distribución de los recursos y los beneficios vinculados al poder dentro de las redes clientelares de los dirigentes.

Desde esta perspectiva, las elecciones pueden ser percibidas como un mecanismo más legítimo de acceso a los cargos políticos, basado en los esfuerzos individuales de movilización de los votantes (Lust-Okar, 2006; Blydes, 2008). Así, lejos de ser un vector de democratización, permiten a los regímenes no democráticos seleccionar a las élites más influyentes o más "populares", al tiempo que les ofrecen los incentivos necesarios para mantenerse activas y leales. De este modo, las elecciones contribuyen a prevenir la pasividad o la oposición interna y a alinear los intereses de las élites con los del poder establecido, reforzando así la estabilidad del régimen.

Por otra parte, los estudios sobre las elecciones en los regímenes autoritarios subrayan que su impacto en la dinámica de esos regímenes varía según los contextos históricos y políticos. Para Gandhi y Lust-Okar (2009), su influencia depende de un conjunto de factores internos y externos, pero sobre todo de la manera en que se insertan en la lógica y las estructuras de los poderes establecidos. En otras palabras, la capacidad de las elecciones para debilitar o reforzar un régimen depende

En Marruecos, las elecciones se inscriben en un proceso de institucionalización controlada del pluralismo, marcado por la centralidad y la preeminencia de la institución monárquica

menos de su existencia formal que de la función política que se les asigna. Desde esta óptica, pueden constituir una palanca de contestación y cambio o un instrumento de estabilización del poder, según su grado de integración en los fundamentos de la legitimidad política (Gandhi y Lust-Okar, 2009).

La dinámica electoral de Marruecos se inscribe plenamente en estas problemáticas. Los estudios sobre las elecciones muestran que estas no responden ni a un *statu quo* autoritario ni a un proceso de democratización. Se inscriben, más bien, en un mecanismo de institucionalización controlada del pluralismo, marcado por la centralidad y la preeminencia de la institución monárquica. Ya desde los primeros análisis electorales, los estudios de Leveau ponen de manifiesto la articulación entre el poder central y las personalidades locales, así como el papel de estas últimas como relevantes esenciales de la movilización electoral (Leveau, 1976).

Esta lectura fue profundizada por Mohamed Tozy, quien subraya la función reguladora de las elecciones en la gestión del pluralismo partidista. Desde una perspectiva de sociología electoral, Catusse, Bennani-Chraïbi, Santucci y otros autores insisten en que las elecciones en Marruecos constituyen un espacio complejo de movilización, representación y puesta en escena de lo político (Catusse, 2003). Según estos trabajos, el momento electoral contribuye a transformaciones graduales y diferenciadas del orden político y a la redefinición de las condiciones de acceso al juego político para nuevos actores, sin que por ello se cuestionen sus estructuras fundamentales.

Las elecciones legislativas de 2026 no deben interpretarse como un momento de ruptura con las lógicas anteriores, sino más bien como una etapa inscrita en una dinámica de continuidad y ajuste. Por tanto, el desafío central reside en su capacidad para renovar dichos mecanismos al mismo tiempo que se integran las nuevas limitaciones: la recomposición del panorama de partidos, la desconfianza electoral y las transformaciones sociales. Constituyen, así, un momento clave para evaluar la capacidad del régimen para renovar sus mecanismos de legitimación y de regulación del pluralismo, sin cuestionar la arquitectura fundamental del poder.

RECOMPOSICIÓN DEL ESCENARIO DE PARTIDOS Y CIRCULACIÓN CONTROLADA DE LAS ÉLITES

En Marruecos, el ámbito de los partidos sigue estando muy fragmentado y controlado por la monarquía. Santucci (2001) lo califica de "multipartidismo bajo

control", en el que los partidos constantemente se ven sometidos a la presión del poder. La fragmentación del panorama partidista impide la aparición de mayorías parlamentarias y de coaliciones gubernamentales coherentes. Asimismo, contribuye a diluir las responsabilidades políticas, al tiempo que mantiene un cierto equilibrio bajo el arbitraje central del Palacio.

Esta lógica se observa ya desde las primeras elecciones durante el reinado de Mohamed VI, con el nombramiento del tecnócrata Driss Jettú en 2002, y se prolonga con las experiencias gubernamentales lideradas por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) en 2011 y 2016, y posteriormente por la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI) en 2021. Estas configuraciones ponen de manifiesto la capacidad de intervención del poder central en el ámbito de los partidos más allá de las lógicas electorales.

Sin embargo, estas prácticas no son específicas del periodo actual: se remontan a las elecciones organizadas bajo el reinado de Hasán II y de su ministro del Interior, el difunto Driss Basri. A pesar del discurso sobre la neutralidad de la administración y la transparencia del proceso electoral, varios líderes de partidos políticos han mencionado la existencia de instrucciones informales destinadas a limitar su representación en el Parlamento. Este fue, en particular, el caso del PJD en las elecciones legislativas de 1997 y posteriormente en 2011, así como del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM), algunos de cuyos dirigentes afirmaron públicamente haber sido instados a no ganar los comicios.

Así, los mecanismos de control no se limitan únicamente a las fases electorales, sino que se ejercen de manera más difusa: antes, durante y después del proceso. Estos incluyen, especialmente, formas de intervención en los asuntos internos de los partidos, incluidos aquellos calificados como "administrativos", como el RNI.

Si bien las élites de los partidos acceden formalmente al Parlamento y al gobierno, su margen de maniobra sigue siendo limitado. De hecho, las reestructuraciones en el ámbito de estas organizaciones no van acompañadas de una participación efectiva en la toma de decisiones estratégicas, lo que recae en las prerrogativas constitucionales de la monarquía.

Además, la renovación de las élites parlamentarias y gubernamentales no ha permitido traducir la legitimidad electoral en políticas públicas capaces de responder a las expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas.

Cabe destacar que los sectores sociales estratégicos siguen enfrentándose a bloqueos persistentes. La situación de la juventud es un ámbito en el que esto es particularmente visible, ya que la gran mayoría se enfrenta a trayectorias de exclusión. Según el último censo del Alto Comisionado de Planificación (2024), la proporción de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni trabajan, ni estudian, ni reciben una formación sigue siendo elevada (1,7 millones). Los datos recientes del Bank Al-Maghrib confirman una tasa de desempleo del 13% entre los jóvenes de 15 a 25 años, la mayoría de ellos residentes en zonas rurales, lo que acentúa las desigualdades en el acceso a las oportunidades económicas para estos jóvenes en situación de marginación.

TASA DE PARTICIPACIÓN ELECTORAL

Fecha de las elecciones	Inscritos (nº)	Votantes (nº)	Tasa de participación (%)	Votos nulos (%)
1997	12.790.631	7.456.996	58,30	14,5
2002	13.884.467	7.165.206	51,61	15,0
2007	15.546.789	5.700.000	37,50	19,0
2011	13.420.631	4.745.453	45,50	22,3
2016	15.702.592	7.500.000	42,29	12,80
2021	17.509.127	8.786.080	50,18	13,63

Fuente: Ministerio del Interior de Marruecos.

Las desigualdades sociales y territoriales se acentúan cada vez más y ponen en entredicho las promesas de justicia social y desarrollo inclusivo proclamadas en los discursos oficiales de los últimos años. La experiencia del actual gobierno, dirigido por Aziz Ajannuch, ilustra estas limitaciones. Pese a los ambiciosos anuncios en materia de generalización de la protección social o de reforma del Estado social, los resultados siguen siendo desiguales y las políticas emprendidas apenas logran producir efectos perceptibles en el día a día de los ciudadanos.

Por consiguiente, la recomposición del panorama partidista y el movimiento de las élites tras las elecciones legislativas de 2026 se perfilan menos como vectores de transformación que como mecanismos de reproducción del sistema, en el que el acceso al poder no se traduce necesariamente en una redefinición de las relaciones de fuerza ni en una capacidad efectiva para responder a los grandes retos socioeconómicos.

ABSTENCIÓN ELECTORAL Y DESCONFIANZA INSTITUCIONAL

Desde 2002, la abstención electoral –particularmente acusada entre los jóvenes– es una tendencia creciente en Marruecos. Los datos del ministerio del Interior muestran un retroceso significativo de la tasa de participación, que pasó del 58,3% en 1997 al 37,5% en 2007, antes de experimentar fluctuaciones sin recuperar los niveles iniciales (45,5% en 2011; 42,3% en 2016; 50,2% en 2021).

Este descenso en la participación electoral va acompañado, además, de una proporción importante de votos nulos, que alcanzó el 22,3% en 2011. La abstención y el voto nulo se presentan así como formas de expresión de un malestar político más profundo.

En la bibliografía comparativa, este fenómeno se interpreta a menudo como el signo de una falta de confianza en las instituciones representativas (Norris, 2011). En Marruecos, varios estudios y encuestas analizan estos comportamientos y plantean varias razones para explicarlos. En primer lugar, los motivos se articulan en torno a la falta de confianza en los partidos políticos y en los candidatos. Los partidos son percibidos como corruptos, ineficaces y desconectados de

las preocupaciones de la población. En segundo lugar, tienen que ver con la falta de interés por las elecciones, consideradas insignificantes o sin un impacto real en la vida cotidiana. Algunos estudios señalan la convicción de que el voto propio “no cuenta”. De hecho, para comprender la abstención electoral resultaría útil recordar el sentido del voto en regímenes donde las elecciones son ámbitos de competición controlados y donde votar carece de “incentivos” en la selección de quienes van a gobernar y decidir. Esta constatación coincide con los análisis sobre los regímenes híbridos, donde las elecciones, aunque sean regulares e institucionalizadas, tienen dificultades para cumplir plenamente su función de mediación entre gobernantes y gobernados.

En este contexto, la abstención aparece menos como un problema en sí mismo que como el síntoma de una crisis más amplia de la representación política. Revela el debilitamiento del vínculo de confianza entre ciudadanos e instituciones, pero también cuestiona el sentido y la utilidad del voto. Por tanto, el desafío de las elecciones legislativas de 2026 no reside únicamente en el aumento de las tasas de participación, sino en la capacidad del sistema político para restaurar la credibilidad de la oferta electoral y demostrar que las elecciones pueden constituir una palanca efectiva para transformar las condiciones de vida de los ciudadanos.

CONCLUSIÓN

La vida electoral marroquí puede analizarse como una representación teatral en la que el escenario, las reglas del juego y el director permanecen constantes, mientras que los actores, los papeles y las tramas se renuevan en cada ciclo electoral. Los partidos políticos aparecen sucesivamente como protagonistas –portadores de esperanza o de reforma– antes de ser relegados a las bambalinas, sustituidos por caras nuevas dotadas de una credibilidad renovada. El decorado evoluciona –reformas jurídicas, discursos sobre la transparencia, inclusión de las mujeres y los jóvenes–, pero la estructura de la representación permanece estable. El público, por su parte, oscila entre la participación y la distancia crítica; a veces comprometido con la obra, a veces reducido a una posición de espectador ante una trama cuyos resortes fundamentales se le escapan en parte./

COMPROMETIDOS CON EL DIÁLOGO Y LA COOPERACIÓN ENTRE EUROPA Y EL MEDITERRÁNEO

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Aportamos investigación basada en el rigor científico y con un genuino enfoque interdisciplinario e inclusivo sobre la evolución sociopolítica de la región, sostenibilidad, cultura, seguridad, energía, igualdad de género, migraciones, economía...

REDES Y PROYECTOS REGIONALES

Contribuimos al conocimiento mutuo y la cooperación entre países, sociedades y culturas mediterráneas mediante el desarrollo de proyectos y la coordinación de redes de alcance euromediterráneo que integran think tanks y actores de la sociedad civil

Mejor Banca Privada en España

Valor para crear valor

CaixaBank Wealth Management, reconocido por *Euromoney* en el 2026 como **Mejor Banca Privada en España** y **Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España**.

Personas, visión y tecnología, para una gestión patrimonial única.

Gracias a nuestros clientes por hacerlo posible.



La resolución 2797 de octubre de 2025 respalda, por primera vez, conversaciones sin condiciones previas tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos de 2007. ¿Puede entreverse, al fin, una salida a este largo conflicto?

Bernabé López García es catedrático honorario de Historia del Islam contemporáneo en la Universidad Autónoma de Madrid.

SÁHARA OCCIDENTAL, AUTONOMÍA Y CREDIBILIDAD: DE LA GUERRA FRÍA A TRUMP

La resolución 2797 del 31 de octubre de 2025 del Consejo de Seguridad sobre el Sáhara Occidental reconoce por primera vez, para satisfacción de Marruecos, que “una verdadera autonomía podría ser el resultado más factible” para lograr una solución política justa, duradera y aceptable para las partes, basada en la avenencia, con arreglo a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el principio de la libre determinación. Para ello exhorta a las partes, Marruecos y el Frente Polisario, a entablar conversaciones sin condiciones previas tomando como base la propuesta de autonomía que Marruecos presentó en abril de 2007.

Tras esta resolución, un primer encuentro entre las partes ha tenido lugar en Madrid en febrero de 2026 bajo auspicios de la embajada americana. ¿Puede entreverse, al fin, una salida a este largo conflicto?

UNA DESCOLONIZACIÓN RETARDADA

El conflicto del Sáhara Occidental nace en plena guerra fría, en un territorio sometido a una ocupación colonial por una dictadura, la española, que se resistió a descolonizar más allá del tiempo de las descolonizaciones en el continente africano. El Sáhara Occidental era un territorio inmenso, con una extensión equivalente a la mitad de la España peninsular, apenas habitado por tribus nómadas, escasamente sedentarizadas en pequeños núcleos en proceso de urbanización y con un subsuelo poco explotado fuera del descubrimiento de yacimientos de fosfatos en 1963.

Aislado voluntariamente por la dictadura franquista de su entorno regional, no contará en los años cincuenta con núcleos politizados organizados, como los que en Marruecos, Argelia o Mauritania reclamaban la independencia. Pero sí había en esos años en la región aspiraciones a liberar el territorio desde el exterior, como se evidenció en la guerra que el Ejército de Liberación Marroquí (ELN) llevó a cabo en Ifni y en la zona sahariana con el apoyo de algunas tribus locales. Una guerra que sectores de la oposición marroquí, alma del ELN, llevaron a cabo para cuestionar las concesiones hechas por el monarca Mohamed V a Francia y España a fin de obtener una independencia que consideraron incompleta.

Francia, en plena guerra con Argelia, intervino con la operación “Ecouvillon” para ayudar a España en este conflicto que se resolvió en un primer acto con la retrocesión a Marruecos de Tarfaya, la zona sur del Protectorado, límite y muy próxima étnica y culturalmente del Sáhara Occidental. España reaccionó provincializando en 1958 los dos territorios de Ifni y el Sáhara, una decisión que, incluso a ojos del Alto Estado Mayor del Ejército español, en su informe “El Sáhara español y los territorios vecinos” de abril de 1960, fue considerada una medida artificial, hecha “de modo unilateral y sin contar con la población indígena que no está asimilada y sin existir asentada una minoría española que pudiera justificarlo”. Aunque el informe calificaba de firmes los fundamentos jurídicos de la presencia española en la región, era consciente de la fragilidad de los mismos, dadas las circunstancias internacionales imperantes. Convencido de la peligrosidad de las reivindicaciones

marroquíes para España, preconizó lo que había de ser la política establecida en la zona: "una política antimarroquí pero no nacionalista" que alejase a los saharauis del contacto natural con sus vecinos.

Llegado al poder prematuramente por la muerte inesperada de su padre, Hassan II heredó esta cuestión que añadía tensión a su confrontación con la oposición. Temeroso de quedar en minoría en la elección del primer Parlamento de su país, en mayo de 1963 propuso, con el fin de aplacar los reproches de los que calificaba de "demagogos", negociar con España la recuperación de "los territorios del sur" para poder presentarse ante ellos el día de la inauguración de la Cámara como gran estadista y negociador de éxito. La propuesta realizada a través del embajador de España, Manuel Aznar, no recibió el beneplácito del Pardo. Imaginó entonces el monarca aparecer ante el Parlamento como el conquistador de Tinduf, el otro territorio irredento que reclamaba la oposición, pero la operación militar se le volvió en contra, enredándose en la Guerra de las Arenas que le traería para largo la enemistad argelina.

La ONU había empezado a llamar la atención a España por los retrasos en su política descolonizadora. La resolución 2072 de 17 de diciembre de 1965 de la Asamblea General pedía encarecidamente al gobierno español que "adoptase inmediatamente todas las medidas necesarias para la liberación de los territorios de Ifni y del Sáhara español de la dominación colonial y que, con ese fin, emprendiera negociaciones sobre los problemas relativos a la soberanía presentados por esos territorios".

Un año después, la Asamblea requería acelerar el proceso de descolonización de Ifni negociando con Marruecos el traspaso de poderes. Se invocaban para ello las aspiraciones de la población autóctona. En el caso del Sáhara, se hablaba en cambio de un referéndum para la libre determinación que debía celebrarse "de conformidad con las aspiraciones de la población autóctona del Sáhara Español y en consulta con los gobiernos de Marruecos y de Mauritania y con cualquier otra parte interesada".

La política de bilateralización emprendida con España por Hassan II había encontrado nuevos obstáculos. Mauritania, cuestionada en su independencia por Marruecos, había expresado por su parte su reivindicación del Río de Oro, lo que hizo más compleja la tarea descolonizadora.

España, por entonces, se debatía entre las piruetas diplomáticas de Fernando María Castiella contemporizadoras con la ONU y la instrumentalización por el equipo de Luis Carrero Blanco de los jefes de tribu saharauis para mostrar a las Naciones Unidas su voluntad de "continuar la secular unión con España". Es en ese contexto, a finales de la década de los sesenta, cuando surge en el Sáhara Occidental una cierta conciencia libertadora que mostrará el divorcio entre las nuevas generaciones de saharauis que aspiraban a la liberación y los chiujs enredados en las maniobras urdidas por España. El movimiento será cortado de raíz por la represión brutal de una manifestación de protesta en Jatarrambla en 1970, con la desaparición forzosa de su promotor, Mohamed Basiri, que ni la dictadura ni la España democrática nunca se molestaron en aclarar.

A finales de la década de los sesenta, surge en el Sáhara Occidental una cierta conciencia libertadora

El comienzo de los años setenta fue una etapa en la que los países limítrofes del Sáhara intentaron coordinarse en la búsqueda de una salida descolonizadora beneficiosa para todos. En Nuadibou, Tremeccén, Casablanca, Agadir, se produjeron encuentros en la cumbre que no culminaron en una solución común. Las maniobras de España diciendo aceptar la representatividad de la Yema, reconocer al pueblo saharauí como el propietario de sus riquezas y recursos naturales y prometiendo un referéndum cuando los saharauis lo estimasen, acelerarán los contactos intermagrebíes, pero también los choques entre ellos.

Finalmente, ante el temor de la celebración por España de un referéndum "controlado", Hassan II decidirá proponer a España y a la ONU recurrir ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para dirimir los títulos de las distintas partes concernidas.

EL FRENTE POLISARIO Y LA AUTODETERMINACIÓN

De aquel ensayo libertador emprendido por Basiri quedó, en el contexto de la ya languideciente guerra fría y el no menos moribundo nacionalismo árabe, la semilla que plasmó en un movimiento de liberación tardío, el Frente Polisario, en cuya creación en 1973 se fundieron elementos autóctonos herederos de Basiri, jóvenes estudiantes saharauis en Canarias, algún progresista mauritano y un núcleo surgido del movimiento izquierdista marroquí en ruptura con las formaciones políticas de la izquierda tradicional.

En este último grupo destacaba el que habría de ser su primer secretario general, El Uali Mustafa Sayed. Militante inicial en los rangos del PCM, frustrado por su política que consideraba chovinista sobre el Sáhara, publicó en la revista izquierdista marroquí *Anfās*, en diciembre de 1971, el artículo "Nueva Palestina en tierra del Sáhara", en el que reivindicaba la liberación del territorio a través de la lucha armada en el marco de la liberación de los pueblos vecinos. Contrario al posicionamiento de las fuerzas políticas marroquíes que reclamaban la integración a Marruecos del Sáhara, dejaba claro su rechazo a hacerlo "en las condiciones políticas e históricas actuales", es decir, en las de un Marruecos sometido a estado de excepción y en el que la represión sobre las fuerzas progresistas era norma. Buena prueba de ello fue la prohibición de la revista y la persecución y exilio de los integrantes de este grupo.

Amparado primero en Mauritania, más tarde por la Libia de Muamar Gadafi y finalmente por la Argelia de Huari Bumedian, el Frente Polisario se constituirá en portavoz de los saharauis, en concurrencia con un partido fantoche creado por la colonia, el PUNS (Partido

El restablecimiento de relaciones entre Marruecos y Argelia facilitó que, tras un acuerdo entre Marruecos y el Polisario, en 1988 el Consejo de Seguridad adoptase la resolución 621 relanzando el referéndum auspiciado conjuntamente por la ONU y la OUA

de la Unidad Nacional Saharaui). Se hará presente en la zona con acciones armadas y logrará una visibilidad y representatividad notoria con motivo de la visita de la misión que la ONU enviará en mayo de 1975.

El dictamen negativo a Marruecos del Tribunal de La Haya moverá a Hassan II a organizar la Marcha Verde como medio para presionar a España, en el momento frágil del régimen español por la agonía de su dictador, y lograr así el reparto del territorio entre Marruecos y Mauritania.

Desde entonces, un contencioso que desembocó en conflicto armado, opuso a Marruecos y al Frente Polisario que, reagrupando una parte de la población del Sáhara en campamentos en Tinduf, en el sur argelino, proclamó la constitución de una República Árabe Saharaui Democrática (RASD), apadrinada por una Argelia enfrentada a Marruecos desde la Guerra de las Arenas. La RASD, con el apoyo argelino, logró el reconocimiento de la Organización para la Unidad Africana (OUA) y de numerosos países.

Cinco años de conflicto bélico decidieron a Hassan II, tras la dimisión mauritana de la zona sur, a encerrar el Sáhara tras un muro que dividía el territorio, para acabar aceptando en 1981, en la cumbre de la OUA en Nairobi, un referéndum "controlado" que, aunque le costó choques con una oposición interior que le acusó de poner en cuestión la integridad territorial, le permitió seguir aplazando la solución del problema.

El restablecimiento de relaciones de Marruecos con una Argelia en crisis por los bajos precios del petróleo facilitó que, tras un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario, en septiembre de 1988 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptase la resolución 621 relanzando el referéndum auspiciado conjuntamente por las Naciones Unidas y la OUA. Una delegación saharauí se entrevistó con Hassan II en vísperas de la creación de la Unión del Magreb Árabe en 1989.

EL FRACASO DE LOS PLANES DE ARREGLO

Se llegó así al Plan de Arreglo de 1991, al nombramiento de un representante especial para el Sáhara y al establecimiento de la MINURSO, encargada de vigilar la organización del referéndum. Surgirán entonces dificultades para la identificación de los votantes, con obstáculos múltiples interpuestos por Marruecos que buscará abultar un censo que le evitase riesgos. Sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad darán cuenta de dificultades y retrasos en el Plan de Arreglo, que en 1996 llegará a un bloqueo. Con el nombramiento de James Baker III como representante personal de Kofi Anan, el proceso de identificación cobrará impulso a pesar de la falta de confianza entre los oponentes.

Hassan II fallece en julio de 1999 y su hijo, Mohamed VI, hereda un Sáhara en ebullición. Entre sus primeras medidas estará la destitución del ministro del Interior, Driss Basri, responsable del dossier sahariano.

El informe del secretario general al Consejo de Seguridad del 19 de agosto de 2000 constataba el bloqueo del Plan de Arreglo: "Ninguna de las partes ha demostrado disposición alguna de abandonar la mentalidad de 'el ganador se lo lleva todo', ni parece dispuesto a examinar ninguna solución política en que cada parte obtendría algo, pero no todo, de lo deseado y permitiría a la contraparte lograr otro tanto". Tres meses más tarde, un nuevo informe arrojaba la pelota del lado marroquí: "Nuevas reuniones de las partes para buscar una solución política no tendrán éxito, a menos que el gobierno de Marruecos, como Potencia administradora del Sáhara Occidental, esté dispuesto a ofrecer o apoyar alguna restitución de autoridad gubernamental, para todos los habitantes y exhabitantes del Territorio, que sea auténtica, sustancial y en armonía con las normas internacionales".

Aparece entonces la idea de la tercera vía, de una autonomía bajo soberanía marroquí, en el Acuerdo marco que presentó el secretario general en su informe del 20 de junio de 2001. En sustancia, dicho acuerdo era una propuesta de estatuto para el Sáhara que empoderaba a su población a través de órganos ejecutivo, legislativo y judicial con competencia exclusiva en la administración de muy amplias materias locales, tributarias, sociales, educativas, materias primas, infraestructuras, dejando en manos de Marruecos la competencia exclusiva en seguridad nacional y política y defensa exteriores. Bandera y moneda serían las del Reino de Marruecos.

Los saharauis identificados por la MINURSO elegirían un ejecutivo para cuatro años que se encargaría de las competencias definidas. El poder legislativo sería ejercido por una Asamblea, elegida por quienes hubieren residido en el territorio desde el 31 de octubre de 1998 o perteneciesen a una lista de repatriados posteriormente.

El estatuto final del Sáhara Occidental debería someterse a un referéndum dentro del plazo de cinco años para el que estarían habilitados para votar los electores que hubieran residido continuamente en el Sáhara Occidental durante el año anterior. Los gobiernos de Francia y Estados Unidos se prestaban a ser garantes de este acuerdo marco.

Mohamed VI llegó a creer por entonces que el problema estaba resuelto. El 4 de septiembre de 2001 hizo unas declaraciones a *Le Figaro* en las que consideraba arreglado el contencioso y minimizaba el posible rechazo argelino, esperando que el tiempo hiciera madurar las condiciones para un cambio de actitud.

Argelia rechazó este plan, en efecto, por alejarse considerablemente de lo previsto –la libre determina-

ción del pueblo del Sáhara Occidental–, pues el documento privilegiaba un solo criterio, la integración en el Reino de Marruecos, impidiendo una solución mutuamente aceptable. El Polisario, por su parte, se mantuvo en la idea de que la única solución al conflicto estribaba en la aplicación al pie de la letra del Plan de Arreglo.

James Baker persistió en encontrar una nueva fórmula. Después de que en 2002 se barajase, sin éxito, la proposición argelina y del Polisario de partición salomónica del territorio, propuso un "Plan de paz para la libre determinación de los habitantes del Sáhara Occidental", presentado en enero de 2003: el Plan Baker II.

Con respecto a la propuesta de 2001, en los primeros cuatro años tanto el ejecutivo como el legislativo deberían ser elegidos por los inscritos por la MINURSO en elecciones controladas por Naciones Unidas. Los militares de ambas partes deberían ser acantonados, salvo los necesarios para la defensa exterior. Y el referéndum definitivo, antes de cinco años, competiría además de los identificados por la MINURSO, a quienes hubieran residido de forma continuada en el Sáhara Occidental desde el 30 de diciembre de 1999.

Argelia y el Polisario estuvieron de acuerdo con la propuesta. En esta ocasión fue Marruecos el que estuvo en contra por considerar que su soberanía estaba en peligro. Perdió una ocasión de oro para zanjar definitivamente la cuestión a su favor.

UNA AUTONOMÍA EN BUSCA DE CREDIBILIDAD

Se esperaron cuatro años más hasta que en abril de 2007 ambos contendientes depositaron en Naciones Unidas nuevas propuestas. La del Polisario señalaba las pautas del posreferendum: cómo entenderse entre vecinos tras la independencia. La iniciativa de autonomía planteada por Marruecos ofrecía una base a negociar desarrollando el acuerdo marco, sin cuestionar la soberanía marroquí.

En los casi 20 años transcurridos desde entonces, no se ha sabido avanzar un milímetro. Ni autonomía ni referéndum. Ello no obsta para que en la veintena de resoluciones del Consejo de Seguridad posteriores se expresara un adulator aunque retórico "beneplácito por los serios y fidedignos esfuerzos" realizados por Marruecos. Invisibles, sin embargo, salvo una política exterior marroquí cada vez más asertiva, centrada en la marroquinidad del Sáhara.

Todo cambió cuando en diciembre de 2020, a un mes de su salida de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump decidió reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara; como contrapartida, el reconocimiento por Marruecos de Israel. Desde entonces, la subordinación de la acción exterior marroquí a lo que considera su causa sagrada alcanzó límites insospechados, provocando crisis con Alemania, España y Francia para forzarles a hacer declaraciones halagadoras de su iniciativa autonómica ("base más seria, creíble y realista para la resolución de este conflicto" escribió Pedro Sánchez a Mohamed VI) y presionar para salvar una vez más su Acuerdo de Asociación con la UE, en entredicho por el Tribunal de Justicia Europeo apoyando las reclamaciones del Polisario. Pero la credibilidad de una autonomía

Todo cambió cuando en diciembre de 2020, Trump decidió reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara

resulta imposible sin un Estado de derecho, que desmiente una política jacobina y restrictiva de libertades, enmascarada por una política de inversiones e infraestructuras en el Sáhara.

Se llega así a la resolución 2797 del 31 de octubre de 2025 del Consejo de Seguridad. Tiene algo de trágala esta resolución, por la evidencia de su padrino americano. El Polisario ha expresado su malestar por ello. Recibió 11 votos a favor, logrados con *lobbies* interminables, que no pueden interpretarse todos como avales incondicionales a Marruecos; tres abstenciones significativas, China, Rusia y Pakistán; y la sorprendente ausencia de Argelia de la votación.

¿Qué significado dar a la ausencia argelina? ¿Rechazo a la resolución o miedo a decir no ante las consecuencias de los dictados de la era Trump? El Marruecos oficial, eufórico, tomó buena nota y se apuntó en Davos 2026 al pelotón de la Junta de la paz del presidente americano.

Entre tanto, alrededor de 100.000 saharauis siguen malviviendo desde hace 50 años en los campamentos de la hamada argelina y más de 600.000, saharauis y neosaharianos, en las llamadas por Marruecos provincias del sur. Estos últimos, pese al discurso oficial de las inversiones y las infraestructuras, sufren, según la Iniciativa saharauí por el Desarrollo Sostenible y los Derechos Humanos, asociación reciente de saharauis oriundos del territorio, de "importantes deficiencias en infraestructuras básicas y servicios públicos esenciales, como la salud, la educación, el acceso al agua potable, vivienda digna, centros de reinserción y el empleo". Todos ellos, a un lado y otro del muro, esperan que la solución a este viejo problema sea en su beneficio y no de cuantos entienden el Sáhara como inversión o negocio.

Pues, más allá del problema de fondo, autonomía o independencia, lo fundamental es cómo asegurar, en cualquiera de los casos, una vida digna para todos ellos en su tierra y en libertad. Este debería ser el objetivo prioritario de las conversaciones entre las dos partes del conflicto reemprendidas en Madrid en febrero. Hay un documento técnico que amplía la iniciativa marroquí de 2007 como base para los encuentros. Con un articulado detallado. Pero las claves del documento se encierran en unos apartados imprecisos, sobre el mecanismo de nombramiento del ejecutivo, la política de reconciliación, el retorno de los saharauis de Tinduf y los mecanismos de transición. ¿Está Marruecos dispuesto, como reclamaba el secretario general de la ONU en el año 2000, a ofrecer alguna restitución de autoridad gubernamental, para todos los habitantes y exhabitantes del territorio, que sea auténtica, sustancial y en armonía con las normas internacionales? ¿Podrá Marruecos ofrecer esa vida digna y en libertad para todos los saharauis? "*This is the question!*"./

Con una economía de productividad limitada y una cooperación creciente con China, pero todavía dependiente de sus socios occidentales, Marruecos sigue experimentando dificultades económicas y sufre desigualdades crecientes.

Zaynab El Bernoussi es profesora titular de Ciencias Políticas, Global Studies University, Sharjah.

MARRUECOS, UNA ECONOMÍA A DOS VELOCIDADES

La constatación, durante el discurso real de julio de 2025, de que el desarrollo de Marruecos va a dos velocidades nos empuja a preguntarnos cómo un tren así no está también liderado por una economía a dos velocidades. Marruecos es un país de desigualdades flagrantes, como muchos lugares del mundo actual, lamentablemente, pero el aumento de las disparidades adquiere un ritmo cada vez más aterrador.

En este análisis de la economía marroquí, primero daremos cuenta de la situación actual, que consiste en mantener a flote una economía de productividad limitada en un contexto global de gran rivalidad económica y geoestratégica. A continuación, hablaremos de la tendencia –más bien nueva– de la creciente cooperación económica del país con China, en paralelo a una dependencia todavía importante de la economía respecto a sus socios occidentales. Pero incluso con estos importantes avances de los últimos años, el país sigue teniendo dificultades económicas y sufre desigualdades crecientes. Así pues, es importante para la economía marroquí concentrarse en el desarrollo del capital humano e, incluso, de un capital “cívico”.

SITUACIÓN ACTUAL

Se prevé que el crecimiento económico de este año sea del 5%, frente al del año pasado, del 4,6%. Este nivel de crecimiento converge con la tendencia de las economías emergentes del continente, como Egipto o Nigeria.

Cabe señalar, no obstante, que el crecimiento económico en Marruecos ha sido durante mucho tiempo (des-

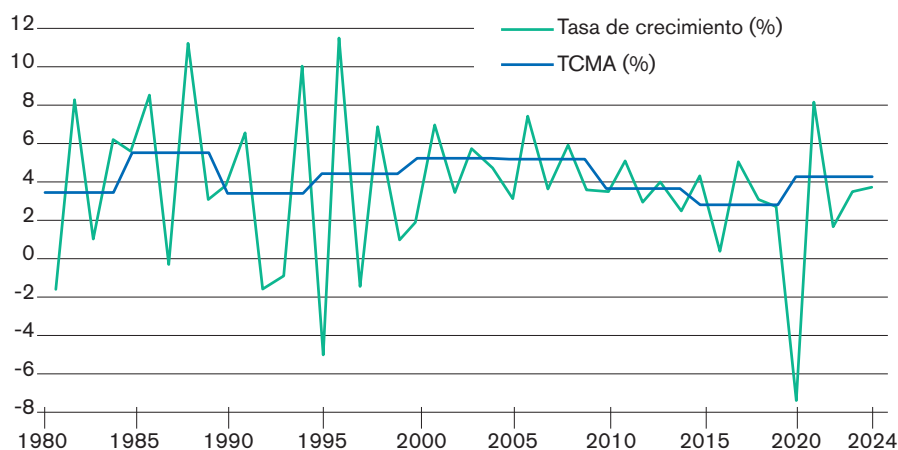
de los años ochenta) muy volátil, debido en gran parte a la dependencia de la agricultura de secano (gráfico 1).

El proyecto de la *marroquinización* de los años noventa tenía como objetivo promover la industria local a través del emprendimiento, lo que ayudó a limitar la volatilidad de la economía y a asegurar algo más de productividad al país.

Sin embargo, en el marco de los proyectos de desarrollo económico, desde las grandes obras de modernización de principios de los años ochenta –orientados a la industrialización y a la restricción de la dependencia socioeconómica de la agricultura–, Marruecos ha vivido grandes convulsiones sociales. Por ejemplo, las repercusiones del éxodo rural, así como la modernización agraria y la dependencia de la importación de trigo blando subvencionado por el Estado, lo que hoy en día posiciona al país como uno de los mayores consumidores de pan y de trigo blando del mundo.

El lanzamiento del Plan Marruecos Verde (PMV) en 2008, con una mayor concreción durante la última década, ha contribuido a revalorizar la aportación de la agricultura a la economía nacional, sobre todo mediante la introducción de técnicas como el riego por goteo para gestionar mejor la escasez de agua, y concentrándose en cultivos comerciales (*cash crops*) como los frutos rojos y el aguacate, que se destinan en gran parte a la exportación. Esta modernización de la agricultura, en efecto, ha ayudado a limitar la imprevisibilidad del mercado nacional, pero también ha tenido repercusiones en la intensificación de la explotación agrícola mediante el uso de recursos freáticos limitados.

Evolución de la tasa de crecimiento y de la TMCA* (1980-2024)



*Tasa media de crecimiento anual

Fuente: <https://medias24.com/2025/07/31/lecture-de-la-trajectoire-de-la-croissance-economique-au-maroc-1980-2024/>

El empleo ha sido siempre una fuente de preocupación en Marruecos, y el PMV ha ayudado, al menos un poco, a crear empleo, pero un empleo que puede ser estacional, precario y arduo. Además, hay una tendencia reciente a contratar trabajadores extranjeros subsaharianos en condiciones aún más precarias y con niveles salariales todavía más bajos.

Por otro lado, cabe señalar que el crecimiento del PIB de los 15 años posteriores a la década de los noventa es el doble que el de los últimos 15 años. Este primer período de mayor crecimiento coincide con el lanzamiento del proyecto de la *marroquinización* y el impulso de la industria en los años noventa, que dio un nuevo aliento a la ambición nacional de transformar la economía. El segundo período coincide con el predominio del PMV, que parece aportar menos ganancias a la economía nacional. Así, estos altibajos del crecimiento en Marruecos muestran una economía a dos velocidades.

En cuanto a la inflación, esta se ha estabilizado de forma admirable, incluso con una economía tan volátil, pero a costa de unos tipos de interés bastante elevados de promedio y una cierta tolerancia con respecto a la tasa de desempleo, sobre todo teniendo en cuenta que el crecimiento del empleo no sigue el ritmo del crecimiento demográfico.

Hay que añadir que el endurecimiento y la seguridad de las fronteras con Europa y la crisis migratoria agravada por las turbulencias de la primavera árabe en el sur del Mediterráneo han limitado las oportunidades de trabajar en Europa a muchos jóvenes marroquíes, lo que también ha repercutido en las remesas de fondos. Asimismo, el endurecimiento monetario en el país, es decir, la política del banco central, Bank al Maghrib, destinada a reducir la liquidez y el crédito en la economía para frenar la inflación, contribuye a una situación monetaria tensa y a unas oportunidades financieras limitadas. La rigidez financiera del país se hace patente en las oportunidades muy limitadas que tienen los jóvenes emprendedores marroquíes, que ven cómo se lanzan campañas nacionales para promover proyectos locales como Mokawalati,

pero sin transformaciones reales del tejido empresarial, que está dominado por grandes empresas. Asimismo, las *start-ups* que destacan, suelen estar lideradas por jóvenes emprendedores procedentes de círculos elitistas y conectados con importantes capitales.

La gestión de la moneda se realiza con un tipo de cambio fijo, pero con un margen de variabilidad, además de una vinculación a una cesta de divisas compuesta en un 60% por euros y en un 40% por dólares. Esta composición monetaria también ha ayudado a limitar la inflación en el país, contribuyendo al buen papel que Marruecos desempeña para sus socios y, sobre todo, para sus acreedores, en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI). El anclaje del dirham marroquí también es ventajoso en la coyuntura actual, ya que la caída del valor del dólar favorece las importaciones de petróleo en dólares, y la revalorización del euro beneficia a las exportaciones marroquíes, en su mayoría hacia Europa, que se reciben en euros. Este valor añadido de la gestión monetaria contribuye de manera significativa al crecimiento económico, especialmente para las grandes empresas, pero no se traduce necesariamente en una redistribución de las ganancias a la mayor parte de la sociedad del país.

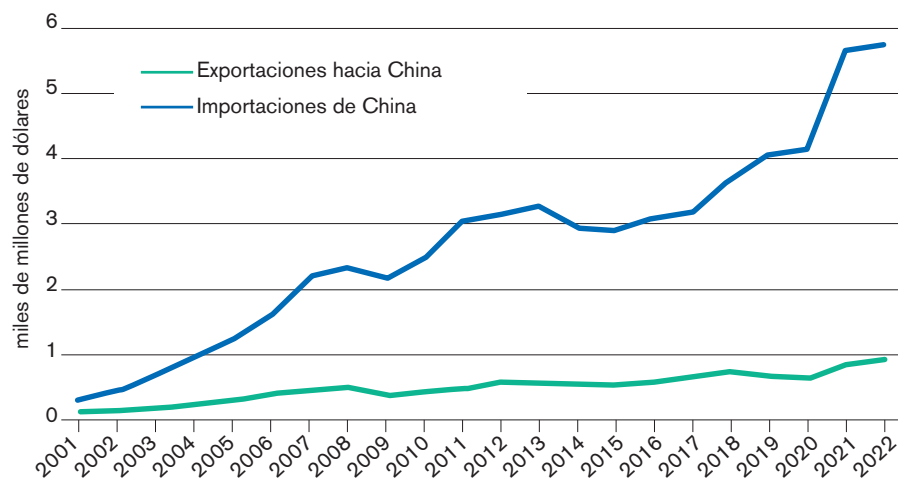
NUEVAS TENDENCIAS

En cuanto a los principales avances de estos últimos años, cabe destacar aquí la relación del país con China y las repercusiones económicas de esta cooperación.

Marruecos firmó un memorando de entendimiento en 2017 para unirse al megaproyecto chino de la nueva Ruta de la Seda (BRI por sus siglas en inglés). En esa fecha, el reino ya había establecido un partenariado político y económico creciente con China, basado en el respeto mutuo de las reivindicaciones de soberanía y en inversiones en proyectos de infraestructura.

En mayo de 2016, el rey Mohamed VI viajó a Pekín y suprimió la obligación de visado para los ciudadanos chinos, como muestra de buena voluntad de apertura del país hacia China. El famoso puente Mohamed VI,

Exportaciones e importaciones de Marruecos hacia y desde China



Fuente: <https://chinaglobalsouth.com/analysis/morocco-looks-at-its-relations-with-china-between-the-earthquake-and-the-diplomatic-celebrations/>

en la región de Rabat –el puente atirantado más largo de África–, también fue confiado a la China Railway Construction Corp., cuya construcción se inició en 2010. Esta misma empresa ya había ganado licitaciones para la construcción de autopistas marroquíes en 2008.

La estrategia china de la BRI hacia Marruecos aborda las prioridades más recientes del reino: las energías renovables y la desalinización. De hecho, Marruecos se ha embarcado en una amplia campaña para diversificar su mix energético, reduciendo así su dependencia del petróleo, y se enfrenta a una presión hídrica creciente. Estos dos problemas son especialmente costosos para un país que depende de las exportaciones agrícolas y con unas necesidades energéticas en constante aumento.

Marruecos se presenta como un punto de enlace hacia otros mercados, y es con esta imagen como se ha posicionado ante Pekín. China, sin embargo, se mantiene por detrás de España y Francia, los principales socios comerciales de Marruecos, pero está recuperando terreno rápidamente (gráfico 2).

– *Industria*: a pesar de la desindustrialización de Marruecos, debido a la desaparición de su industria textil, el país parece haber reorientado su política económica de admisión temporal de materias primas para su transformación (también llamada admisión temporal), característica del sector textil, hacia industrias de mayor valor añadido, como la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. China ya está construyendo su segunda fábrica de baterías para vehículos eléctricos para BTR New Material Group, que también se beneficia de materias primas locales como el cobalto y el fosfato, necesarios para la fabricación de baterías de iones de litio. Por otro lado, China prevé construir una central térmica de carbón en Yerada gracias a un préstamo comprador. También está en curso un proyecto de gigafactoría por valor de 6.500 millones de dólares, el primero de este tipo en el continente africano.

– *Inversiones*: Marruecos es el primer inversor en África Occidental y el segundo del continente, lo que

contribuye a posicionar al país como un punto de conexión hacia otros espacios regionales y puerta de entrada a diferentes mercados. En cierta medida, China corrobora esta afirmación, ya que Marruecos ocupa el puesto 33 de su ranking de destinos de inversión y el tercero en el continente africano.

– *Turismo*: desde 2016, los turistas chinos pueden viajar a Marruecos sin visado. Esta medida ha seducido sin duda a los ciudadanos chinos, cuyo poder adquisitivo está al alza. Unos 200.000 chinos visitaron el país en 2018, un aumento significativo respecto al antiguo régimen de visados, y se espera que esta cifra continúe creciendo de forma significativa.

– *Educación*: China ha desarrollado centros confucianos en Marruecos. Estas instituciones desempeñan un papel esencial en la formación de una nueva generación de marroquíes que comprenden mejor la sociedad china y son susceptibles de establecer partenariados con China. Muchos jóvenes marroquíes eligen China para cursar sus estudios superiores, una elección que marca un punto de inflexión en su trayectoria profesional. Entre las figuras nacionales emblemáticas de las relaciones sino-marroquíes, cabe citar a Hind Lebdaoui, profesora de finanzas islámicas en Ifrane; Kenza Touhs, consultora en Casablanca, y Nasser Bouchiba, profesor de universidad y emprendedor social en Rabat.

– *Altas tecnologías*: el plan chino de la nueva Ruta de la Seda integra el desarrollo de las altas tecnologías, especialmente a través de la Ruta de la Seda digital. El gigante tecnológico chino Huawei ha establecido un centro logístico en el puerto de Tanger Med, que suministra tecnologías de comunicación a la SNCF marroquí.

– *Infraestructuras*: como se ha mencionado, China ya ha emprendido numerosos proyectos de infraestructura en Marruecos. El futuro de las infraestructuras chinas en el país parece prometedor, sobre todo si atendemos a los rumores sobre la reanudación del proyecto de una segunda línea de alta velocidad que conecte Agadir con el res de Marruecos por parte de un socio chino.

La capacidad de Marruecos para hacer equilibrios con socios a menudo rivales, muestra el poder del país para la dualidad, o incluso la duplicidad, lo que, una vez más, demuestra que la economía marroquí toma diferentes direcciones

– *Medicamentos*: China ha desempeñado un papel esencial, aunque poco conocido, en la promoción de las políticas de salud en el Magreb y ha sido uno de los primeros actores en implicarse en ello. El primer equipo médico chino fue enviado a Marruecos en 1975, instaurando desde entonces una forma de diplomacia sanitaria que resultó muy valiosa durante la pandemia de Covid-19. En este contexto, China se ha asociado con el gigante farmacéutico local Sothema para producir localmente la vacuna de Sinopharm, una iniciativa loable, ya que cuenta con una mayor presencia en el mercado.

Finalmente, también cabe señalar que Marruecos se ha sumado recientemente a la carrera por los minerales críticos necesarios para las tecnologías de vanguardia. Marruecos se proyecta como una plataforma hacia África –que posee el 20% de estos minerales– para facilitar el acceso de sus socios europeos, pero también de Estados Unidos, que regresan con fuerza al continente a través de la DFC (Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU). Esta última prevé la apertura de una oficina en Rabat próximamente. Marruecos también ha invertido recientemente en los ámbitos de la investigación y el desarrollo, especialmente con la Universidad Politécnica Mohamed VI, para ascender en la cadena de valor.

La capacidad de Marruecos para hacer equilibrios con socios que a menudo son rivales muestra el poder del país para la dualidad, o incluso la duplicidad, lo que, una vez más, nos demuestra que la economía marroquí toma diferentes direcciones.

PRINCIPALES DESAFÍOS

Es importante subrayar que el principal reto del país sigue siendo la superación de las desigualdades sociales, algo que podría minimizarse con un mayor desarrollo humano. Tras los impactantes atentados terroristas yihadistas de 2003 en Casablanca, la capital económica del país, se lanzó la Iniciativa Nacional para el Desarrollo Humano (INDH) con el objetivo principal de abordar el problema de la pobreza y la precariedad en Marruecos, factores que hacen que los jóvenes sean susceptibles a la radicalización. Sin embargo, la iniciativa ha tenido un impacto claramente limitado en los problemas de precariedad y, sobre todo, en el desempleo juvenil.

El terremoto que sacudió la región de Marrakech-Safi en 2023 también puso de manifiesto las desigualdades en el país y el nivel de pobreza en las zonas rurales. A principios de este año, las fuertes inundaciones en el norte fueron otro momento revelador.

La tendencia de Marruecos al *greenwashing* de sus planes de desarrollo se remonta al PMV, que pretendía presentar al país como ecológicamente responsable

cuando, en realidad, provocó el empobrecimiento de los pequeños agricultores y el agotamiento de los recursos hídricos. Este plan permitió a las grandes empresas agroalimentarias acaparar vastas extensiones de tierra, explotar mano de obra barata e inundar los mercados europeos con productos marroquíes a precios competitivos. Otra práctica preocupante de *greenwashing* son los proyectos de energía solar de Marruecos, que se presentan como un medio para que el Reino lidere la transición mundial hacia las energías renovables, en particular en el marco del Acuerdo de París tras la COP21. En realidad, las centrales solares construidas, como Noor I, han resultado extremadamente costosas para un país ya muy endeudado. Asimismo, parecen responder más a una estrategia para mantener vínculos estratégicos con socios del Golfo, como Arabia Saudí, que a una verdadera preocupación nacional por la protección del medio ambiente.

PERSPECTIVAS

El reciente estudio de los economistas Piketty y Nieves ha confirmado una constatación visible en el gran Sur desde hace más de medio siglo del periodo postcolonial: la explotación colonial está directamente vinculada a la brecha de riqueza entre el Norte y el Sur. En este mismo estudio se reveló que un pequeño aumento en los precios de las materias primas procedentes del Sur no solo habría eliminado las deudas de estos países, sino que también les habría permitido convertirse en acreedores y reinvertir el capital obtenido en sus recursos humanos.

Marruecos ha experimentado en los últimos años un empobrecimiento de los servicios sociales, especialmente en sanidad y educación, mientras la población seguía creciendo. Así, el interés por invertir en capital humano no es solo una política social, sino también un cálculo económico ganador, como hemos visto con los milagros asiáticos de la década de los setenta.

El reciente deterioro de los servicios sociales en Marruecos vivió un pequeño respiro durante el mandato del partido islamista Justicia y Desarrollo (PJD), que llegó al poder tras las revueltas de 2011, gracias a la generalización del seguro de enfermedad obligatorio (AMO), un proyecto que se remonta a la época de Driss Jettu.

Las manifestaciones de jóvenes de la generación Z en octubre del año pasado volvieron a poner sobre la mesa las cuestiones de las desigualdades y la impunidad del sistema judicial, como los escándalos financieros del actual primer ministro, quien, por cierto, fue el impulsor del PMV. Marruecos es un país donde la tradición cívica y el compromiso de los ciudadanos no deben limitarse a los partidos de fútbol, sino que deberían ampliarse a la gestión y la gobernanza de los recursos./

La emergencia del movimiento Gen Z 212 demuestra que la protesta no se desencadenó por la pobreza absoluta, sino por la brecha percibida entre las expectativas y las capacidades.

Isabel Ruck es responsable de investigación y de la coordinación científica en el Centro Árabe de Investigaciones y Estudios Políticos de París (CAREP).

EL MOVIMIENTO GEN Z 212 Y LA PRIVACIÓN EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN DIGITAL

La aparición del movimiento Gen Z 212 a finales de 2025 marca un punto de inflexión en la "gramática de la protesta" en Marruecos. Esta coalición sin líderes, nativa digital, que toma su nombre del prefijo telefónico internacional del país, supone una ruptura con las formas tradicionales de protesta y cuestiona eficazmente el repertorio de medidas de contención del Estado. Aunque sus reivindicaciones –que van desde la exclusión económica y el deterioro de los servicios públicos hasta la corrupción sistémica– reflejan las principales demandas del movimiento del 20 de febrero de 2011 y del Movimiento Popular del Rif (Hirak del Rif) de 2017, su composición demográfica y su infraestructura tecnológica representan una nueva frontera en la vida política marroquí.

Entre septiembre y octubre de 2025, una ola de movilización nacional exigió una revisión fundamental del contrato social. Estos disturbios se produjeron en un momento crítico: un periodo delicado marcado por una posible transición en el poder, centrada en la salud del rey Mohamed VI y el ascenso al poder del príncipe heredero Moulay Hassan. Al mismo tiempo, la atención internacional suscitada por la organización en Marruecos de la Copa Africana de Naciones (entre diciembre de 2025 y enero de 2026) y de la Copa Mundial de Fútbol 2030, ha creado un contexto en el que la respuesta tradicional del régimen, basada en "la zanahoria y el palo", se ha visto sometida a una presión sin precedentes.

La intensidad y la dimensión de las manifestaciones plantean una cuestión sociológica fundamental: ¿por qué se rebelan los jóvenes marroquíes? Esta pregunta nos remite directamente a la obra del politólogo estadouni-

dense Ted Robert Gurr, cuyo estudio publicado en 1970, *Why Men Rebel*, sigue siendo una referencia para comprender la violencia política. Gurr sostiene que el principal motor de la rebelión nunca es la pobreza absoluta, sino la "privación relativa"; es decir, la brecha percibida entre las "expectativas de valor" (los bienes y las condiciones de vida a los que las personas consideran que tienen derecho) y las "capacidades de valor" (las condiciones que consideran que realmente pueden alcanzar y mantener). Cuando esta frustración se vuelve colectiva y se dirige contra el sistema político, genera una fuerte propensión a la protesta y al cambio sistémico.

Este artículo se propone recuperar este marco conceptual para analizar el surgimiento de los movimientos de protesta de la generación Z en el Marruecos contemporáneo, caracterizado por una fase de "hipermodernización". Examinamos cómo el despliegue de infraestructuras de prestigio –auténticos "escaparates" de un Estado en busca de modernidad– ha dilatado artificialmente las expectativas de valor de una juventud conectada. Este diagnóstico revela una colisión brutal entre estas aspiraciones de progreso y el estancamiento de las capacidades de valor reales, que se ve agravado por el declive de las redes de seguridad social.

INVERSIONES 'ESCAPARATE' FRENTE A AGRAVIOS SOCIOECONÓMICOS DE LARGA DURACIÓN

El catalizador inmediato del movimiento Gen Z 212 fue la muerte de varias mujeres en agosto de 2025 en la uni-

dad de maternidad del hospital regional Hassan II de Agadir. En apenas 10 días, ocho mujeres fallecieron debido a complicaciones durante el parto. Estos sucesos sirvieron como símbolo visceral de la disparidad estructural entre los grandes proyectos de infraestructura del Estado y la realidad que viven sus ciudadanos. Mientras el Ministerio de Sanidad intentaba calificar estas muertes de "anomalías estadísticas", unas imágenes filtradas que mostraban gatos callejeros y basura en los quirófanos del hospital desmantelaron la versión oficial.

El escándalo puso de manifiesto la existencia de un "Marruecos a dos velocidades": una nación en la que el Estado destina miles de millones a un tren de alta velocidad ultramoderno y a estadios relucientes para espectáculos mundiales, mientras que casi la mitad de los hogares rurales carecen de acceso a los servicios sanitarios básicos, al agua corriente o a la electricidad.

De hecho, desde un punto de vista puramente macroeconómico, el Marruecos de 2024-2025 mostraba una resiliencia que alimentaba las expectativas de la población. Los indicadores globales apuntaban al alza: tras una consolidación en 2024, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Alto Comisionado de Planificación (HCP) pronosticaban una aceleración del crecimiento del PIB, que alcanzaría el 4,4% en 2025. Paralelamente, el Estado logró la proeza de estabilizar la inflación, situándola por debajo del umbral del 2%, ofreciendo así una imagen de control monetario y dinamismo recuperado.

Esta aparente salud de los agregados nacionales, unida a una política de grandes obras públicas, proyecta la imagen de un país en pleno ascenso. Sin embargo, siguiendo la lógica de Gurr, esta progresión de los indicadores "escaparate" no hace más que acentuar la sensación de privación cuando los beneficios de este crecimiento no se filtran hacia las capacidades individuales, especialmente para una generación Z que observa este despegue económico desde la periferia del mercado laboral.

Según una encuesta de 2025 realizada a 585 marroquíes por la Moroccan Center for Youth and Democratic Transition y la Fundación Friedrich Ebert, la elevada tasa de desempleo figura entre las causas más citadas para explicar la crisis socioeconómica. De hecho, el paro juvenil, que superó el 35% en 2024 (y rozó el 47% en los centros urbanos), ha creado un "horizonte bloqueado" para una generación cuyos logros educativos ya no se traducen en movilidad social. Según esta encuesta, el 90,4% de los encuestados declaró que la falta de un trabajo decente era la principal motivación para emigrar, lo que revela una "crisis de confianza en el mercado laboral local". Otros señalan también la mediocridad de los servicios sociales y sanitarios (60,5%), así como unos servicios educativos deficientes (39,7%), como causas de su malestar.

Estos agravios se basan en un sentimiento de negación de la dignidad, o *hogra*, la humillación sistémica del ciudadano por parte de un Estado indiferente. Este sentimiento ha cristalizado aún más a raíz de una gestión de la crisis considerada deficiente. El terremoto del Alto Atlas en 2023 es un buen ejemplo: la parálisis inicial del aparato estatal transformó la urgencia humanitaria en una crisis de legitimidad. En las regiones aisladas, mayoritariamente *amazigh*, el retraso de los equipos de rescate se



Manifestaciones convocadas por el movimiento Gen Z 212, para reclamar "justicia social" y la "lucha contra la corrupción". Rabat, octubre de 2025./ABU ADEM MUHAMMED/ANADOLU VIA GETTY IMAGES

vivió como una prueba tangible del abandono estatal, lo que ahondó la brecha entre el "Marruecos útil" de las infraestructuras emblemáticas y el "Marruecos profundo" de las zonas marginales abandonadas.

Al mismo tiempo, la gestión de la sequía histórica de 2022-2024 asestó un golpe fatal a las capacidades de subsistencia de la población rural. Como principal proveedor de empleo, el sector agrícola sufrió una presión sin precedentes que conllevó la destrucción de 140.000 puestos de trabajo. Con una producción de cereales reducida en casi un 50%, la inflación alimentaria actuó como un impuesto sobre la supervivencia, precipitando el éxodo rural masivo. Este trasvase de la precariedad hacia los centros urbanos saturó unas infraestructuras ya frágiles, transformando la desilusión del campo en un polvorín social en el corazón de las metrópolis.

Para una parte significativa de la juventud marroquí, este "horizonte bloqueado", agravado por una deficiente gestión de la crisis, ha reducido durante mucho tiempo la migración a una necesidad estructural, la única vía de escape ante un contrato social fallido. Las estadísticas de 2025 confirman esta tensión: revelan que alrededor del 42,6% de los marroquíes menores de 30 años expresan el deseo de marcharse. Sin embargo, se está produciendo un profundo cambio en el seno de la generación Z: con

más formación que sus predecesores e “hiperconectada”, esta generación ya no se conforma con huir.

Este fenómeno puede analizarse a través de los mecanismos de regulación social salida-voz-lealtad (*exit-voice-loyalty*), teorizados por Albert Hirschman en 1970. Así, la huida ya no es la única vía contemplada por la generación Z marroquí. Su capacidad para comparar, en tiempo real, los estándares de gobernanza mundiales con la realidad local alimenta, en esta categoría generacional, la exigencia y la reivindicación de dignidad nacional (voz). Conscientes de que la migración no resuelve las causas profundas de la *hogra*, estos jóvenes transforman su desilusión en un compromiso cívico y digital sin precedentes. El acceso a la información ya no actúa como un mero espejo de las desigualdades; funciona como un catalizador de conciencia política, transformando el deseo de abandonar el país en una férrea voluntad de transformar Marruecos desde dentro (lealtad). Este cambio de rumbo de la juventud marroquí ilustra perfectamente la transición de la huida (la deserción mediante el exilio) a la voz (la protesta) y, finalmente, hacia la lealtad (hacia el país, aunque sea crítica).

El análisis del surgimiento del movimiento Gen Z 212 muestra, por tanto, que la protesta no se desencadenó por una pobreza absoluta, sino por la brecha percibida entre las expectativas y las capacidades. Los proyectos de modernización “escaparate” del Estado marroquí han alimentado las expectativas de la juventud al proyectar la imagen de una nación próspera de talla mundial. Sin embargo, las capacidades del Estado para responder a las exigencias de dignidad de la población siguen siendo deficientes. Para una generación mejor informada y conectada, esta brecha se vuelve más visible y más intolerable, transformando la frustración privada en una disposición colectiva a la contestación política, incluso en un contexto autoritario.

LA DIGITALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Si bien la organización de la acción colectiva a través de las redes sociales es un legado ya clásico de las primaveras árabes, la transformación de estas plataformas en auténticas ágoras democráticas en contextos autoritarios supone, en el caso marroquí, una ruptura paradigmática. El movimiento Gen Z 212 cristalizó sus primeras acciones a mediados de septiembre en la plataforma Discord, siguiendo los pasos del movimiento nepalí que, ya en septiembre de 2025, había transformado un servidor de 160.000 miembros en un verdadero “parlamento virtual”.

Para la juventud marroquí, esta plataforma, concebida inicialmente para la comunidad de *gamers*, ha permitido una agilidad y una seguridad sin precedentes. Tras la tragedia en el hospital de Agadir, el servidor de Gen Z 212 experimentó un crecimiento exponencial, pasando de 1.000 a más de 250.000 miembros en tan solo unos días. Convertida en un auténtico “laboratorio político”, esta red ha permitido conectar a ciudadanos de todas las metrópolis del Reino (Casablanca, Rabat, Agadir, Tánger), logrando forjar un consenso orgánico sobre la necesidad de coordinar manifestaciones a escala nacional.

Lejos del arrebatado ciego de los disturbios espontáneos, la generación Z ha sabido canalizar su frustración en una movilización digital, horizontal y anónima. Al apostar por Discord, ha cortocircuitado deliberadamente a los intermediarios (partidos y sindicatos), percibidos como obsoletos o comprometidos. Esta ausencia de estructura piramidal ha neutralizado también, por extensión, los resortes estatales clásicos, haciendo que cualquier intento de apropiarse del movimiento resultara especialmente difícil para el Estado.

La respuesta del Estado a esta nueva forma de movilización ha seguido una doble estrategia que combina retórica reformista y medidas coercitivas. Sin embargo, la eficacia de esta estrategia de contención diferida ahora se ve cuestionada de forma más sistemática. Si bien el discurso pronunciado por el rey Mohamed VI ante el Parlamento en octubre de 2025 apelaba a la rápida puesta en marcha de reformas sociales –especialmente mediante un aumento significativo del 16% en los presupuestos de sanidad y educación–, evitaba mencionar directamente las manifestaciones, presentando la crisis como un problema de ineficacia administrativa más que de legitimidad política.

Simultáneamente, los servicios de seguridad lanzaron una dura represión, deteniendo a más de 2.000 manifestantes e imponiendo largas penas de prisión a los acusados de “incitación a la agitación”. Solo el tribunal de apelación de Agadir dictó 162 años de penas acumuladas contra 17 jóvenes, una decisión que puso de manifiesto el temor subyacente del régimen ante la naturaleza difusa e incontrolable del movimiento. No obstante, esta severidad no hace más que reforzar la legitimidad de la ira que pretende reprimir, erosionando aún más la credibilidad interna del Estado.

El movimiento Gen Z 212 sugiere que la “excepción marroquí” –la idea de que el Reino podría evitar las turbulencias de la primavera árabe mediante reformas cosméticas– ha llegado a su límite. La juventud de la generación Z no tiene ni la paciencia ni las ilusiones de la generación de 2011. La supervivencia del actual contrato social depende ahora menos de la capacidad del Estado marroquí para redistribuir la riqueza o reprimir la disidencia que de su capacidad para devolverle el sentido y restablecer la confianza institucional. El Estado marroquí debe decidir si considera a esta generación nativa digital como una amenaza que debe gestionar o como una oportunidad para reinventar un relato colectivo capaz de mantener la estabilidad del Reino en las próximas décadas. La incapacidad del Estado para integrar esta transformación digital lo condena a la impotencia.

REPERCUSIÓN GLOBAL DEL MOVIMIENTO DE PROTESTA

El movimiento Gen Z 212 se define no solo por sus reivindicaciones locales, sino también por una profunda repercusión mundial que inscribe a la juventud marroquí en una red transnacional de protestas. Al adoptar símbolos universales de la cultura pop, en particular la bandera pirata del manga *One Piece*, los jóvenes marroquíes muestran su pertenencia a una generación “pirata” global. Esta generación rechaza las jerarquías tradicionales y el

capitalismo "mudo" en favor de una justicia social "resonante", demostrando que el movimiento Gen Z 212 es el capítulo local de un imaginario mundial que exige una reinención total del contrato social, que se basaría en la reciprocidad mutua más que en la indiferencia sistémica.

Para la cohorte Z 212, el Estado marroquí se ha convertido en un instrumento mudo de alienación, que prioriza los proyectos de prestigio mundial mientras permanece sordo a las necesidades fisiológicas y de dignidad de sus ciudadanos. El movimiento de la generación Z es, por tanto, un intento de establecer una esfera de resonancia donde sus voces generen un eco tangible. En un mundo digital sin fronteras, la generación Z marroquí ya no compara su calidad de vida con la de la generación de sus padres (que podría haber aceptado una monarquía reformista), sino con la de sus pares en París, Madrid, Antananarivo o incluso Katmandú. Al ser testigos de la "rebelión global" de los levantamientos liderados por los jóvenes en países como Nepal, Indonesia, Madagascar y los Balcanes, sus expectativas en cuanto a la responsabilidad del Estado han aumentado. Se podría argumentar que la caída del gobierno nepalí en septiembre de 2025 actuó como una "prueba de concepto", reduciendo drásticamente el coste psicológico de la disidencia. El triunfo electoral de Balendra Shah el 7 de marzo de 2026, seis meses después del levantamiento de la generación Z nepalí, transforma la insurrección en un éxito político institucional. Un precedente de este tipo envía un mensaje contundente: la generación Z podría derribar las estructuras establecidas e imponer una nueva forma de gobierno.

En Marruecos, esta visión internacionalista de la protesta se refleja claramente en la movilización en torno a la causa palestina. Tras la normalización de las relaciones con Israel en 2020, muchos jóvenes marroquíes comenzaron a considerar esta política exterior como el símbolo de una brecha cada vez mayor entre el Estado y la sociedad. Los datos del Barómetro Árabe subrayan este cambio: el apoyo a la normalización cayó del 31% en 2022 a tan solo el 13% en 2024. Para estos jóvenes manifestantes marroquíes, la lucha palestina es un símbolo localizado de la *hogra*. Al adoptar el eslogan "no hay justicia allí sin justicia aquí", los manifestantes han vinculado eficazmente su lucha contra la corrupción local y la injusticia social a una condena más amplia de un sistema mundial que, en su opinión, prioriza los intereses políticos y económicos globales en detrimento de la vida humana.

Esta resonancia transnacional se ve amplificada por la participación activa de la diáspora marroquí, que también sirve de puente entre el activismo local y la visibilidad internacional. Un ejemplo elocuente es el de Zineb El Kharroubi, una militante de Gen Z 212 residente en París que ha pagado un alto precio por su compromiso; es la primera activista de la diáspora de esta generación en ser procesada en Marruecos por "incitación a alterar el orden público" a través de las redes sociales. Su caso revela, asimismo, que el Estado marroquí considera el activismo de la diáspora como una amenaza potencial. Gracias a un sofisticado sistema de retroalimentación digital, la diáspora selecciona y traduce sin editarlos testimonios procedentes de Marruecos para un público global. Al difundir este contenido entre los medios

internacionales y los grupos de defensa de los derechos humanos, aumenta considerablemente el coste diplomático y reputacional de la represión estatal.

CONCLUSIÓN: HACIA UNA NUEVA GRAMÁTICA DEL RECONOCIMIENTO

El movimiento Gen Z 212 ha redefinido fundamentalmente las fronteras de la protesta en Marruecos. Al ir más allá de las explosiones episódicas de décadas anteriores, ha institucionalizado una nueva "gramática de la protesta" que se basa tanto en la infraestructura digital como en la ocupación física. Aunque las movilizaciones masivas de finales de 2025 han dado paso a una fase de "baja intensidad pero alta visibilidad" en este inicio de 2026, el impacto del movimiento sigue siendo profundo. Pasar de los disturbios a la defensa en sede judicial de activistas como Zineb El Kharroubi, junto con la focalización digital en el "precedente de Agadir", demuestra una madurez táctica: el movimiento ha transformado la respuesta carcelaria en un espectáculo recurrente de la *hogra*, alimentando sin descanso la indignación pública.

La reacción del Estado –un aumento del 16% del gasto social y la rebaja de la edad para las candidaturas políticas– supone una admisión tácita de este nuevo poder. Sin embargo, desde la perspectiva de la privación relativa de Ted Gurr, estas concesiones corren el riesgo de quedar en nada. El Estado intenta ajustar las "capacidades de valor" (el presupuesto), pero no logra satisfacer las "expectativas de valor" de una generación cuya dignidad se mide ahora en función de un estándar global. Mientras los proyectos emblemáticos de la Copa del Mundo 2030 proyecten su sombra sobre el deterioro de los hospitales regionales, la brecha psicológica que alimenta la rebelión seguirá abierta.

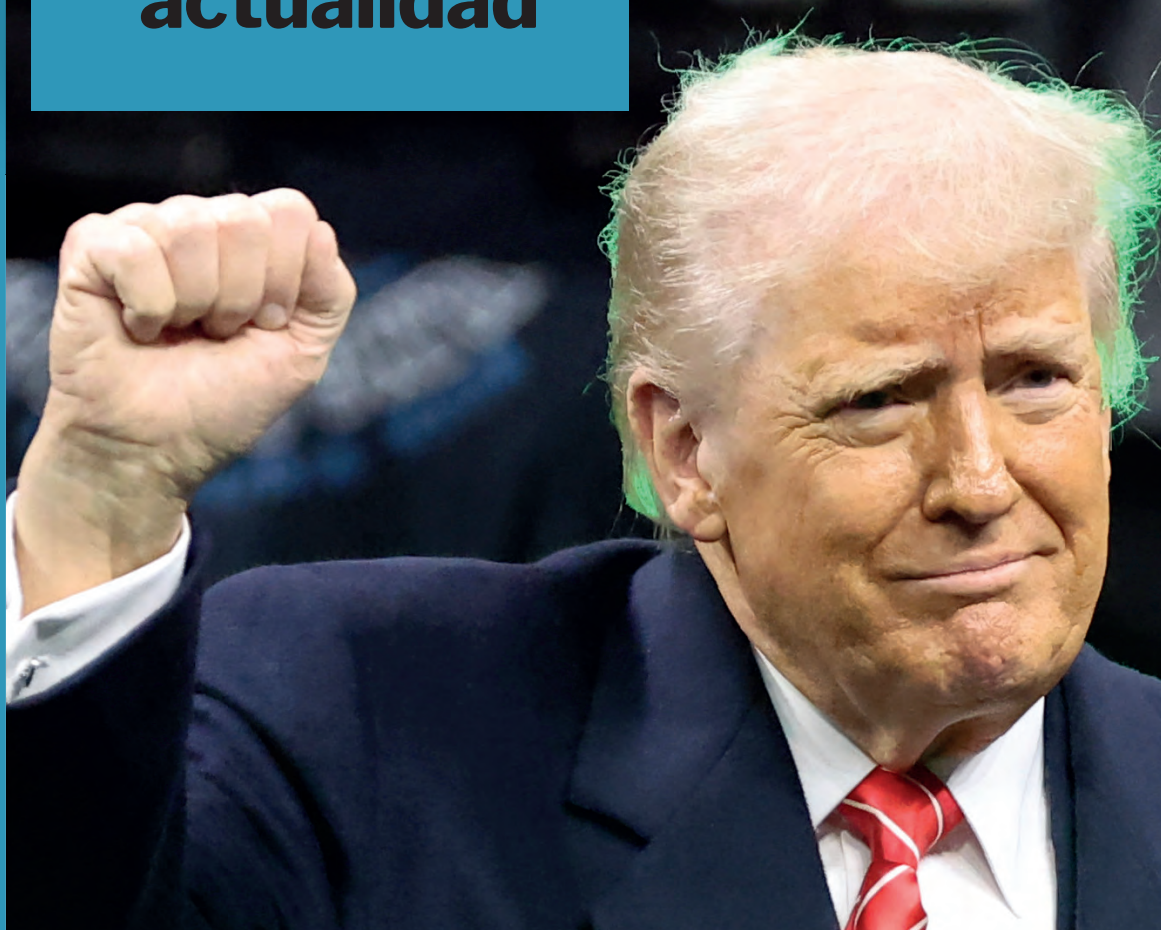
Más allá de lo material, lo que se plantea es la cuestión de la intersubjetividad. La Gen Z 212 se niega a ser un mero "objeto" de gobernanza; exige ser reconocida como un "sujeto" con aspiraciones globalizadas. Frente a un Estado que prioriza la eficacia administrativa muda, la juventud reclama "resonancia". Al obstinarse en la gestión policial de las amenazas, el Majzén alcanza su límite estructural: la juventud no solo pide una redistribución de la riqueza, sino una redistribución del sentido.

En un giro histórico sorprendente, mientras las libertades democráticas se desvanecen en el corazón de una Europa sumida en el repliegue, la llama del ideal democrático y de la solidaridad parece encontrar hoy a sus defensores más ardientes en la generación Z de los países del Sur. Esta juventud marroquí ya no se conforma con aspirar a Occidente; reclama sus principios allí donde nacieron, recordando al mundo que la democracia está ahora en manos de aquellos a quienes el orden global intentaba mantener en la periferia.

Así pues, la supervivencia del contrato social marroquí depende ahora de la capacidad de la monarquía para superar la lógica de "la zanahoria y el palo" e instaurar una resonancia auténtica. Los procesos judiciales abiertos en 2026 contra los manifestantes de la generación Z no son, por tanto, un epílogo, sino el preludio de una nueva era en la que la responsabilidad y el reconocimiento se han convertido en exigencias no negociables./

 **POLÍTICA
EXTERIOR**

**Más allá de la
actualidad**



*Entender el momento.
Estar informado.*

Suscríbete

www.politicaexterior.com/suscripciones/



Tus operaciones internacionales, totalmente aseguradas **Así de simple**



Con **Cesce** todo es más sencillo:

- › **Asegura** y **protege** tus exportaciones e inversiones internacionales.
- › Accede a **financiación** bancaria en las **mejores condiciones**.
- › Obtén con facilidad los **avales** que necesitas.

Ahora, en un entorno global complejo, **Cesce** fortalece la competitividad de tu empresa con el respaldo y garantía del Estado español.

900 104 437 | cesce.es

Escanea el QR para **más información**





Ideas políticas



**40 LA GUERRA DE EEUU E ISRAEL CONTRA IRÁN:
UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR**

Gawdat Bahgat

**44 EL IRÁN DE MOJTABA JAMENEI:
UNA SUCESIÓN SIN APERTURA**

Luciano Zaccara

**48 GUERRA, TIRANÍA Y COLONIALISMO:
LOS MALES INCURABLES DE ORIENTE MEDIO**

Xavier Mas de Xaxàs

52 TURQUÍA ANTE LA CUESTIÓN KURDA EN SIRIA

Carmen Rodríguez López

Vista de Teherán tras los ataques de
EEUU e Israel sobre la capital iraní.
Marzo de 2026./FATEMEH BAHRAMI/
ANADOLU VÍA GETTY IMAGES

Más allá de la presión política, estratégica y económica tanto para EEUU como para Irán, la guerra tendrá importantes implicaciones en el equilibrio de poder en Oriente Medio y más allá.

Dr. Gawdat Bahgat es profesor distinguido en el Centro de Estudios Estratégicos de Oriente Próximo y Asia Meridional de la Universidad Nacional de Defensa, autor de 11 libros sobre Oriente Medio y la política exterior de EEUU (artículo entregado el 10 de marzo de 2026).

LA GUERRA DE EEUU E ISRAEL CONTRA IRÁN: UNA EVALUACIÓN PRELIMINAR

Desde principios del siglo XXI, la amplia región de Oriente Medio ha sido testigo de varias oleadas de violencia sangrienta y de guerras. La larga lista incluye la guerra contra el terrorismo; el derrocamiento de Saddam Husein; las guerras civiles en Libia, Siria, Yemen y Sudán; los ataques de Hamás contra Israel y las operaciones militares de este último en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen e Irán. Antes de octubre de 2023, un frágil equilibrio de poder regional dejaba a la República Islámica de Irán y a sus aliados en una posición relativamente fuerte frente a Israel y Estados Unidos. Hamás controlaba Gaza; Hezbolá, con un importante arsenal de misiles, planteaba un serio desafío a Israel; los hutíes se hicieron con el control de las zonas más pobladas de Yemen; y los países árabes comenzaron a limar asperezas con el presidente Bashar al Assad de Siria y restablecieron relaciones diplomáticas con Teherán. Por último, Irán contaba con una capacidad misilística amplia y sofisticada y con reservas de uranio enriquecido que podían utilizarse como moneda de cambio en las negociaciones diplomáticas para poner fin al estancamiento sobre su programa nuclear.

Estas dinámicas estratégicas han cambiado drásticamente en los últimos dos años. La mayoría de los aliados de Irán se han visto debilitados, sus instalaciones nucleares han sido destruidas y su capacidad misilística se ha visto mermada. A pesar de estos reveses, la República Islámica no fue derrotada. El gobierno no solo sobrevivió a la pérdida de aliados regionales, sino que, lo que es igualmente importante, logró poner fin a los disturbios y manifestaciones a escala nacional desencade-

nados por el aumento de la inflación y el estancamiento económico a principios de este año. En este contexto, Estados Unidos e Israel lanzaron una nueva guerra contra Irán a finales de febrero. Llevará algún tiempo comprender los motivos que hay detrás de estos ataques y sus ramificaciones económicas y estratégicas.

ATACAR A IRÁN: LA VISIÓN DESDE WASHINGTON

Tanto en su campaña electoral hacia la Casa Blanca como en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada a finales de 2025, Donald Trump prometió no llevar al país a otra guerra interminable, como las de Afganistán e Irak. Sin embargo, en su primer año en el cargo, el presidente ha desarrollado un afán por proyectar el poderío militar estadounidense y atacar a sus adversarios. El éxito del bombardeo de las instalaciones nucleares de Irán en junio del año pasado y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero de este año parecen haber reforzado aún más la convicción de Trump de utilizar el poderío militar estadounidense.

Los opositores a Trump critican su decisión de atacar a Irán por varios motivos. En primer lugar, no ha logrado convencer al pueblo estadounidense de la necesidad de la guerra, no ha tenido la autorización del Congreso para entrar en guerra y no ha formado una coalición internacional. No se consultó a los aliados árabes y europeos de Estados Unidos y, de hecho, muchos de ellos presionaron en contra de la confrontación militar.



En segundo lugar, muchos estadounidenses, incluidos los partidarios del presidente, no están de acuerdo con su afirmación de que Irán representaba "una amenaza inminente" para Estados Unidos. Tras los graves daños sufridos por las instalaciones nucleares en junio, no había indicios de que Irán hubiese reanudado el programa de enriquecimiento de uranio. Además, las agencias de inteligencia estadounidenses habían concluido que Irán tardaría al menos una década en construir misiles de largo alcance capaces de llegar hasta Estados Unidos. En tercer lugar, los objetivos de la Administración Trump no están bien definidos. El presidente y otros altos funcionarios mencionaron la necesidad de impedir que Irán fabricara armas nucleares, de destruir su capacidad misilística y naval, eliminar su apoyo a organizaciones terroristas y de poner fin a la violencia contra disidentes políticos y manifestantes. Tras unos días de guerra, Trump añadió un objetivo más: el cambio de régimen. El presidente también descartó cualquier acuerdo diplomático y, en su lugar, exigió una "rendición incondicional".

Los intensos ataques de EEUU e Israel y la actitud desafiante de Irán han puesto de manifiesto la presión política, estratégica y económica a la que se enfrenta la Administración Trump. A nivel nacional, el presidente tiene que convencer a los estadounidenses de que las "amenazas inminentes" de Irán justifican los riesgos y sacrificios de los hombres y mujeres que sirven en el ejército, el aumento del coste de la energía, la caída de los mercados bursátiles y de los índices de popularidad. Un conflicto prolongado con objetivos poco claros y cambiantes probablemente perjudicará al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de noviembre de este año. La creciente oposición a la guerra no se limita a los demócratas. Personalidades destacadas del movimiento *Make America Great Again* (MAGA), como Tucker Carlson, han expresado fuertes reservas y han cuestionado si la guerra está en conso-

Pantalla digital con la imagen de Trump, y las palabras "¡Gracias, Dios y Donald Trump!". Tel Aviv, 10 de marzo de 2026./ERIK MARMOR/GETTY IMAGES

nancia con la agenda *America first*. Además, muchos analistas, tanto de derechas como de izquierdas, han argumentado que Israel ha arrastrado a Estados Unidos a la guerra. Desde su toma de posesión en enero de 2025, Trump se ha reunido con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en siete ocasiones (más que con cualquier otro líder extranjero). Por último, a pesar de la impresionante capacidad militar de EEUU, la historia nos enseña que iniciar guerras es mucho más fácil que terminarlas.

DEFENDER LA REPÚBLICA ISLÁMICA: LA VISIÓN DESDE TEHERÁN

Desde el establecimiento de la República Islámica en 1979, sus líderes han percibido a Estados Unidos e Israel como sus archienemigos. El país ha estado sometido a sanciones económicas y diplomáticas estadounidenses durante más de cuatro décadas y los funcionarios israelíes han pedido constantemente el derrocamiento del gobierno de Teherán. Durante muchos años, el difunto ayatolá Alí Jamenei había sostenido que el programa nuclear no era la razón de esta animosidad. Más bien afirmaba que Washington nunca había aceptado la revolución islámica y había empleado la presión económica y el aislamiento diplomático para socavarla. El uso de la fuerza militar, según este argumento, tiene como objetivo acabar con la República Islámica.

Los líderes políticos y militares iraníes son conscientes de la profunda vulnerabilidad actual de su nación. En los últimos años, sus aliados regionales se han visto gravemente debilitados y sus capacidades

de defensa y disuasión han quedado significativamente destruidas. A pesar de estos reveses, el gobierno se mantiene desafiante. Los líderes iraníes consideran los ataques de EEUU e Israel como una guerra existencial. Basándose en esta percepción, han adoptado una estrategia de "crisis final". El objetivo principal es sobrevivir y poner fin rápidamente al conflicto. Esta estrategia busca aumentar el coste y la presión sobre el presidente Trump para que termine la guerra. Cerrar el estrecho de Ormuz, bloquear los petroleros y buques cisterna de gas, y atacar las bases estadounidenses en países vecinos son parte de esta estrategia.

A nivel interno, desde los primeros años de la República Islámica, el gobierno ha mostrado poca o ninguna tolerancia hacia la oposición política. Durante más de cuatro décadas no ha habido ningún grupo de oposición organizado capaz de desafiar al gobierno de Teherán. Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último sha, vive fuera del país desde 1978. No está claro si cuenta con suficiente apoyo dentro de Irán. En los últimos meses ha instado al presidente Trump a "terminar el trabajo" y acabar con la República Islámica. Reza Pahlavi también ha visitado Israel y se ha reunido con Netanyahu.

Tampoco la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK, por sus siglas en inglés) se considera una alternativa viable. Se formó en 1965 como grupo islamista de izquierdas, libró una lucha armada contra el sha y participó en la revolución de 1979. Pero tras perder una lucha de poder con el ayatolá Jomeini, se exilió en Irak y más tarde luchó junto a las fuerzas iraquíes en la guerra contra Irán. Fue designada como organización terrorista por el Departamento de Estado de EEUU hasta 2012. Desde entonces, ha cultivado buenas relaciones con Washington y otros países europeos. El primer día de la guerra, la líder del MEK, Maryam Rajavi, anunció la formación de un gobierno provisional que transferiría la soberanía al pueblo iraní y establecería una república democrática. Al igual que el hijo del sha, no hay indicios de que el grupo cuente con apoyo dentro de Irán, donde se le considera una secta y un enemigo no solo del gobierno iraní, sino también del pueblo iraní.

Otra cuestión importante es la compleja composición étnica de Irán. Las divisiones sectarias son menos problemáticas que las étnicas. La mayoría de los 90 millones de iraníes son chiíes, con pequeñas minorías suníes, cristianas, judías y de otras religiones. Por otra parte, los persas representan alrededor del 60% de la población; el resto de grupos étnicos son azeríes, kurdos, árabes, luros y baluchíes. La mayoría de estos grupos étnicos tienen raíces en países vecinos. No se pueden descartar las tensiones étnicas, pero estas se enfrentan al menos a dos retos. En primer lugar, Irán y sus vecinos comparten intereses comunes a la hora de contener las aspiraciones políticas de estas minorías étnicas. Por ejemplo, Turquía, Irak, Siria e Irán están unidos contra un Estado kurdo independiente. En segundo lugar, como una de las civilizaciones más antiguas del mundo, Irán tiene una fuerte identidad nacional. La mayoría, si no todos, de estos grupos étnicos, han convivido durante miles de años.

Por último, es importante no sobreestimar el impacto del asesinato del ayatolá Jamenei y otros altos

dirigentes políticos y militares. A diferencia del Irak de Saddam Hussein o la Libia de Muamar Gadafi, la República Islámica no es un régimen autoritario unipersonal. Existen varios centros de poder institucionalizados que colaboran para garantizar la supervivencia del sistema. A pesar del abrumador poderío militar de EEUU e Israel y de décadas de sanciones económicas y diplomáticas, no hay indicios de fragmentación de la élite, al menos no todavía. Los líderes políticos, militares y religiosos parecen decididos a resistir los ataques de EEUU e Israel y a mantener el sistema islámico en el poder. El tiempo dirá si esta resistencia cambiará bajo el intenso bombardeo y sus secuelas.

Diez días después del asesinato del líder supremo Alí Jamenei, su hijo Mojtaba era elegido su sucesor. Puede que sobreviva o no a un intento de Estados Unidos e Israel de matarlo. Aun así, su elección envía un claro mensaje de unidad entre la clase dirigente político-militar de Teherán y es una señal de resistencia a la capitulación exigida por Trump de una "rendición incondicional". En un principio, Alí Jamenei y la Asamblea de Expertos no querían que Mojtaba se convirtiera en líder supremo por temor a que se instaurara un régimen de sucesión hereditaria, pero sus fuertes vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la guerra, en curso, lo elevaron a la máxima posición.

REACCIÓN REGIONAL

Durante décadas, la rivalidad entre el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) e Irán ha dominado Oriente Medio. Las monarquías del Golfo acusaban a la República Islámica de intentar controlar la región, exportar su revolución y apoyar a actores no estatales. En los últimos años, los líderes relativamente jóvenes y asertivos de Catar, Omán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos se han centrado en diversificar sus economías, reducir la dependencia de los ingresos petroleros, atraer inversiones privadas y extranjeras y posicionarse como centros regionales y globales de tecnologías emergentes. Estas ambiciosas visiones de reforma económica necesitan estabilidad política. En este contexto, los Estados del CCG han iniciado un proceso gradual de distensión y acercamiento con Irán y han reanudado las relaciones diplomáticas. También han presionado a la Administración Trump para que no atacara a Irán.

Las represalias de Teherán y los ataques contra bases militares estadounidenses (y otros objetivos) han puesto de manifiesto la fragilidad de este acercamiento entre el CCG e Irán. Como es natural, los gobiernos del CCG han condenado lo que consideran una violación de su soberanía por parte de Irán y han exigido a Teherán que cese sus ataques con misiles y drones. Mientras tanto, algunas figuras públicas estrechamente vinculadas a sus gobiernos han expresado su preocupación por la guerra y la estabilidad regional. El príncipe Turki al Faisal, exjefe de los servicios de inteligencia saudíes y embajador en Estados Unidos, acusó al primer ministro israelí Netanyahu de "arrastrar al presidente Trump a una guerra innecesaria". Jalaf al Habtoor, un multimillonario de Dubái, se hizo eco de estos sentimientos.

Acusó a Trump de "poner a los Estados del Golfo en el centro de un peligro que no eligieron". En una reunión ministerial extraordinaria de la Liga Árabe, celebrada de manera telemática a principios de marzo, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr bin Hamad al Busaidi, argumentó que "los ataques israelo-estadounidenses contra Irán se produjeron en un momento en que las negociaciones diplomáticas mostraban avances hacia un posible acuerdo". Omán y los demás países árabes hicieron un llamamiento a realizar esfuerzos diplomáticos urgentes para contener el conflicto.

DINÁMICAS GLOBALES

El resultado de la guerra tendrá, sin duda, importantes implicaciones estratégicas en el equilibrio de poder en Oriente Medio y más allá. Igualmente importante es que el conflicto tendrá, con toda seguridad, repercusiones económicas globales. A pesar del mayor peso de las energías renovables y de la nuclear en el *mix* energético mundial, el petróleo y el gas natural siguen siendo los combustibles dominantes. Además, los principales consumidores asiáticos y europeos dependen en gran medida de los suministros de la región. Los Estados del CCG, Irán e Irak poseen reservas significativas y son importantes productores y exportadores. La mayor parte de estos suministros transita por el estrecho de Ormuz. Según la Agencia Internacional de la Energía, alrededor del 25% del comercio mundial de petróleo por vía marítima suele transitar por el estrecho, así como casi el 20% de las exportaciones mundiales de gas natural licuado (GNL). La guerra ha interrumpido significativamente el flujo de buques cisterna desde Ormuz. Los mercados energéticos, y de hecho toda la economía mundial, han expresado su profunda preocupación por las implicaciones a corto y largo plazo.

El impacto de esta interrupción varía de un mercado a otro. La revolución del esquisto en Estados Unidos ha transformado al país en una superpotencia energética mundial. Washington es el mayor productor de petróleo del mundo y un exportador neto de petróleo y gas. Esto, sin embargo, no significa que EEUU sea inmune a la interrupción del suministro energético. La economía mundial está muy integrada y EEUU es un socio comercial clave para otros mercados. Es probable que otros grandes productores y exportadores, como Canadá y Noruega, saquen partido de la subida de los precios.

Por otro lado, los mercados consumidores de Asia y Europa tendrán que realizar ajustes fundamentales. China, India, Japón y Corea del Sur son grandes importadores de petróleo y gas del Golfo. Una opción es recurrir a las reservas almacenadas o a Rusia. Mientras tanto, con el fin de sancionar al presidente Vladímir Putin por invadir Ucrania y obligarle a poner fin a la guerra, Europa ha reducido significativamente sus importaciones de petróleo y gas procedentes de Rusia. En los últimos años, Moscú ha perdido aliados importantes, como Al Assad en Siria y Maduro en Venezuela. Pero el hecho de que Trump persiga un cambio de régimen en Irán puede dar a Putin una justificación para su guerra en Ucrania y desviar la atención y las armas de Washington

del conflicto con Kiev; además, Putin se beneficiará de más exportaciones de petróleo y gas a precios más altos.

Por su parte, con poca o ninguna coordinación previa por parte del presidente Trump, la mayoría de los líderes europeos han expresado un apoyo tibio a la guerra. Critican que EEUU e Israel iniciaran los ataques mientras las negociaciones avanzaban, pero, al mismo tiempo, no querían criticar públicamente a Trump. Cuando estalló la guerra, los líderes europeos tuvieron que proteger a sus ciudadanos y sus inversiones en el Golfo y cumplir sus acuerdos de defensa con los Estados del CCG. Además, Europa sigue importando alrededor del 90% de su consumo de combustibles fósiles, y una gran parte de estas importaciones procede de la región del Golfo. Por último, Oriente Medio es el patio trasero de Europa. La inestabilidad en el Golfo puede provocar oleadas de refugiados, inmigrantes irregulares y tráfico de drogas.

EL CAMINO A SEGUIR

En algún momento, esperemos que más pronto que tarde, la Administración Trump afirmará que ha destruido el programa nuclear de Irán, sus capacidades navales, de drones y de misiles y las amenazas a Israel y otras potencias regionales. Por su parte, el gobierno iraní, si sobrevive a la guerra, argumentará que ha ganado al plantar cara a los ejércitos más poderosos del mundo y de la región. Dejando de lado estas afirmaciones y contraargumentos, habrá que abordar muchas incertidumbres posconflicto:

– ¿Cómo afectará la guerra a las elecciones de mitad de mandato en EEUU en noviembre y a los años que le quedan a la Administración Trump? Y, ¿qué lecciones militares se pueden extraer de esta guerra?

– ¿Qué ajustes tendrán que hacer la República Islámica y el nuevo líder supremo para garantizar la supervivencia del sistema y restablecer la disuasión frente a sus adversarios?

– ¿Articularán los líderes israelíes una estrategia política para garantizar la coexistencia pacífica con sus vecinos tras sus campañas militares en Gaza, Líbano, Siria, Yemen e Irán?

– ¿Cómo pueden los Estados del CCG e Irán restablecer la confianza y reanudar la desescalada y el acercamiento?

– ¿Cómo gestionará Turquía este cambio en el equilibrio de poder regional?

– ¿Cómo responderán los mercados energéticos mundiales (tanto consumidores como productores) a esta importante interrupción del suministro de petróleo y gas?

– ¿Tendrá el conflicto un impacto en la guerra de Ucrania, la política de China respecto a Taiwán y las relaciones entre Europa y Estados Unidos?

Las respuestas a casi todas estas preguntas, y a muchas más, seguirán siendo ambiguas durante mucho tiempo. Lo que está claro, sin embargo, es que en la guerra no hay ganadores, todos pierden. La guerra ha sido muy costosa para todas las partes implicadas, Oriente Medio es menos estable y el mundo es menos seguro. Es de esperar que prevalezca la sensatez en el entorno posterior al conflicto./

La sucesión de Mojtaba Jamenei supone una reconfiguración del sistema en el que la legitimidad clerical pesa menos, la sociedad sigue fuera del pacto y la Guardia Revolucionaria se consolida como árbitro indispensable del poder.

Luciano Zaccara es investigador principal en el New Ground Research.

EL IRÁN DE MOJTABA JAMENEI: UNA SUCESIÓN SIN APERTURA

Durante más de cuatro décadas, la República Islámica de Irán logró sostenerse sobre un equilibrio inestable pero funcional entre legitimidad revolucionaria, autoridad clerical, instituciones electivas limitadas y capacidad coercitiva. Nunca fue un sistema equilibrado en sentido liberal, pero sí uno capaz de combinar control y mediación, represión y representación restringida, ideología y pragmatismo. La muerte de Alí Jamenei y la rápida designación de su hijo Mojtaba no han resuelto esa ecuación, la ha inclinado aún más hacia el polo securitario y de supervivencia del sistema. Lo que emerge hoy en Irán no es una transición política en sentido clásico, ni una apertura asociada al relevo, sino una arquitectura del poder menos republicana, más militarizada y crecientemente dependiente de la coerción.

La lectura más inmediata del momento iraní invita a concentrarse en la sucesión: quién reemplazó a Jamenei, con qué apoyos y con qué margen de maniobra. Pero ese enfoque, por sí solo, es insuficiente. La cuestión decisiva no es únicamente quién ocupa el puesto, sino qué revela esa designación sobre la transformación del régimen. Muchas fuentes afirman que Mojtaba Jamenei fue impulsado por la Guardia Revolucionaria, que veía en él una figura más manejable y mejor alineada con una estrategia de línea dura, en un contexto en el que el conflicto externo y la necesidad de asegurar continuidad aceleraron el proceso. La sucesión, por tanto, no ha inaugurado una nueva etapa de consenso, sino que ha formalizado una correlación de fuerzas que ya venía desplazando el centro del sistema hacia los aparatos de seguridad.

Ese desplazamiento no puede entenderse sin la otra gran dimensión del momento iraní: la sociedad. La relativa calma en las calles no equivale a reconciliación entre Estado y sociedad, sino a una mezcla de represión, agotamiento, miedo y empobrecimiento. Las protestas de finales de 2025 y comienzos de 2026, detonadas por la crisis económica pero rápidamente convertidas en cuestionamiento político más amplio, fueron respondidas con una violencia extrema, arrestos masivos, desapariciones forzadas y un endurecimiento generalizado del control social. Lo que hoy parece estabilidad es, en gran medida, contención.

La consecuencia es una nueva ecuación interna, menos capacidad de integración, menos margen para la mediación política y más centralidad de la Guardia Revolucionaria como garante del orden. La República Islámica no deja de ser clerical, pero su núcleo operativo se vuelve cada vez más securitario. Y esa es, probablemente, la clave para leer el Irán de Mojtaba Jamenei.

LA SUCESIÓN: CONTINUIDAD FORMAL, MUTACIÓN REAL

En principio, la sucesión ha seguido el guion institucional del sistema. La figura del líder supremo permanece, la continuidad del *velayat-e faqih* no se discute y el relevo se ha presentado como una respuesta ordenada a una coyuntura extraordinaria. Pero la cuestión no reside en la forma, sino en el contenido político de esa continuidad. Mojtaba representa en principio a la Guardia Revolucionaria y los sectores más duros del *establishment*,



Una joven iraní hace el gesto de la victoria mientras pasa junto a los retratos del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, y del difunto líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en la plaza Naqsh-e Jahan. Isfahán (Irán), 11 de marzo de 2026./ MORTEZA NIKOUBAZL/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

que lo consideraban una opción funcional para preservar cohesión, disciplina y línea estratégica en medio de la guerra. Más que una investidura basada en autoridad religiosa autónoma o prestigio revolucionario propio, su ascenso refleja un acuerdo de supervivencia dentro del núcleo duro del régimen.

Eso introduce una paradoja difícil de ignorar. Una revolución que nació contra la monarquía y que convirtió la crítica al personalismo dinástico en parte de su legitimidad originaria termina aceptando una lógica de transmisión cuasi hereditaria, aunque envuelta en legalidad clerical. No se trata, desde luego, de una restauración monárquica. Pero sí de una evolución que vacía parte del relato fundacional de la República Islámica. La continuidad familiar en la cúspide del sistema no solo erosiona la narrativa antimonárquica; también subraya hasta qué punto los mecanismos internos de renovación política se han estrechado. Cuando la sucesión se resuelve reforzando a la vez la continuidad sanguínea y la tutela securitaria, lo que se proyecta no es una institucionalidad robusta, sino la fragilidad del principio de legitimidad.

El problema de Mojtaba no es únicamente el apellidado. Es la naturaleza de la autoridad que encarna. Su figura no llega al puesto respaldada por una jerarquía religiosa incontestable ni por un recorrido político comparable al de su padre y al fundador de la República y primer líder, el ayatolá Ruhollah Jomeini. Llega, más bien, como producto de una necesidad sistémica:

asegurar mando, evitar fisuras y ofrecer una fachada de continuidad mientras el verdadero equilibrio del poder se desplaza hacia quienes controlan los instrumentos de coerción. La cercanía de Mojtaba con la Guardia lo convertiría en una figura más maleable y menos neutral. Esa dependencia altera la lógica del sistema, porque la autoridad del nuevo líder nace ya condicionada por el actor que debería, en teoría, obedecerlo y rendirle cuenta.

Por eso la sucesión no cierra la crisis del régimen; apenas la administra. Resuelve la necesidad inmediata de mando, pero no responde a la pregunta de fondo sobre la base social del sistema ni sobre su capacidad de absorber tensiones internas. En realidad, cuanto más visible se vuelve la dependencia del nuevo líder respecto de la Guardia y del aparato de seguridad, más evidente resulta que el componente clerical, por sí solo, ya no basta para estructurar el poder. La religión no desaparece como lenguaje de legitimación, pero pierde centralidad relativa frente a una lógica de supervivencia que privilegia disciplina, control y obediencia. El resultado es un orden menos persuasivo y más abiertamente coercitivo.

La elección de Mojtaba tampoco resuelve la vieja tensión entre continuidad y adaptación. Al contrario, la agrava. Preserva la forma del régimen, pero reduce aún más su capacidad de presentarse como un sistema con mecanismos internos de corrección. El mensaje implícito es claro: ante una coyuntura límite, la prioridad no

El régimen no busca reconstruir consenso, sino administrar el disenso de la manera menos costosa posible. Esa estabilidad es precaria: contiene, pero no integra, aplaza, pero no resuelve

es abrir, reformar o recomponer el vínculo con la sociedad, sino blindar el centro. Y blindarlo, en el Irán actual, significa depender más de quienes controlan las palancas coercitivas del Estado.

LA SOCIEDAD: PROTESTA CONTENIDA, NO INTEGRACIÓN RECUPERADA

La otra tentación analítica consiste en interpretar la ausencia de una movilización sostenida como señal de normalización interna. También aquí conviene desconfiar de las apariencias. Las protestas que estallaron a finales de diciembre de 2025 comenzaron en el Gran Bazar de Teherán y se expandieron rápidamente a múltiples provincias, en el mayor episodio de contestación en tres años, impulsado por el desplome del rial, una inflación elevada y el deterioro de las condiciones de vida. La mayoría de los analistas coinciden en que el detonante fue económico, pero también en que las demandas desbordaron rápidamente ese marco y adquirieron un carácter más amplio, incluyendo críticas estructurales al sistema político.

Ese dato es fundamental porque confirma algo que el régimen intenta negar desde hace tiempo: en Irán, lo económico ya no puede aislarse de lo político. La protesta por la moneda, los precios o el empleo deja de ser una reclamación sectorial y se convierte con rapidez en impugnación del orden de poder. Las movilizaciones se extendieron al menos a 27 provincias y la respuesta estatal terminó con miles de muertos, arrestos masivos y desapariciones forzadas. La violencia posterior fue todavía más severa. El 13 de enero, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo estar "horrorizada" por la represión y citó fuentes propias que hablaban ya de cientos de muertos. Semanas más tarde, Human Rights Watch describió una campaña coordinada de terror estatal, con tortura, detenciones arbitrarias a gran escala y militarización de ciudades enteras tras las matanzas del 8 y 9 de enero.

La dimensión represiva no fue solo policial; fue también tecnológica y territorial. Tras las masacres, las autoridades mantuvieron una fuerte presencia militar, instalaron controles y *checkpoints* en distintas ciudades y aplicaron medidas *de facto* similares a un toque de queda. La represión, en otras palabras, no buscó únicamente desactivar las protestas de ese momento, sino impedir la posibilidad misma de una nueva articulación social. Eso refuerza una idea central de este artículo: la calma actual no expresa una restauración del vínculo

entre Estado y sociedad, sino una relación de fuerza profundamente asimétrica.

Sin embargo, sería un error reducir el cuadro únicamente a la represión abierta. El gobierno ha intentado gestionar el malestar con una combinación más sofisticada de coerción selectiva y flexibilidad táctica. A finales de 2025 había una cierta relajación visible en la aplicación cotidiana de algunas restricciones sociales que coexistían con un endurecimiento político más profundo, marcado por la persecución de activistas, el hostigamiento a disidentes y un aumento de las ejecuciones. Esa combinación no sugiere una liberalización genuina, sino un intento de administrar tensiones distinguiendo entre válvulas de escape culturales y cerrojo político.

Ahí está una de las claves del momento iraní. El sistema parece haber aprendido que algunas concesiones superficiales pueden aliviar la presión social, siempre que no den lugar a una organización política autónoma. Puede tolerar comportamientos antes más vigilados en la esfera cotidiana y, al mismo tiempo, reforzar el castigo ejemplar contra quienes cruzan el umbral de la contestación política. No es apertura; es una racionalización de la represión. El régimen no busca reconstruir consenso, sino administrar el disenso de la manera menos costosa posible. Y ese tipo de estabilidad es, por definición, precaria: contiene, pero no integra; aplaza, pero no resuelve.

Por eso el silencio social en Irán debe leerse con cautela. No indica que la sociedad haya vuelto a confiar en el sistema o que la solidaridad por la guerra haya cohesionado a la sociedad por completo, sino que el costo de la protesta se ha vuelto extremadamente alto. El problema para el régimen es que esa contención no genera legitimidad nueva. Solo compra tiempo. Y cuanto más depende de la coerción para mantener la calma, más revela la profundidad de la fractura entre Estado y sociedad.

LA GUARDIA REVOLUCIONARIA: DEL PILAR DEL RÉGIMEN AL ÁRBITRO DEL SISTEMA

La tercera pieza del cuadro, y probablemente la más decisiva, es la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). Su peso no es nuevo. Desde hace años, el IRGC funciona como una estructura militar, económica, política e ideológica con capacidad de veto y con presencia directa en ámbitos clave del Estado. Pero la etapa post-Jamenei parece haber acelerado esa trayectoria hasta un punto cualitativamente distinto. Tras la muerte de Jamenei, la Guardia ha reforzado su control sobre la toma de decisiones en tiempo de guerra. Ya estaba involucrada en todas las grandes decisiones pero ha endurecido su enfoque tanto en política exterior como en seguridad interna, distanciándose notablemente de la presidencia de Pezeshkian. La propia lógica organizativa del cuerpo (descentralización del mando, preparación de sucesores y continuidad operativa ante estrategias de decapitación) muestra hasta qué punto se ha concebido a sí mismo como garante último del sistema.

Lo más importante no es solo que la Guardia haya ganado peso, sino la naturaleza de ese peso. La estra-



Manifestación para conmemorar el Día Internacional de Al Quds. Al fondo, una imagen simbólica de una ciudad israelí envuelta en llamas. Teherán, 13 de marzo de 2026. /MORTEZA NIKOUBAZI./ NURPHOTO VÍA GETTY IMAGES

tegia de descentralización se diseñó para permitir que el IRGC respondiera simultáneamente a amenazas externas y a desafíos internos. Es decir, la Guardia no concibe frente militar y frente doméstico como esferas separadas, sino como partes de un mismo problema de supervivencia. Ese dato resulta crucial para entender la política iraní actual: la securitización ya no es una respuesta coyuntural a una guerra o a una ola de protestas, sino el principio organizador del régimen.

La sucesión de Mojtaba encaja plenamente en esa lógica. No porque la Guardia haya sustituido formalmente al clero, sino porque se ha convertido en el actor sin el cual la continuidad del sistema resulta difícilmente pensable. Actúa como garante del relevo en la cúspide, como dique frente a un eventual levantamiento interno y como vector de la línea dura en política regional. La presidencia, el Parlamento e incluso parte del estamento clerical conservan relevancia, pero en un marco cada vez más condicionado por prioridades de seguridad. La política civil sobrevive, sí, aunque con un margen visiblemente más estrecho.

Eso no significa que Irán se haya convertido en un gobierno militar clásico. El régimen sigue necesitando legitimación religiosa, procedimientos constitucionales y cobertura institucional. Pero lo que cambia es el centro de gravedad. La religión recubre; la coerción organiza. El componente republicano permanece formalmente, pero pierde sustancia como mecanismo de mediación. El gran ganador del momento post-Jamenei

no es solo un nuevo líder, sino una institución que ya no se limita a proteger al régimen: lo estructura.

CONCLUSIÓN

El Irán de Mojtaba Jamenei no entra en una fase de apertura, pero tampoco en un colapso inminente. En eso conviene evitar tanto la lectura alarmista como la complaciente. Lo que muestran los hechos recientes es algo más complejo. El régimen conserva capacidad de mando, aparato coercitivo y disciplina suficiente para evitar una implosión inmediata, pero lo hace sobre una base social deteriorada y con una dependencia creciente de la fuerza. La sucesión de Mojtaba no inaugura una nueva legitimidad; confirma una nueva dependencia.

La clave está, precisamente, en esa combinación. Hay continuidad, porque la República Islámica ha logrado gestionar el relevo, mantener la cadena de mando y contener la protesta. Pero también hay una mutación profunda, la autoridad clerical ya no basta para ordenar por sí sola el sistema; la sociedad ya no puede ser reincorporada mediante promesas limitadas de reforma; y la mediación política civil se estrecha a medida que el aparato coercitivo se convierte en el árbitro indispensable del poder. La República Islámica sigue siendo islámica, pero es cada vez más un Estado de seguridad con cobertura religiosa.

Ese es, probablemente, el rasgo definitorio del nuevo momento iraní. No una transición hacia otro régimen, sino una reconfiguración interna del mismo: menos república, menos mediación, menos política; más tutela, más disciplina y más Guardia. Y esa transformación ayuda a entender por qué la sucesión no ha traído apertura ni ruptura, sino continuidad. En el Irán de hoy, sobrevivir pesa más que legitimarse./

Aunque Israel y EEUU consigan eliminar la República Islámica de Irán y neutralizar la causa palestina, no garantiza la paz en la región. Porque la paz sin negociación, es decir por sometimiento, no es sostenible.

Xavier Mas de Xaxàs es corresponsal diplomático, *La Vanguardia*.

GUERRA, TIRANÍA Y COLONIALISMO: LOS MALES INCURABLES DE ORIENTE MEDIO

Cuando las bombas dejan de caer, todo está por hacer, pero como caen con tanta fuerza y frecuencia, todo está siempre por hacer. No hay escapatoria a la provisionalidad en Oriente Medio ni tampoco a los gobiernos autoritarios. Después de cada guerra, todo sigue más o menos igual. Incluso revoluciones tan importantes como la iraní en 1979 y las primaveras del 2011 no cambiaron las cosas. Irán sustituyó un régimen represor por otro y la democracia no se abrió paso en el norte de África, en Siria, Yemen y las monarquías del golfo Pérsico a pesar de los esfuerzos de una juventud que se rebeló contra una jerarquía que les niega la emancipación.

La injerencia de Estados Unidos y sus aliados en la región no ha contribuido a crear sociedades más justas, al contrario. No hay ningún ejemplo de una intervención militar occidental que haya propiciado un cambio de régimen a mejor, es decir, a un Estado de derecho. Washington acumula un largo historial de fracasos. Su fuerza militar se ha estrellado una y otra vez contra la resiliencia de enemigos *a priori* inferiores. Sucedió en Líbano en 1983, cuando dos terroristas suicidas de Hezbolá atacaron los cuarteles de las fuerzas estadounidenses y mataron a más de 300 militares. Y sucedió en el año pasado, cuando los hutíes resistieron una intensa campaña de bombardeos contra sus posiciones en el norte de Yemen.

El nacimiento de la República Islámica de Irán en 1979 es, tal vez, el mayor fracaso de Estados Unidos en Oriente Medio. En 1953, la CIA organizó un golpe de Estado contra el primer ministro, elegido democrática-

mente, con la intención de fortalecer al sha Reza Pahlavi, que era la mejor garantía para sus intereses. El pueblo iraní sufrió las consecuencias de un régimen injusto y brutal. La elite comercial de Teherán capitalizó este descontento para alentar el cambio. La presión social acabó con el sha y dio paso a una transición que debía ser democrática, pero que los ayatolás no tardaron en secuestrar.

Irán se convirtió entonces en una alternativa islámica a Occidente y a sus aliados en la región, sobre todo en Irak y las monarquías absolutistas del Golfo. Han pasado 47 años y sigue siéndolo.

Esta alternativa es la razón de ser de Irán. El régimen la esgrime para justificarse. El chiísmo persa como alternativa al sunismo saudí. La república como alternativa a la monarquía. El antiimperialismo como alternativa a la colaboración con Occidente.

La propaganda explota los sermones de la jerarquía eclesiástica y las gestas contra Estados Unidos. Ninguna es más importante que el secuestro de 66 diplomáticos en la embajada de Teherán a finales de 1979.

Arabia Saudí, Israel, Estados Unidos... La República Islámica también necesita enemigos para justificarse, para ocultar el fracaso de la revolución y para revestirla de un destino manifiesto, sin duda divino, que también obliga a aplastar a Israel, caballo de Troya en tierras islámicas de un Occidente cristiano, judío, corrupto y decadente.

Los ayatolás luchan y predicán. Libraron una guerra de ocho años contra el Irak de Saddam Hussein, aliado de Estados Unidos, que terminó muy mal. Hubo más de

un millón de muertos, la mayoría iraníes, mártires que murieron en vano, pero que el régimen exhibe como ejemplo del sufrimiento que es capaz de asumir.

El terrorismo ha sido una estrategia política de la República Islámica casi desde su nacimiento. Una red de grupos armados en Yemen, Siria, Irak, Gaza y Líbano actúan bajo sus órdenes y gracias a su ayuda financiera y militar.

Incapaces de vivir y dejar vivir, los ayatolás han sido una amenaza constante para su propio pueblo, víctima de uno de los sistemas más represivos del mundo. La elite religiosa, política y militar de la República Islámica hace tiempo que perdió el contacto con la realidad y, como sucede con cualquier tiranía, ha debido incrementar la confrontación y la represión para sostenerse.

Palestina ha sido la causa que ha permitido a Irán enfrentarse a Israel disfrazado de justiciero solidario. Hezbolá desde 1982 y Hamás desde 2006 han sido amenazas existenciales para el Estado judío. Estas organizaciones todavía siguen en pie, pero apenas son una sombra de lo que fueron. Las Fuerzas de Defensa Israelíes las han destrozado. Irán no logró sostenerlas durante la prolongada campaña militar que sucedió a la masacre del 7 de octubre de 2023. Ese día Hamás asestó un golpe atroz a la sociedad israelí y provocó una respuesta política y militar de Israel que excedió toda la violencia sufrida en Oriente Medio desde la Nakba.

Gaza ilustra bien estos tiempos de ruptura, de prevalencia de la fuerza sobre la razón, sobre la moral y el derecho Internacional, de bombas que caen para que todo esté siempre por hacer.

El primer consejo que el presidente norteamericano, Joe Biden, ofreció al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuando lo visitó pocos días después del ataque de Hamás fue que no se dejara dominar por la venganza, es decir, que no cometiera el mismo error de Estados Unidos a raíz de los atentados del 11-S.

Los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York y contra el Pentágono del 11 de septiembre del 2001 causaron en Estados Unidos una conmoción sin precedentes. Y lo mismo ocurrió en Israel el 7 de octubre del 2023. Estados Unidos decretó entonces una “guerra contra el terror” que supuso la vulneración flagrante de los valores que decía defender. A corto plazo sirvió para neutralizar a Al Qaeda, pero a largo plazo ha deteriorado la influencia de Estados Unidos en el mundo, sobre todo en los países del Sur Global. Usar la fuerza de forma excesiva, saltándose todas las salvaguardas del Estado de Derecho transmite la certeza de que nadie puede escapar a la arbitrariedad de la Casa Blanca. Hoy esta amenaza es más evidente que nunca.

Netanyahu desoyó a Biden. No podía hacerle caso. Necesitaba la guerra para ocultar su enorme responsabilidad en la matanza de Hamás. El ejército israelí ha matado a unas 70.000 personas en Gaza, entre ellas más de 18.000 niños, y utilizado el hambre como arma de guerra. Sobre la Franja han caído tantas bombas como seis Hiroshimas. No es un lugar apto para la vida.

Una comisión independiente, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acusa a Israel de genocidio. La Corte Penal Internacional ha



La elite religiosa, política y militar de la República Islámica hace tiempo que perdió el contacto con la realidad y, como sucede con cualquier tiranía, ha debido incrementar la confrontación y la represión para sostenerse

Retrato del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamienei. Teherán, le 9 de marzo de 2026. /MORTEZA NIKOUBAZI/NURPHOTO VÍA GETTY IMAGES

En las guerras de Oriente Medio nunca hay vencedores ni vencidos. Israel ha ganado todas las guerras, pero ninguna victoria le ha servido para vivir en paz

cursado orden de busca y captura contra Netanyahu, al que acusa de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Netanyahu necesita la guerra para sobrevivir. Le ayuda a ganar elecciones y ha convencido a Donald Trump, sucesor y antítesis de Biden, de que a él también le conviene apretar el gatillo.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos declararon la guerra a Irán por segunda vez en apenas ocho meses.

En las guerras de Oriente Medio nunca hay vencedores ni vencidos. Israel ha ganado todas las guerras, pero ninguna victoria le ha servido para vivir en paz. Las guerras empiezan, pero nunca acaban del todo. Es muy difícil salir de ellas. Se adormecen, pero las causas que las provocan siguen vivas. La paz de Israel con Egipto y Jordania, así como los acuerdos de Oslo, no acabaron con las guerras en Oriente Medio porque no resolvieron el mal de todos los males, el problema estructural que hunde a la región en la violencia, el pecado original del colonialismo.

Francia y Reino Unido, primero, Estados Unidos, después, y hoy, Israel, han sometido a los pueblos de la región para favorecer sus intereses políticos y económicos.

La lucha de Israel no es solo existencial. También es expansionista. Necesita más territorio del que le concedió la ONU en 1948. Cree que tiene derecho a ocupar las tierras palestinas. Lo justifica sobre la fantasía del Antiguo Testamento. El Gran Israel es el Israel bíblico.

Tiene razón Israel cuando dice que no hay nada que negociar con quien desea su desaparición. Pero tiene razón también Hamás y otros grupos armados cuando dicen que Israel no quiere palestinos al oeste del río Jordán.

Antes de ser acusado de genocidio, Israel era acusado de *apartheid*. Los palestinos israelíes son ciudadanos de segunda clase y los palestinos de Gaza y Cisjordania viven bajo la ocupación militar y a merced de la violencia de los colonos, punta de lanza de un expansionismo mesiánico.

No habrá paz, por lo tanto, mientras Israel sea, por encima de todo, el Estado de los judíos. El sionismo que debía protegerlos para siempre, los condena a vivir rodeados de enemigos, parapetados detrás de muros inexpugnables, siempre a la defensiva, necesitados del apoyo incondicional de Estados Unidos.

El fracaso del sionismo debería dar paso a un Estado democrático, laico y multiétnico, formado por 14 millones de personas, la mitad judíos y la otra mitad, palestinos. La racionalidad de esta solución, sin embargo, es imposible llevarla a la práctica.

No hay mediación posible entre el Israel de la guerra y el Hamás del nihilismo. Estados Unidos, además, ya no podrá ser árbitro de nada. Los palestinos no olvidarán que sus bombas arrasaron Gaza.

El presidente Trump se jacta de haber llevado la paz a Gaza. El alto el fuego que arrancó a Netanyahu en otoño de 2025, sin embargo, no es una solución. Hamás no se ha desarmado y el ejército israelí mantiene el control sobre más de la mitad de la Franja. No existe ni siquiera un mecanismo para que los dos bandos, poco a poco, construyan una relación de confianza que, por mínima que sea, es imprescindible para fijar los términos de una relación futura. Sin esta confianza, la reconstrucción es imposible.

El gobierno de Netanyahu no contempla una nueva Gaza bajo administración palestina y con viabilidad económica. El éxito de Gaza sería una amenaza demasiado importante porque sabe muy bien que siempre habrá palestinos dispuestos a tomar las armas mientras se les niegue el derecho a la autodeterminación. Mucho más conveniente a sus intereses es la contención física de los gazatíes en un territorio sin ninguna posibilidad de sostenerse por sí mismo.

Esta estrategia colonialista y racista también la aplica en Cisjordania, donde el objetivo es concentrar a la población en núcleos urbanos a los que solo se podrá acceder a través de controles militares. Las condiciones de vida dentro de los enclaves, según prevén los planes del gobierno Netanyahu, han de ser duras para favorecer el exilio voluntario de sus habitantes. Fuera de ellos, los colonos tendrán vía libre para construir más asentamientos que luego serán anexionados.

Netanyahu calcula que podrá imponerse de nuevo en las elecciones legislativas previstas para otoño. La guerra es una buena aliada electoral. En momentos de escalada bélica, la sociedad israelí cierra filas con sus líderes.

El primer ministro, por lo tanto, confía en que su contribución al colapso de la teocracia iraní y la pacificación del territorio palestino a través de la coacción armada será suficiente para que Arabia Saudí se avenga a una relación comercial que transforme Oriente Medio.

Eliminada la República Islámica de Irán y neutralizada la causa palestina –que siempre ha sido un estorbo para todos los países árabes– Netanyahu podría demostrar que tenía razón cuando defendía la paz mediante la fuerza.

La supremacía militar, sin embargo, no garantiza la paz cuando el enemigo tiene la capacidad de reemplazar a sus dirigentes tan pronto como son abatidos. ¿Cuántos jóvenes gazatíes, supervivientes de la campaña militar israelí, asumirán la senda del terrorismo?

La paz sin negociación, es decir, por sometimiento, no es sostenible. Es la paz de los ricos, la que contemplan, por ejemplo, los acuerdos de Abraham. Las monarquías del Golfo desean establecer lazos comerciales con Israel, sobre todo para comprar tecnología militar y de vigilancia. Pueden pasar por encima de la causa palestina y reconocer al Estado judío, pero esta paz no podrá transformar las sociedades árabes. Sin duda no podrá hacerlo en las monarquías del Golfo que funcionan como grandes corporaciones y se nutren de mano



Campamentos de tiendas de campaña a lo largo de la costa de la ciudad de Gaza, donde las condiciones de vida siguen siendo extremadamente difíciles. Gaza, marzo de 2026./SAEED M.M.T. JARAS/ANADOLU VIA GETTY IMAGES

de obra asiática y muy barata. En estos países los ciudadanos viven de las rentas que reparte el estado-corporación e incluir a Israel en el negocio aumentará su riqueza. Sin embargo, en el resto de la región, en países que padecen desde siempre una gran desigualdad, la paz con Israel no resuelve ninguna patología social. Egipto y Jordania lo demuestran.

Estados Unidos, Israel y los reinos absolutistas del Golfo construyen en Oriente Medio un orden sin Estado de Derecho y sin derechos humanos que solo puede sostenerse por la fuerza y la tiranía.

Las intervenciones militares norteamericanas se han disfrazado hasta ahora con el manto de la democracia y la autodefensa, pretextos para que la opinión pública aceptara la agresión. El cambio de régimen, sin embargo, nunca ha funcionado.

La invasión de Irak es el ejemplo más claro de que no se puede transformar un país desde el exterior. Al ejército norteamericano le bastaron 22 días en la primavera de 2003 para ocupar el país y derrocar a Saddam Hussein. Estados Unidos se mantuvo en Bagdad durante ocho años, hasta 2011, cuando tuvo que retirarse sin haber alcanzado sus objetivos políticos, es decir, colonialistas.

Trump ganó las elecciones presidenciales de 2016 riéndose de los neoconservadores que creían en los cambios de régimen. Los acusaba de ser unos ilusos,

de “intervenir en sociedades complejas que ni siquiera entienden”. Renegaba de los esfuerzos para cambiar países como Irak y Afganistán que, según su criterio, estaban más allá de toda salvación. Los fracasos allí, así como en Libia y Siria, aconsejaban mucha prudencia en el tablero geoestratégico de Oriente Medio.

Trump inició su segundo mandato en enero de 2025 con la promesa de que sería el presidente de la paz. Desde entonces, sin embargo, ha lanzado a sus fuerzas armadas contra siete países. Ahora cree que la virilidad del comandante en jefe le abrirá un espacio destacado en la historia y en los jardines que rinden homenaje a los grandes estadistas.

El orden mundial se rompe bajo el peso de Donald Trump, un presidente que, posiblemente, nunca entenderá las consecuencias de sus actos porque no es un estratega, sino un promotor inmobiliario. No le importan la historia ni los pueblos que habitan los territorios donde quiere edificar sus torres doradas, que no son más que castillos en el aire.

Un día, no sabemos cuándo, el mundo y, sobre todo Oriente Medio, superará el delirio de Donald Trump. Ese día las bombas dejarán de caer y todo estará por hacer, pero todo será también un poco más fácil. Los pueblos semitas saben muy bien que después de cada diluvio hay una oportunidad./

El acuerdo entre el gobierno sirio y las FDS abre un nuevo escenario que mejora las relaciones fronterizas con Turquía y refuerza las negociaciones con el PKK, aunque aún sin consolidarse.

Carmen Rodríguez López es profesora del departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid.

TURQUÍA ANTE LA CUESTIÓN KURDA EN SIRIA

La caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 dio paso a un inusitado escenario que afectó no solo a la situación interna del país sino a dinámicas regionales e internacionales. Para el gobierno turco se planteó la oportunidad de colaborar estrechamente con nuevos actores al frente de un ejecutivo interino liderado por Ahmed al Shara, líder de la milicia islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), categorizada en su momento como organización terrorista, tanto por diferentes Estados como por Naciones Unidas. La paulatina legitimación de estos líderes y su progresiva consolidación al frente de Siria facilitó a las élites turcas la consecución de algunos de los objetivos surgidos durante la guerra civil en este país y expandir el área de cooperación con el gobierno sirio en cuestiones muy diversas que cubren desde el ámbito económico, al securitario o la delimitación de zonas marítimas.

LOS OBJETIVOS DE TURQUÍA DURANTE LA GUERRA CIVIL SIRIA

Turquía había normalizado relaciones con Siria ya antes de la llegada al poder del partido de Justicia y Desarrollo (AKP) en 2002, tras el acuerdo de Adana, auspiciado por el gobierno de Bülent Ecevit en el que Siria se comprometió a no servir de base logística al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) –grupo armado categorizado como terrorista por Turquía, la UE y Estados Unidos– y, especialmente a su líder, Abdullah Öcalan.

La llegada al poder en Siria de Bashar al Assad y del AKP en Turquía, liderado por Recep Tayyip Erdoğan,

dio paso a una nueva etapa en la que se resolvieron históricas disputas territoriales, se firmó un acuerdo de libre comercio en 2004 y otro para la liberalización bilateral de visados en 2009 y se estableció un Consejo Estratégico de Alto Nivel ese mismo año.

Los vínculos personales entre el primer ministro turco y el presidente sirio fueron tan estrechos que llegaron a veranear juntos en 2008. Al desatarse las protestas contra el régimen de Al Assad, la diplomacia turca intentó convencerle de llevar a cabo reformas que pudieran responder a las demandas de la población. Al no producirse resultados en este sentido, el gobierno de Erdoğan dio un giro de 180 grados en su relación con el país vecino y acogió ya en 2011 en su territorio tanto a la oposición política emergente en torno al Consejo Nacional Sirio, como a parte de la oposición armada que se estaba conformando en torno al Ejército Libre Sirio (ELS) (Philips, 2012).

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Ahmet Davutoğlu, en la Asamblea General de Naciones Unidas reunida en 2012 demandó directamente la caída del régimen.

La progresiva desintegración territorial de Siria revitalizó la importancia de otros actores percibidos como nuevas amenazas por el gobierno turco. Por un lado, la expansión de Daesh o autodenominado Estado Islámico en Siria, por otro la conformación de un gobierno autónomo kurdo –bajo el mando del Partido de la Unión Democrática (PYD) y su brazo armado, las Unidades de Protección Popular (YPG) y las Unidades de Protección de las Mujeres (YPJ) en el norte de



Manifestación en defensa de los derechos kurdos tras el acuerdo entre las FDS y el gobierno sirio. Qamishli, Siria, 10 de febrero de 2026./GUY SMALLMAN/GETTY IMAGES

Siria-, denominado Rojava, también conocido desde 2018 como la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) y desde 2023 como la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (DAANES). La lucha entre las fuerzas kurdas y Daesh en Kobane, ciudad fronteriza con Turquía en el norte de Siria, incrementaron su prestigio internacional. Estados Unidos decidió apoyarlas en terreno y facilitó la creación de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en 2015, conformadas en su núcleo principal por fuerzas kurdas, a las que se sumaron grupo árabes, turkmenos y asirios con el objeto de transmitir una imagen de diversidad étnica. Este apoyo causó fuertes fricciones entre el gobierno turco y la administración estadounidense, puesto que para el primero las YPG, las YPJ y las FDS como su derivada, eran tachadas también como organizaciones terroristas por su relación y afinidad con el PKK. Las negociaciones de paz iniciadas en 2013 con esta organización habían colapsado en 2015, lo que contribuyó a exacerbar la oposición frontal a la consolidación de una Rojava autónoma o independiente.

A partir de 2016 el gobierno turco lanzó cuatro incursiones militares en Siria: operación Escudo del Éufrates (agosto de 2016-marzo de 2017); operación Rama de Olivo (enero a marzo de 2018); operación Primavera de Paz (octubre 2019); operación Escudo de Primavera (febrero a marzo de 2020). Los objetivos fueron evolucionando. Si bien la primera se gestó oficialmente con la finalidad principal de detener la expansión de Daesh, en ella también se pusieron las bases de las próximas operaciones que tuvieron como propósito evitar la consolidación de una región autónoma kurda con con-

tinuidad territorial y establecer una “zona segura” con la que evitar la llegada de nuevos refugiados a Turquía y promover el regreso de refugiados en suelo turco a Siria. De acuerdo con datos de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, Turquía es uno de los países con mayor población de refugiados del mundo –a mediados de 2025 acogía a 2,6 millones de personas entre las que se incluían unos 2,5 millones de sirios bajo protección temporal. La crisis económica que afectó a Turquía en 2018 intensificó la difusión de discursos antirefugiados y convirtió esta cuestión en uno de los principales ejes de articulación de la oposición al gobierno, así como en un asunto prioritario de la agenda política nacional. Precisamente, las relaciones del gobierno turco con Hayat Tahrir al Sham se gestaron durante la guerra civil siria, ya que la presencia de este grupo en la región de Idlib frenó el avance de nuevas oleadas de refugiados sirios a suelo turco.

Ante la resiliencia del régimen sirio de Al Assad y la rehabilitación de sus relaciones con otros países árabes a partir de 2018, los contactos bilaterales con Turquía se restablecieron progresivamente hasta favorecer el encuentro de sus ministros de Defensa en Moscú en 2022. El gobierno turco tenía dos objetivos prioritarios: evitar la consolidación de la autonomía en AANNES y promover la repatriación de refugiados sirios. Las conversaciones, sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo tangible, puesto que el gobierno turco no estaba dispuesto a retirar su presencia del suelo sirio sin garantías de Al Assad en estos dos ámbitos.

NUEVOS ESCENARIOS PARA LA CUESTIÓN KURDA EN SIRIA Y TURQUÍA TRAS LA LLEGADA DE AL SHARA AL PODER

Con la caída del régimen y la llegada de nuevos actores al poder en diciembre de 2024, se inauguró una nueva etapa, para la que Turquía buscó apoyos internacionales

Con la caída del Al Assad, Turquía demandó que Siria fuera un Estado unitario, en contraposición a las aspiraciones federalistas de las FDS

con los que favorecer la legitimidad y el reconocimiento del ejecutivo de transición. Los países del Golfo fueron clave en este sentido para impulsar el levantamiento de las sanciones que pesaban sobre Siria. El príncipe saudí Mohamed bin Salman auspició, de hecho, en Riad un encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y el nuevo presidente sirio Ahmed al Shara en mayo de 2025, al que se unió de manera telemática Erdoğan.

En este contexto político, y tras años de guerra civil, se presentó la posibilidad y la necesidad de diseñar una nueva rearticulación del Estado ante la que Turquía expuso su demanda de que Siria fuera un Estado unitario, en clara contraposición a las aspiraciones federalistas defendidas por las FDS. En esto coincidía con los intereses del gobierno sirio, que prefería el debilitamiento de las FDS, ya que eran la única fuerza real y organizada en Siria con la que debían plantearse compartir el poder político.

Tras la caída del régimen de Al Assad, el 10 de marzo de 2025 se firmó un acuerdo de principios para la integración de las FDS en el futuro Estado sirio y se abrió un periodo de negociaciones para concretar las medidas que llevarían a la consecución de dicho objetivo, apoyado también de manera explícita por la administración estadounidense.

El acuerdo contemplaba la integración de las FDS en las fuerzas de seguridad sirias, la devolución escalonada al gobierno central de cuestiones estratégicas, como pasos fronterizos, infraestructuras energéticas o la custodia de los prisioneros de Daesh, así como potenciar derechos políticos y culturales para la comunidad kurda.

Este acuerdo, sin embargo, fue interpretado por las partes de manera distinta: para el gobierno interino sirio era una manera de restaurar su poder territorial progresivamente sobre todo el territorio, de la mano de un control militar centralizado, entendiendo que el acuerdo llevaba a absorber a las FDS más que pactar con ellas un reparto de poder. Para las FDS, por su parte, era una oportunidad para garantizar derechos políticos y una autonomía regional a través de una gobernanza descentralizada a nivel local, con un cierto control sobre cuestiones securitarias, en el que su fuerza militar pudiera organizarse de manera independiente. Las FDS aspiraron a integrarse como un bloque en el ejército sirio, mientras que el gobierno de Al Shara quería su integración de manera individual en unidades militares regulares (Genç, 2026).

Desde el gobierno turco se sugirió de manera reiterada que las FDS podrían estar retrasando la aplicación

del acuerdo, al considerar que sería posible contar con el apoyo de Israel para avanzar en sus posiciones (Tol, 2026). Meses después y ante el estancamiento en las negociaciones, las fuerzas sirias lanzaron una ofensiva en enero de 2026 contra las FDS, que finalizaron con la firma de un nuevo acuerdo de 14 puntos entre las dos partes.

Este pacto conlleva un importante repliegue militar y territorial de las FDS. De hecho, implica su retirada de las provincias de mayoría árabe Raqqa y Deir Ezzor, la integración de todas las instituciones civiles de la provincia de Al Hasakah en las instituciones del Estado sirio y la retirada de presencia militar pesada de la ciudad de Kobane, para ser sustituida por unas fuerzas de seguridad conformadas por residentes y por el establecimiento de una fuerza policial local, dependiente administrativamente del ministerio del Interior de Siria. Este pacto supone además la entrega del control de los puntos fronterizos, de los prisioneros de Daesh y de los campos de gas y petróleo al gobierno sirio.

LA POSICIÓN DE TURQUÍA ANTE EL ACUERDO

El acuerdo incorpora también dos cuestiones por las que Turquía ha abogado de manera reiterada y contundente: la integración de las FDS en el ejército sirio de manera individual y no como una fuerza unificada y la expulsión de los miembros del PKK no sirios del país vecino. Los 14 puntos plantean, a su vez, la total integración del personal de seguridad y militar de las FDS en las estructuras de los ministerios sirios de Defensa e Interior de manera individual y también de personal civil y de seguridad en otras estructuras estatales.

El acuerdo daba la bienvenida al decreto presidencial nº 13 de 2026, por el que se establecía el reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos kurdos y se garantizaba la ciudadanía a todos ciudadanos de origen kurdo residentes en Siria. El decreto confirmaba la lengua kurda como oficial y avalaba su enseñanza en entidades públicas o privadas en zonas con una significativa mayoría kurda. El decreto reconocía, además, de manera simbólica el 21 de marzo, fecha en la que se celebra el Nowruz, como una fiesta nacional.

Erdoğan declaró ante la prensa que el reciente acuerdo había contribuido a aliviar la presión sobre el nuevo proceso de paz iniciado en octubre de 2024 entre el Estado turco y los militantes kurdos del PKK. Con motivo de este proceso, Abdullah Öcalan pidió públicamente el desarme y la desmovilización del grupo armado. En consecuencia, en un congreso celebrado en mayo de 2025, el PKK anunció su disolución, seguido de una ceremonia simbólica para la destrucción de las armas en julio de 2025.

En Turquía se conformó, por su parte, un comité parlamentario con 51 miembros, denominado Comité sobre la Solidaridad Nacional, la Fraternidad y la Democracia, que en febrero de 2026 publicó un informe con 47 votos a favor, dos en contra y una abstención, con propuestas legales para la integración social de los anteriores militantes del PKK y la expansión de los derechos políticos y culturales de la población kurda. El informe

ha recibido críticas de diferentes partidos políticos por su lenguaje, ya que emplea el marco de una “Turquía libre de terrorismo” y evita cualquier referencia a la “cuestión kurda” y por no abordar cuestiones relevantes como los asesinatos extrajudiciales sin resolver o los derechos para el uso de la lengua materna. En el informe se enfatiza la unidad territorial de Turquía y la importancia del proceso de paz para mantener la estabilidad regional frente a amenazas externas y guerras *proxy*, así como se ensalza la relación histórica entre kurdos y turcos. Este texto no incluye referencia explícita a la posible liberación de Öcalan, encarcelado desde 1999 tras haber sido capturado en Kenia.

El informe propuso, entre las medidas concretas, una revisión de sentencias en línea con los fallos dictados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal Constitucional de Turquía. Esto implicaría la liberación de presos políticos tan emblemáticos como Selahattin Demirtaş o Figen Yüksekdağ, antiguos líderes del partido prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP), o de actores de la sociedad civil como el filántropo Osman Kavala. El informe también considera que ha de revisarse la legislación para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, modificando, entre otras, la Ley de Reuniones y Manifestaciones, el Código Penal turco y la Ley de Lucha contra el Terrorismo para fortalecer la libertad de expresión.

También abre el camino a devolver a su puesto en las alcaldías a los ganadores de las elecciones pertenecientes a partidos prokurdos que a lo largo de estos años han sido sustituidos por administradores designados por el gobierno central. El Partido Democrático de los Pueblos (DEM) ha insistido en que la aplicación de las sentencias del TEDH y del Tribunal Constitucional, junto con este último punto pueden llevarse a la práctica inmediatamente, sin necesidad de nueva legislación. Está por ver si el gobierno turco está dispuesto a llevar a cabo estos cambios de manera inmediata o si esperará a que haya más pasos tangibles en el punto más crucial señalado en el documento, el referente al desarme del PKK. Un desarme que, según el texto, ha de ser supervisado y verificado por las fuerzas de seguridad.

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS POR DELANTE

Para Turquía el proceso de negociaciones vigente con el PKK está claramente relacionado con la cuestión kurda en Siria.

La estabilización en Siria es frágil y complicada y el acuerdo alcanzado con las FDS se enfrentará a problemas concretos de integración y a cómo gestionar o llevar a cabo la autonomía local y la implementación de las expectativas en el ámbito educativo. Desde el lado kurdo se piden garantías constitucionales y avances significativos en derechos que compensarían las actuales pérdidas territoriales. Para las FDS, este es un giro fundamental, puesto que supone abandonar el proyecto de Rojava tal y como fue concebido, pero tras la pérdida del apoyo estadounidense se ha optado por posiciones más pragmáticas.

El acuerdo alcanzado entre el gobierno sirio y las FDS da paso a un nuevo escenario que facilita las relaciones fronterizas de Turquía con el país vecino y, a su vez, ha permitido fortalecer el proceso de negociaciones con el PKK en Turquía que todavía está lejos de consolidarse. No hay que descartar que haya retrocesos, ni están claros cuáles serán los próximos pasos. Todo indica que el gobierno no está dispuesto a mayores concesiones sin el desarme completo del PKK, y se desconoce si, mientras tanto, adoptará algún gesto que ayude a revitalizar la confianza de los representantes kurdos en el proceso. Si bien el desarme es una condición *sine qua non* para el éxito de las negociaciones, también resulta fundamental responder a las expectativas generadas en cuanto a garantizar derechos culturales y políticos demandados durante décadas para garantizar que el proceso de reconciliación prospere favorablemente.

Más recientemente, la situación de las FDS en Siria ha impactado también en Irán tras los ataques de Israel y Estados Unidos a su territorio. En los primeros días de la guerra, se especulaba con que Estados Unidos habría contactado y armado fuerzas kurdas en Irán con el objetivo de lanzar una ofensiva terrestre contra el régimen iraní, evitando así el despliegue de tropas estadounidenses e israelíes, mientras que se abría un nuevo flanco ofensivo en la guerra. Para llevar a cabo esta operación con éxito se precisaba, además, la aquiescencia de los partidos políticos y grupos militares kurdos de Irak, con el objeto de facilitar el tránsito de armas y de combatientes hacia Irán.

Los kurdos suponen entre un 15% y un 17% de la población en Irán y están situados, sobre todo en la parte occidental del país. La expresión de una identidad política propia y el disfrute de ciertos derechos culturales han sido, con frecuencia, violentamente reprimidos.

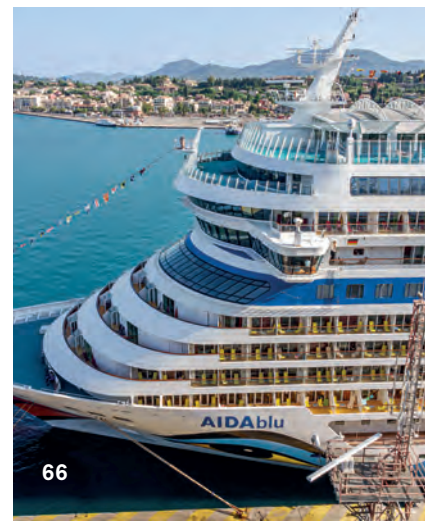
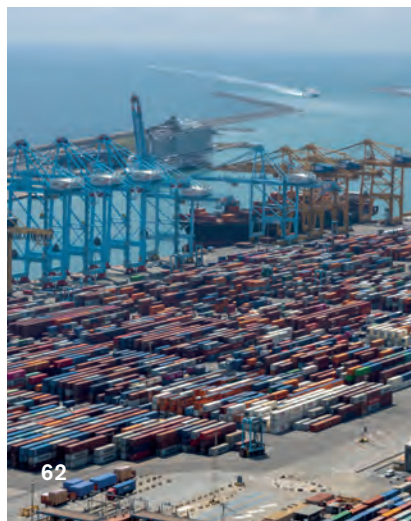
El 22 de febrero, cinco partidos kurdos decidieron conformar la Coalición de Fuerzas Políticas del Kurdistan Iraní. En su declaración informaban de que su objetivo no era separatista, sino “garantizar los derechos de la población kurda dentro de un Irán democrático y descentralizado”.

Sin embargo, dada la reciente experiencia en Siria, las fuerzas kurdas han mostrado su escepticismo ante el lanzamiento de una ofensiva contra el régimen iraní, debido a la falta de objetivos claros por parte de la administración estadounidense en la guerra y de garantías para proteger una acción militar de este tipo. La propia primera dama de Irak, Shanaz Ibrahim Ahmed, en una carta abierta publicada en X, declaró que habían presenciado lo que había ocurrido en Rojava y que “es muy difícil, de hecho, imposible, que los kurdos aceptaran ser peones de los superpoderes mundiales” y pidió que “dejaran en paz a los kurdos”.

Si bien el gobierno turco hizo expresa su oposición a esta posibilidad en conversaciones con su homólogo estadounidense, ha sido clave para no ponerla en marcha hasta el momento la falta del apoyo necesario entre los diferentes grupos kurdos iraníes y, de manera muy relevante, entre las diferentes agrupaciones kurdas en Irak, a la luz de la reciente experiencia de las FDS en Siria y ante los riesgos que entrañarían las graves represalias que podría tomar el gobierno de Irán./



Tendencias económicas



**58 ECONOMÍA AZUL: MOTOR DE CAMBIO,
INTEGRACIÓN Y RESILIENCIA REGIONAL**
Jérémie Fosse

**62 ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE:
UNA MAREA QUE IMPULSA
A TODOS LOS BARCOS**
Adriana Salazar, Alessandra Sensi

**66 EL TURISMO AZUL MEDITERRÁNEO
EN UNA ENCRUCIJADA**
Angelo Sciacca

Playa de Seitan Limania, un pequeño paraje natural protegido, situado en la región de La Canea, en la isla de Creta./NICOLAS ECONOMOU/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

El Mediterráneo sostiene millones de empleos vinculados con el turismo costero, el transporte marítimo o la pesca. Pero estas actividades operan en un espacio sobreexplotado, expuesto al cambio climático y fracturado por el desorden geopolítico.

Jérémie Fosse es co-fundador y presidente de eco-union.

ECONOMÍA AZUL: MOTOR DE CAMBIO, INTEGRACIÓN Y RESILIENCIA REGIONAL

El Mediterráneo es una anomalía económica: un mar relativamente pequeño, con una densidad excepcional de usos, infraestructuras, ciudades, rutas, y una concentración de actividad productiva que lo convierte en un "corazón azul" para las economías nacionales. También es un punto caliente ecológico: ecosistemas frágiles, contaminación ambiental, pérdida de biodiversidad, presión sobre el litoral y, cada vez más, episodios climáticos extremos debido al calentamiento global. En ese cruce de fuerza y fragilidad, la economía azul aparece como una promesa de prosperidad, pero también una fuente de vulnerabilidad: ¿cuántos empleos dependen del buen estado del mar? ¿Qué impacto ambiental tienen estas actividades económicas? ¿Qué actores ganan o pierden con la transición ecológica? Y, ¿cómo acelerar la adaptación al cambio climático y la resiliencia a los *shocks* externos?

La respuesta es que el Mediterráneo ya vive de la economía azul, pero todavía no la gobierna ni la gestiona como un activo crítico y compartido. Y esa es precisamente la oportunidad: convertir un conjunto disperso de sectores en una palanca coherente de transformación

ecológica, bienestar social e integración económica.

EL VALOR DE LA ECONOMÍA AZUL

Dos conceptos financieros permiten entender el valor económico del mar: el "producto marino bruto" (*gross marine product*), es decir, el valor anual de las actividades productivas vinculadas al mar, y el "fondo de riqueza compartida" (*shared wealth fund*), entendido como el valor del "activo" natural del Mediterráneo (costas productivas, praderas marinas, captura de carbono, etc.). Con esa metodología, se estima que las actividades relacionadas con el mar Mediterráneo generan 450.000 millones de dólares anuales, lo que la convierte en la quinta economía de la región, por detrás de Francia, Italia, España o Turquía. Aunque el Mediterráneo representa solo el 1% del área oceánica mundial, concentra alrededor del 20% del producto marino bruto global (Randone, 2017).

Mirando el mar como un activo financiero, la riqueza compartida del Mediterráneo alcanza 5,6 billones de dólares, con las costas productivas re-

presentando el 83% del valor. En otras palabras: el mar Mediterráneo es una infraestructura económica esencial de escala regional cuyo deterioro tiene implicaciones directas sobre el empleo, la inversión y la estabilidad territorial (Randone, 2017).

UN MOTOR ECONÓMICO SOBRE UN MAR (SOBRE)PRESIONADO

En la Unión Europea, los sectores tradicionales de la economía azul emplearon 4,82 millones de personas, generaron 891.000 millones de euros de facturación y 251.000 millones de euros de valor añadido bruto en 2022. El turismo costero sigue siendo el mayor sector, representando el 53% del empleo y el 33% del valor añadido de la economía azul europea, en recuperación total tras el *shock* de la pandemia (Comisión Europea, 2025).

Este patrón se refuerza en el Mediterráneo: la economía azul no es solo puertos o pesca; es, sobre todo, una mezcla de servicios (turismo) e infraestructuras (puertos y transporte), con cadenas de valor integradas y globalizadas que van desde la logística y la construcción naval hasta la distribución

alimentaria, la gestión de residuos y el tratamiento de aguas.

TURISMO COSTERO Y MARÍTIMO, UN SECTOR EN RIESGO

El turismo mediterráneo ha sido un motor de crecimiento durante décadas. Pero su éxito tiene dos caras: crea empleo y renta, pero también concentra presión en épocas y áreas de escasez de agua, tensión en vivienda y servicios públicos y degrada ecosistemas que son, precisamente, la base de su atractivo. En el Mediterráneo, esto se traduce en dependencia territorial: muchas economías locales se basan en el turismo, lo que aumenta su exposición a *shocks* externos (eventos climáticos, crisis geopolíticas) o internos (falta de personal, trabajos precarios) que alteran flujos y empleos.

La cuestión económica central ya no es solo cuántos turistas llegan, sino qué valor generan y qué coste inducen. En términos de competitividad, un turismo que agota recursos hídricos, colapsa infraestructuras y erosiona el litoral es, a medio plazo, un turismo que se encarece, pierde calidad y reduce resiliencia. En términos de política, la transición del turismo costero pasa por cuatro palancas: desestacionalización, movilidad baja en carbono, eficiencia hídrica y energética, y fiscalidad turística con retorno visible en adaptación y protección del litoral. Si el Mediterráneo quiere que el turismo contribuya a la paz social, y no a la polarización local, debe demostrar que los beneficios se redistribuyen y que los costes ambientales se corrigen.

PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO, NODOS DE LA TRANSICIÓN

El Mediterráneo es un corredor global. Sus puertos conectan rutas euroasiáticas, flujos energéticos y cadenas logísticas. Más allá del comercio, aquí se juega la transición ecológica. Electrificación de muelles, eficiencia energética, combustibles alternativos, digitalización de operaciones, control de emisiones y calidad del aire en ciudades portuarias son parte central de la sostenibilidad ambiental, económica y social.

La agenda climática y regulatoria empuja cambios acelerados hacia la transición energética del transporte marítimo y soluciones basadas en la naturaleza frente a las erosiones costeras. Los puertos pueden ser polos de inno-

vación (energía, digitalización, logística verde), pero también pueden convertirse en puntos de fricción si la transición genera costes sin mecanismos de apoyo, especialmente en la orilla sur y este, donde el coste de capital suele ser mayor.

PESCA Y ACUICULTURA, CLAVES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

La pesca pesa menos en el PIB que el turismo o la logística, pero es vital en la cohesión social, empleo local y seguridad alimentaria. En el Mediterráneo, el sector de pesca y acuicultura supera 1,5 millones de toneladas de producción total (55% pesca, 45% acuicultura), genera alrededor de 18.000 millones de euros de ingresos (40% pesca, 60% acuicultura) y sostiene más de 700.000 empleos a lo largo de la cadena de valor (UpM, 2025).

La sostenibilidad es un activo estratégico: *stocks* sobreexplotados implican menor productividad futura, mayor volatilidad de ingresos y pérdida de tejido local. La transición digital (datos, trazabilidad, monitoreo) aparece como una oportunidad para mejorar la gestión y el valor añadido, especialmente si apoya a la pesca artesanal, la seguridad alimentaria, el empleo digno y la cohesión comunitaria.

ENERGÍAS MARINAS RENOVABLES, CRECIMIENTO Y CONFLICTOS DE USO

Las renovables marinas, en particular la eólica *offshore*, han dejado de ser una tecnología de futuro para convertirse en un vector económico con efectos en toda la cadena de valor: ingeniería, construcción naval, logística portuaria, operación y mantenimiento, digitalización, formación técnica y nuevos servicios especializados. En Europa, el despegue del sector se ha vinculado a dos objetivos estratégicos: seguridad energética para reducir la dependencia de combustibles importados y descarbonización para cumplir con los objetivos de cero emisión en 2050. Esta doble narrativa, industrial y climática permite justificar inversiones públicas, acelerar permisos y movilizar capital privado.

En el Mediterráneo, sin embargo, el reto no es solo tecnológico, sino territorial. El mar está "ocupado" por rutas de navegación, áreas de pesca, zonas de

alto valor ecológico, turismo costero, cables, infraestructuras, áreas militares, y una pluralidad de usos locales. Por eso, cada nuevo proyecto *offshore* enfrenta dificultades para encontrar el espacio adecuado, con vientos suficientes y estables, sin impactar el ecosistema marino cercano. En un contexto de alta sensibilidad ecológica y de economías costeras dependientes del turismo y la pesca, la legitimidad social se obtiene con procesos de participación inclusivos, datos transparentes y mecanismos de reparto de beneficios.

RESIDUOS, AGUAS Y ECONOMÍA CIRCULAR, EL SECTOR INVISIBLE

La economía azul puede generar beneficios económicos, pero también "subproductos" negativos: residuos, plásticos, aguas sucias, nutrientes o vertidos que a menudo se envían al mar sin control. Esa invisibilidad es una trampa. Si los costes ambientales no se internalizan, pagamos dos veces. Primero con degradación ambiental y pérdida de atractivo, y después con gasto público para reparar daños. En el Mediterráneo, donde el turismo concentra presión estacional y las ciudades costeras crecen, la gestión de residuos y del agua se convierte en una cuestión económica central.

La economía circular es más que un marco normativo europeo: es una estrategia de competitividad. Reducir plásticos y mejorar la recogida y reciclaje disminuye la basura marina, pero también reduce costes para municipios turísticos, protege sectores como el turismo y la pesca, y puede crear empleo local en logística, reparación, reutilización y valorización. Lo mismo ocurre con el agua: mejorar tratamiento de aguas residuales, reutilización y eficiencia hídrica es una póliza de seguro para destinos turísticos en regiones cada vez más secas. En la práctica, estos proyectos suelen ser menos "glamurosos" que un gran puerto o un parque eólico, pero tienen ventajas económicas: retornos en salud pública y atractivo territorial, reducción de riesgos físicos vinculados al clima, y creación de empleo distribuido, con pymes y servicios locales.

UN MAR COMPARTIDO Y GESTIONADO

El hilo conductor que une turismo, renovables, pesca y puertos es el espacio.

En un mar congestionado, la economía azul depende menos de crecer sector por sector y más de cómo se ordenan los usos y se reducen conflictos. La ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de la costa permiten disminuir incertidumbre, reducen litigios, facilitan permisos, mejoran coordinación entre administraciones y, en última instancia, hacen financiables proyectos que, de otro modo, quedarían atrapados entre contestación social y riesgo regulatorio.

Esto es especialmente importante en el Mediterráneo porque la densidad de usos y la diversidad institucional son altísimas. La misma infraestructura puede ser vista como oportunidad o amenaza según el territorio: un parque eólico puede significar empleo industrial para un puerto, pero pérdida de paisaje para un destino turístico; una área protegida puede significar recuperación de biodiversidad, pero restricciones para pesca; un corredor marítimo puede significar competitividad logística, pero contaminación atmosférica en ciudades portuarias. La gobernanza espacial no elimina estos dilemas, pero permite gestionarlos con reglas claras: zonificación, evaluación de impactos acumulativos, datos compartidos y mecanismos de compensación o co-beneficios.

FINANCIAR LA TRANSICIÓN

Sabemos que la transición ecológica es cara. La electrificación de puertos, los combustibles descarbonizados, la adaptación costera, la restauración de ecosistemas, el tratamiento de aguas, la circularidad de residuos, la digitalización pesquera o la reconversión turística requieren inversiones masivas y sostenidas en el tiempo. Solo en la Unión Europea, el esfuerzo necesario para la transición se estima en más de 800.000 millones de euros al año, alrededor de 4,9% del PIB anual (I4C, 2025). En el Mediterráneo, además, el desafío es doble: movilizar capital y hacerlo de forma convergente entre orillas, evitando una transición a dos velocidades que aumente vulnerabilidades donde el coste del capital ya es más alto.

Aquí conviene distinguir tres mecanismos de financiación. La financiación pública (subvenciones y programas) es imprescindible para bienes públicos regionales: ecosistemas, ciencia, datos,

planificación marítima y adaptación. La financiación de mercado (préstamos e inversión) es clave para infraestructuras y empresas, pero depende de estabilidad regulatoria, retornos claros y riesgos controlados. Entre ambas se sitúa la financiación híbrida (*blended finance*): usa recursos públicos para reducir riesgo (garantías, tramos *first-loss*, asistencia técnica) y así movilizar inversión privada hacia proyectos con impacto y retorno a medio plazo.

Instrumentos innovadores como los bonos azules y los incentivos fiscales verdes y azules pueden corregir fallos de mercado, enviar señales de precios y acelerar la inversión. Pero el verdadero cuello de botella suele ser operativo: conectar inversores con proyectos maduros. No faltan ideas; faltan proyectos "bancables" con permisos, datos, métricas de impacto, salvaguardas ambientales y sociales, y una estructura financiera replicable. Por eso, las prioridades prácticas pasan por construir carteras agregadas (por ejemplo, varios municipios o destinos turísticos), reforzar la asistencia técnica para preparar proyectos, y establecer marcos de medición y verificación que den confianza al capital. En economía azul, financiar la transición es, en gran medida, financiar la capacidad de convertir buenas intenciones en proyectos listos para ejecutarse.

EL GIRO HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La Estrategia Mediterránea de Desarrollo Sostenible, adoptada en el marco del Convenio de Barcelona, marca un giro claro: sitúa el cambio climático como primera prioridad regional y refuerza líneas de acción que están directamente conectadas con la economía azul. Entre ellas destacan el despliegue de energías renovables, las soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación costera, la planificación marítima y la gestión integrada del litoral, el impulso de modelos circulares (residuos, plásticos, agua) y, de forma cada vez más central, el fortalecimiento de finanzas sostenibles. La estrategia incorpora explícitamente el objetivo de "acelerar la transición hacia una economía verde, azul y circular y finanzas sostenibles", y abre la puerta a un marco mediterráneo de finanzas sostenibles capaz de canalizar capital hacia inversiones alineadas con resiliencia y protección del capital natural.

Este énfasis importa por dos razones. La primera es conceptual: conecta economía azul y resiliencia, evitando que el "azul" se reduzca a crecimiento sectorial y recordando que el activo económico principal es el propio mar. La segunda es geopolítica y distributiva: coloca sobre la mesa la convergencia entre orillas. Si el Mediterráneo aspira a seguridad y estabilidad, debe reducir asimetrías de capacidad y financiación: no puede haber transición "solo en el norte" y vulnerabilidad "solo en el sur", porque los riesgos climáticos y ecológicos –y sus efectos económicos– se propagan a escala regional.

DIPLOMACIA AZUL

En el Mediterráneo, la cooperación rara vez avanza por grandes tratados; suele avanzar por proyectos, plataformas, estándares y redes. Por eso la hoja de ruta de la Unión por el Mediterráneo (UfM) resulta especialmente útil: compila iniciativas, identifica vacíos y apunta caminos para acelerar la implementación. El diagnóstico, sin embargo, es claro: abundan los proyectos piloto y las plataformas, pero la capitalización –escalar, consolidar y replicar lo que funciona– sigue siendo minoritaria. En una región donde los choques son cada vez más frecuentes, pasar del piloto al despliegue es tan importante como diseñar buenas estrategias.

La economía azul es también un vector de cohesión e integración porque obliga a una cooperación transnacional y transectorial. La contaminación y la pérdida de biodiversidad no conocen fronteras; la seguridad marítima, las interrupciones logísticas y los eventos extremos afectan a todos; la pesca depende de reglas comunes; y la adaptación costera requiere coordinación científica y financiación sostenida. Incluso cuando la geopolítica bloquea, el mar impone pragmatismo: nadie gana con un Mediterráneo degradado, inseguro o económicamente dualizado.

Para que esa "diplomacia azul" funcione, se necesitan tres condiciones. La primera es datos compartidos y métricas comunes, para que el debate deje de ser ideológico y se convierta en una discusión verificable sobre impactos, costes y beneficios. La segunda es mecanismos financieros de convergencia, que reduzcan brechas de coste de capital y de capacidad para preparar proyectos bancables, especialmente entre orillas.

La tercera es gobernanza espacial y participación, porque sin legitimidad social la transición (*offshore*, áreas protegidas, regulación turística, infraestructuras portuarias) se convierte en conflicto y aumenta el riesgo para la inversión. Con estas tres condiciones, la economía azul puede transformarse en una forma de diplomacia práctica: menos declaraciones y más resultados, medibles y compartidos.

RESILIENCIA DE LA ECONOMÍA AZUL

En el Mediterráneo, hablar de resiliencia significa ir más allá de "adaptarse" al clima. Implica actuar sobre varios vectores que se retroalimentan: estabilidad del empleo en territorios costeros, reducción de tensiones por vivienda y recursos (agua, energía, espacio), menor exposición a *shocks* energéticos y a disrupciones logísticas, cooperación en seguridad alimentaria y reglas pesqueras, y capacidad de gestionar migraciones inducidas por clima y desigualdad. La resiliencia, en suma, es la capacidad de sostener prosperidad y cohesión social en un contexto de choques recurrentes.

Desde esta perspectiva, la economía azul puede aportar resiliencia a través de tres palancas. La primera es crear empleo decente y local, especialmente para jóvenes y mujeres, reduciendo la dependencia de trabajos estacionales precarios. Esto requiere cualificación (*blue skills*), diversificación del modelo turístico y nuevas cadenas de valor asociadas a la transición (puertos verdes, circularidad, mantenimiento *offshore*, servicios digitales). La segunda palanca es evitar la degradación del capital natural. Un litoral degradado no es solo un problema ambiental: es un balance económico en números rojos (pérdida de atractivo turístico, caída de productividad pesquera, mayores costes por daños y por salud pública), y esas pérdidas acaban traduciéndose en tensiones sociales. La tercera palanca es redistribuir beneficios y costes. Sin mecanismos visibles de reparto –fiscalidad finalista, inversión pública local, participación y retornos tangibles– la economía azul se percibe como extractiva y se erosiona su legitimidad. Con ellos, en cambio, puede convertirse en un motor de estabilidad territorial: más resiliencia climática, más aceptación social y menos conflicto en torno a usos y proyectos.

La economía azul es la economía de la interdependencia. Y en el Mediterráneo, aprender a gestionar interdependencias es la forma más realista de construir prosperidad y de reducir conflictos

CUATRO PRIORIDADES PARA UNA ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE

1. *Medir más para decidir mejor.* Sin datos sólidos y estadísticas comparables, el "azul" corre el riesgo de convertirse en *blue washing*. Mejorar la medición, con indicadores estandarizados, metodologías compatibles y transparencia institucional permite orientar la inversión, evaluar impactos y diseñar políticas basadas en evidencia. También ayuda a visibilizar costes hoy ocultos (degradación ambiental, limpieza, salud pública) y a comparar de forma justa entre territorios y sectores.

2. *Hacer madurar los proyectos de transición.* La mayoría de iniciativas se quedan en fase piloto por falta de asistencia técnica, capacidad administrativa y estructuras financieras replicables. Para pasar a escala, es clave construir carteras de proyectos (por ejemplo, adaptación costera, reutilización de agua, eficiencia hídrica en destinos turísticos o circularidad de residuos), que ganen tamaño, reduzcan costes de transacción y resulten atractivas para bancos e inversores. Aquí, la preparación de proyectos es tan importante como la financiación.

3. *Gestionar colectivamente el espacio.* En un Mediterráneo congestionado, la planificación espacial marítima y la gobernanza integrada del litoral son imprescindibles para compatibilizar usos y evitar conflictos: pesca, turismo, transporte, conservación, renovables y urbanización compiten por el mismo territorio. El reto es convertir la planificación en práctica habitual, con participación real, datos compartidos y coherencia entre decisiones "en tierra" y "en el mar", incluyendo evaluación de impactos acumulativos y mecanismos de compensación o co-beneficios.

4. *Convertir la transición en convergencia.* Una economía azul sostenible no puede avanzar a dos velocidades. Reforzar la cooperación transnacional en

capacidades, estándares, ciencia, financiación y preparación de proyectos es esencial para reducir la brecha de inversión y evitar *hubs* avanzados frente a periferias vulnerables. Sin convergencia, aumentan los costes sociales y geopolíticos; con ella, la transición azul puede convertirse en un proyecto regional de estabilidad: más resiliencia, más empleo local y menos desigualdad entre orillas.

UNA TRANSICIÓN INEVITABLE

La economía azul mediterránea ya existe: sostiene empleo, comercio y territorios. La pregunta no es si debe desarrollarse, sino qué modelo la guiará. La evidencia reciente apunta que el futuro económico regional depende de la salud del mar y de la capacidad de financiar la transición. La OCDE recuerda el peso global del océano en empleo y valor añadido y advierte de escenarios donde los riesgos climáticos y de productividad pueden frenar su crecimiento. La Comisión Europea muestra que, incluso en economías avanzadas, el turismo costero domina pero se contrae más rápido que el resto de los sectores por su dependencia a *shocks* externos. En el Mediterráneo, la pesca y acuicultura siguen siendo esenciales en seguridad alimentaria, y la gobernanza costera se está convirtiendo en una herramienta crítica por la densidad de usos.

Si el Mediterráneo quiere que la economía azul sea motor de transformación, resiliencia y paz, necesita un último salto: pasar de la suma de sectores a un proyecto compartido. No es una utopía institucional; hace falta pragmatismo económico: medir, planificar, financiar, redistribuir y cooperar. En un mar donde todo está conectado, la economía azul es, en el fondo, la economía de la interdependencia. Y en el Mediterráneo, aprender a gestionar interdependencias es la forma más realista de construir prosperidad y de reducir conflictos./

La economía azul sostenible juega un papel estratégico en la región mediterránea, como motor del desarrollo sostenible y pilar de la cooperación euromediterránea.

Adriana Salazar es experta en economía azul, departamento de Agua, Medioambiente y Economía Azul, UpM; *Alessandra Sensi* es jefa del sector Medioambiente y Economía Verde y Azul, UpM.

ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE: UNA MAREA QUE IMPULSA A TODOS LOS BARCOS

Durante la última década, la economía azul sostenible (SBE por sus siglas en inglés) ha dado un importante salto adelante en la región mediterránea como potente motor y acelerador del desarrollo sostenible, capaz de aportar beneficios ambientales, sociales y económicos interconectados a ecosistemas únicos pero frágiles, a ciudadanos, y a las economías de la región.

A través de un enfoque integrado, interdisciplinar, multiactor y multi-sectorial, tanto orientado por políticas como operativo, el diálogo y la cooperación regional en materia de SBE han emergido como pilar sólido y fiable de la cooperación euromediterránea, como foco aglutinador, y como fuente de inspiración para otras regiones del mundo.

Con la adopción de la primera Declaración Ministerial de la Unión por el Mediterráneo (UpM) sobre Economía Azul en 2015, la región mediterránea fue pionera en declarar la SBE como un ámbito fértil, una vía y un motor para el desarrollo sostenible en la región, integrando de manera efectiva el concepto (entendido conjuntamente como un enfoque de las actividades marítimas, marinas y costeras que debe permanecer firmemente anclado en los principios

del desarrollo sostenible) y estableciendo los fundamentos del diálogo regional para traducir prioridades políticas en soluciones tangibles sobre el terreno.

Uno de los motores de la adopción de la SBE por parte de los países miembros de la UpM sigue siendo el entendimiento compartido de que el diálogo regional regular es una vía y un vector efectivo para abordar algunos de los desafíos más urgentes de la región, en beneficio de todos los actores implicados. En parte, esto puede atribuirse a la naturaleza sólida pero flexible del diálogo regional sobre SBE, respaldada por prioridades políticas claras y estratégicas (actualmente expresadas en las 10 prioridades de la 2ª Declaración Ministerial de la UpM sobre economía azul sostenible adoptada por los 43 países miembros de la UpM en 2021), al tiempo que engloba, en un enfoque conjunto e integrado, una amplia gama de sectores económicos complementarios e interconectados, cada uno de los cuales aporta su propia complejidad técnica, cadenas de valor interconectadas, retos y oportunidades en constante evolución y complejas redes de actores clave.

El Mediterráneo, que alberga aproximadamente a un tercio de su pobla-

ción a lo largo de sus 46.000 kilómetros de costa y hogar de ecosistemas y recursos naturales únicos pero amenazados, se encuentra actualmente en una encrucijada, al enfrentar una serie de desafíos ambientales, socioeconómicos y geopolíticos complejos e interconectados, incluidos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación (como punto crítico de la 'triple crisis planetaria'); niveles de desarrollo económico e integración desiguales; así como inestabilidad geopolítica en un contexto global marcado por la erosión del multilateralismo y del orden internacional basado en reglas.

En este contexto es importante tener en cuenta que, aunque el camino hacia la economía azul sostenible en el Mediterráneo está en marcha, con avances iniciados y logrados en cada una de las 10 prioridades ministeriales de la UpM, y con el objetivo de situar la sostenibilidad, la circularidad y los enfoques basados en los ecosistemas y sensibles al cambio climático en el centro de cada sector, el desarrollo sostenible es un proceso continuo que requiere una gobernanza multinivel, así como una acción colectiva, coordinada, inclusiva, ambiciosa y constante.

La declaración ministerial de la UpM de 2021 sobre economía azul sostenible y su hoja de ruta –adoptada en 2022 como plan de acción ‘vivo’ y regularmente actualizado, respaldado por un sistema de monitoreo, evaluación, e informes periódicos–, la cooperación y el diálogo regionales ofrecen un marco único, demostrablemente resiliente y mutuamente beneficioso para acelerar conjuntamente los esfuerzos (en beneficio de todas las orillas del Mediterráneo) hacia la resolución de desafíos comunes que solo pueden abordarse mediante el diálogo y la cooperación técnica y política enfocados en el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de conocimientos, saber hacer, mejores prácticas y experiencias.

A continuación ofrecemos una visión general de las 10 prioridades regionales recogidas por la Declaración Ministerial de la UpM.



Puerto de Barcelona./JORGE CASTELLANOS/
SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

GOBERNANZA Y EL FUTURO DE LAS ESTRATEGIAS DE CUENCA MARÍTIMA EN LA REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO

La Plataforma Regional de la Unión por el Mediterráneo sobre SBE es clave en el marco de su mandato dedicado a reforzar el diálogo regional. Se reúne regularmente para maximizar convergencia política, técnica y financiera en el ámbito regional, así como para impulsar la coordinación y las oportunidades de cooperación, ampliación y replicabilidad. La Plataforma reúne a países, observadores y expertos para guiar y apoyar la implementación de la Declaración Ministerial de 2021 y su hoja de ruta, moldeando y promoviendo la agenda regional de la UpM en materia de economía azul sostenible.

Más recientemente, en el marco del Pacto por los Océanos de la UE, puesto en marcha por la Comisión Europea como estrategia integrada “para un océano saludable, una economía azul competitiva y comunidades costeras prósperas”, se reconoce el papel de la UpM por sus contribuciones al fortalecimiento de la SBE en el Mediterráneo. Con el objetivo de equilibrar el apoyo regional en materia de SBE, el Pacto también prevé un apoyo reforzado a la economía azul sostenible en el Mediterráneo oriental, con una estructura específica similar a la iniciativa WestMed y contando con la UPM como socio principal.

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE PROVENIENTE DEL MAR, PESCA Y ACUICULTURA

La pesca ha sido históricamente un importante sustento de las comunidades costeras y las economías locales del Mediterráneo, es el núcleo de importantes valores socioeconómicos y culturales compartidos, y representa una piedra angular de la dieta mediterránea. El sector es clave para la seguridad alimentaria y los medios de vida de la región, con más de 300.000 personas empleadas directamente en buques pesqueros en el Mediterráneo, además de los empleos indirectos. Sin embargo, la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura en el Mediterráneo está actualmente en riesgo, ya que más del 85% de las poblaciones evaluadas científicamente se capturan por encima de los límites biológicos seguros.

Garantizar la sostenibilidad futura de los sectores pesquero y de la acuicultura requiere la gestión sostenible de los recursos y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUN por sus siglas en inglés). Los países miembros de la UpM han hecho un llamamiento para “cumplir las recomendaciones de gestión adoptadas por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) de la FAO con vistas a gestionar de forma sostenible las poblaciones clave de la región y desarrollar una acuicultura sosteni-

nible”. La UpM también ha apoyado la creación y las actividades relacionadas con la Plataforma de Sistemas Alimentarios Sostenibles para el Mediterráneo (SFS-Med) y trabaja para aumentar las capacidades y la concienciación sobre los principales retos a los que se enfrenta la acuicultura sostenible.

TRANSPORTE MARÍTIMO Y PUERTOS SOSTENIBLES, NEUTRALES EN CARBONO, Y LIBRES DE CONTAMINACIÓN; SEGURIDAD Y PROTECCIÓN MARÍTIMA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ECONOMÍA AZUL

El transporte marítimo desempeña un papel estratégico en el Mediterráneo. Asegurando la conectividad entre los países miembros de la UpM, el transporte marítimo comercial es crucial para los flujos de comercio marítimo intra-mediterráneo (representa alrededor del 80% del comercio global). Asimismo, el Mediterráneo es actualmente el segundo mayor mercado de cruceros del mundo. Sin embargo, el sector hace frente a una serie de desafíos ambientales y socioeconómicos. La descarbonización del transporte marítimo y de los puertos sigue siendo una de las prioridades más apremiantes para la región.

La UpM promueve y apoya el papel de los puertos mediterráneos como

centros de energía y economía circular, de modo que los puertos ya no se entiendan únicamente como nodos de transporte, sino como plataformas multifuncionales con un papel importante que desempeñar en el impulso de la transición energética y la promoción de la eficiencia de los recursos mediante, por ejemplo, la recuperación, el tratamiento y la reutilización de los residuos de los buques (residuos oleosos, plásticos, aguas residuales, incluidas las aguas de lastre); apoyando las actividades de modernización, reparación y reciclaje de buques, prolongando así el ciclo de vida de los buques, equipos y activos; y apoyando la logística circular, conectando también con el interior.

El sector está acelerando su preparación hacia el mercado de tecnologías de cero emisiones, lo que a su vez implica la movilización de inversiones significativas en equipos y adaptación para cumplir con estándares de sostenibilidad.

Aunque la digitalización tiene el potencial de conectar buques inteligentes, puertos e infraestructura, mejorando los flujos de datos y la toma de decisiones basada en datos, debe seguir estando impulsada por la sostenibilidad. La automatización puede desempeñar un papel importante en la mejora de las operaciones y flujos náuticos, la seguridad y la eficiencia energética, pero también deben tenerse cada vez más en cuenta los retos medioambientales y sociales.

En relación con esto y con el enfoque regional hacia la economía azul sostenible, un alto nivel de seguridad marítima es una condición esencial para que los sectores y actividades de la economía azul sostenible prosperen, protegiendo y adaptando las infraestructuras críticas al cambio climático, ayudando a garantizar las condiciones que permiten las inversiones, salvaguardando el medio ambiente, y combatiendo las actividades ilegales en el mar.

PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARÍTIMA (PEM) Y GESTIÓN INTEGRADA DE ZONAS COSTERAS (GIZC)

La Declaración Ministerial de 2021 de la UpM sobre la economía azul sostenible y su hoja de ruta incluyen la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada del espacio costero basadas en los ecosistemas como prioridades clave y facilitadores/aceleradores, encarnando verdaderamente la naturaleza

interdisciplinaria, multiactores e integrada de la economía azul sostenible.

La Declaración de la UpM destaca la importancia de la PEM y la GIZC como herramientas vitales para apoyar y potenciar la economía azul sostenible, integrando la GIZC dentro de la PEM como forma de garantizar mayores sinergias a través del principio de interacción tierra-mar. Con enfoques basados en los ecosistemas como eje central, ambas herramientas han sido reconocidas como facilitadores importantes para atraer inversiones; mejorar la gobernanza, la seguridad jurídica y la toma de decisiones; y reducir los impactos sobre el medio ambiente derivados de la creciente competencia por el uso del espacio y los recursos en el Mediterráneo.

El marco regional de la UpM en materia de economía azul sostenible – que da prioridad a la cooperación Norte-Sur, el diálogo, la coordinación y la convergencia– ofrece un foro valioso para abordar los desafíos relacionados con la PEM y maximizar las oportunidades y la capitalización de los resultados en beneficio de la región, en coordinación con los proyectos e iniciativas relevantes relacionados con la PEM (como el Foro Azul Europeo o bien la Comunidad de Práctica (CoP) Mediterránea sobre la PEM, basándose en la experiencia en el marco de la Iniciativa WestMED).

El diálogo regional sobre PEM fomenta y se basa a la vez en el diálogo entre los sectores y actividades de la economía azul sostenible del Mediterráneo (por ejemplo, planificación y desarrollo de Energías Renovables Marinas, turismo marítimo y costero, transporte marítimo, etc.), mediante enfoques participativos que tengan en cuenta las necesidades y desafíos de las comunidades costeras, al tiempo que se busca equilibrar e integrar herramientas de gestión basadas en áreas, incluyendo las Áreas Marinas Protegidas (AMP).

TURISMO COSTERO Y MARÍTIMO:

El turismo costero y marítimo es uno de los sectores más estratégicos para los países mediterráneos. Como fuente importante de crecimiento, empleo y desarrollo local, el sector también ejerce presiones significativas sobre el medio ambiente y las poblaciones locales.

Seguir fomentando la innovación, crear entornos políticos favorables y aplicar una gobernanza multinivel para

diversificar la oferta turística y hacer frente al exceso de turismo, reducir la estacionalidad e impulsar enfoques basados en los ecosistemas con el fin de protegerlos y preservar la sostenibilidad y la resiliencia a largo plazo siguen siendo prioridades clave.

Se están incrementando los esfuerzos para promover un turismo 'lento', basado en experiencias y en la naturaleza, incluyendo la posibilidad de integrar actividades turísticas dentro de Áreas Marinas Protegidas de manera sostenible y cuidadosamente regulada.

Posicionar al Mediterráneo como destino turístico más sostenible también requerirá la aplicación efectiva de principios de eficiencia de recursos, economía circular y neutralidad de carbono; enfoques innovadores para apoyar la transformación de cadenas de valor complejas e interrelacionadas (hostelería, logística, operadores, alimentos y bebidas, puertos, marinas, cruceros, yates, etc.); apoyo a los jóvenes emprendedores y a mipymes; y nuevos programas formativos y oportunidades de capacitación específicos.

ENERGÍAS RENOVABLES MARINAS

La energía renovable marina en el Mediterráneo puede desempeñar un papel importante en el cumplimiento de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero; para impulsar la innovación, proporcionar nuevas oportunidades de inversión, crear empleos y promover la seguridad y la diversificación energéticas.

La energía eólica flotante se posiciona actualmente como la fuente de energía renovable marina más comercialmente viable en el Mediterráneo. Esta tecnología permite aprovechar la energía eólica a pesar de las aguas profundas del Mediterráneo, que representan un desafío para los aerogeneradores fijos en el fondo marino. También se observa un interés emergente en la energía fotovoltaica solar flotante, aunque se encuentra en una fase piloto.

En un mar especialmente vulnerable como el Mediterráneo, hogar de una multitud de actividades marítimas y costeras, los efectos ambientales de las energías renovables marinas requieren una evaluación y consideración detallada. En este sentido, la Planificación Espacial Marítima basada en ecosistemas, puede desempeñar un papel clave en la

evaluación y reducción de impactos sobre los ecosistemas, crear sinergias entre sectores y aumentar el diálogo transfronterizo y entre sectores, con el fin de garantizar el uso más sostenible del espacio marítimo disponible, equilibrando las consideraciones ambientales, sociales y económicas. Diseñado explícitamente como enfoque multiactor, la PEM también puede ayudar a abordar desafíos como la aceptabilidad social.

INVERSIONES SOSTENIBLES EN LA ECONOMÍA AZUL

Las inversiones innovadoras en los sectores y actividades de la economía azul sostenible, que han suscitado un gran interés en los últimos años, son esenciales para transformar las políticas en impactos tangibles.

En junio de 2022, la UpM organizó la primera Conferencia sobre Finanzas Azules en el Mediterráneo en Barcelona, con el objetivo de fomentar inversiones en proyectos e iniciativas en materia de economía azul sostenible, especialmente en las costas sur y este de la cuenca. Ese mismo año, durante la COP27 en Sharm El-Sheij, el BERD, el BEI, la CE, la UpM y otros socios donantes iniciales pusieron en marcha el Fondo Partenariado Azul Mediterráneo (BMP, por sus siglas en inglés), creado para movilizar inversiones en la economía azul sostenible, aunando recursos públicos y privados de manera coordinada, en consonancia con la Declaración Ministerial de 2021 de la UpM sobre la economía azul sostenible, y centrándose en las necesidades y prioridades de los países del sur del Mediterráneo en este ámbito.

Con Jordania, Egipto y Marruecos como países beneficiarios iniciales y abierto a todo el Mediterráneo, el Fondo ya está en funcionamiento, con contribuciones de Francia, Alemania, España y Suecia, y proyectos aprobados que incluyen un estudio sobre energía eólica marina en Marruecos –con vistas al primer proyecto eólico marino a gran escala del país– y la restauración del ecosistema coralino en el oasis de Ayla, en Aqaba (Jordania).

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN MARINAS, COMPETENCIAS, CARRERAS Y EMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO

La investigación e innovación en los sectores y actividades de la economía

Los clústers marítimos son cada vez más reconocidos como impulsores esenciales de la innovación y la diversificación de la economía azul sostenible, conectando también con el interior

azul sostenible ofrecen oportunidades clave para que los países mediterráneos utilicen y desarrollen sus recursos de manera sostenible en beneficio de sus economías, ciudadanos y el medio ambiente. Representan un factor clave para abordar algunos de los desafíos compartidos más urgentes a los que se enfrenta el Mediterráneo. La investigación e innovación también son esenciales para impulsar la recopilación de datos científicos sólidos que permitan una toma de decisiones basada en la evidencia.

Los clústers marítimos son cada vez más reconocidos como impulsores esenciales de la innovación y la diversificación de la economía azul sostenible, conectando también con el interior. Son vectores cruciales para la transferencia de tecnología, la internacionalización, la comercialización y la innovación interdisciplinarias, reuniendo a diversos actores, incluidas las pymes y grandes empresas ‘azules’, centros de investigación y universidades, así como aceleradoras e incubadoras. También actúan como actores clave para promover inversiones sostenibles en la economía azul y como polos de investigación e innovación público-privados.

El empleo y las oportunidades profesionales en todos los sectores de la economía azul se han acelerado en la región durante la última década. Como prioridad clave para el futuro de la juventud de la región, el apoyo de la UpM en este ámbito se centra en abordar la brecha de competencias entre la fuerza laboral y las necesidades del mercado; promover la adopción de programas innovadores de formación y educativos (incluyendo la educación y formación técnica y profesional y el aprendizaje a lo largo de la vida) dirigidos a una amplia gama de nuevas competencias; apoyo a emprendedores del sector azul y acceso a financiación; y sensibilización sobre empleos y trayectorias profesionales en los sectores de la economía azul, con un enfoque en

la identificación de oportunidades para jóvenes y mujeres.

INTERACCIONES ENTRE LOS DESECHOS MARINOS Y LA ECONOMÍA AZUL

El mar Mediterráneo es uno de los más afectados del mundo por los desechos marinos. Los macro y microplásticos son omnipresentes en los entornos costeros y marinos del Mediterráneo, y los plásticos de un solo uso representan el 80% de todos los desechos marinos recogidos.

Abordar este desafío es una prioridad máxima para la UpM, que ha dado pasos importantes para ampliar la cooperación regional e integrar los desechos marinos en las agendas de cooperación Norte-Sur, por ejemplo a través de la Iniciativa “Plastic Busters”. Tras cinco rondas de financiación apoyadas por la UpM, Plastic Busters es hoy un proceso euromediterráneo y un modelo de cooperación transfronteriza que aborda todo el ciclo de gestión de los desechos marinos, desde la monitorización y evaluación, hasta la prevención y mitigación.

Para apoyar la transición hacia enfoques, innovaciones, soluciones y modelos de negocio basados en la economía circular, también es necesario abordar de manera eficaz la crisis de los residuos marinos en el Mediterráneo. Esto puede abarcar desde la mejora de los sistemas de recogida de residuos en los municipios costeros, la promoción del diseño ecológico y la responsabilidad ampliada del productor (por ejemplo, a través del proyecto TouMaLi, etiquetado por la UpM, para combatir los residuos marinos procedentes de la industria turística en Marruecos, Egipto y Túnez), o aprovechando los puertos y marinas como “centros” de economía circular (por ejemplo, mediante “programas de pesca de residuos” o alineando los sistemas portuarios con las instalaciones locales./municipales de reciclaje y tratamiento de residuos)./

El turismo azul genera un importante valor económico, pero ejerce presión sobre los ecosistemas. Es necesaria una gobernanza compartida que armonice la vitalidad económica, la resiliencia y el bienestar de las comunidades.

Angelo Sciacca es asesor y consultor independiente en turismo azul sostenible, antiguo investigador sénior en el IDDRI.

EL TURISMO AZUL MEDITERRÁNEO EN UNA ENCRUCIJADA

El turismo costero y marítimo –o turismo azul– representa uno de los principales segmentos de la industria mundial de los viajes y el turismo. Solo en 2023, el turismo azul contribuyó con el 1,4% del PIB mundial y dio empleo directo a 52 millones de personas (World Travel & Tourism Council, 2024), lo que reafirma su papel crucial en el impulso del desarrollo socioeconómico en todo el mundo.

En el Mediterráneo, una región que acoge aproximadamente entre el 25% y el 30% de las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial, el turismo azul sustenta millones de puestos de trabajo en los 22 países costeros (Plan Bleu, 2022). Sin embargo, dado que la mayor parte del desarrollo turístico –alrededor del 70% (Plan Bleu, 2026)– está concentrado a lo largo de costas a menudo frágiles y se caracteriza por un mercado altamente estacional, estos territorios compartidos de la cuenca se enfrentan al exceso de turismo en muchos destinos y, como consecuencia, a una presión cada vez mayor sobre los ecosistemas y las comunidades (UICN et al., 2025), así como a crisis de vivienda y al aumento del coste de la vida (Almeida-García et al., 2025).

Por lo tanto, el turismo azul se encuentra en una encrucijada crítica. Genera un valor económico significativo, al tiempo que ejerce presión sobre los ecosistemas y las comunidades que lo sustentan. El sector también está cada vez más expuesto a crisis geopolíticas, climáticas y sanitarias. Sin embargo, se recuperó rápidamente de la pandemia de Covid-19, que supuso una parada histórica y restricciones para la mayoría de las actividades turísticas (Balestracci y Sciacca, 2023). Esta paradoja revela las limitaciones fundamentales de la gobernanza a escala mediterránea: las políticas han dado tradicionalmente prioridad al número de llegadas frente a los modelos sostenibles que garantizan beneficios socioeconómicos y medioambientales a largo plazo. Este enfoque basado en el volumen ha demostrado sus limitaciones a la hora de responder a los umbrales ecológicos, la vulnerabilidad climática y las necesidades de las comunidades de la región (Comisión Europea, 2022).

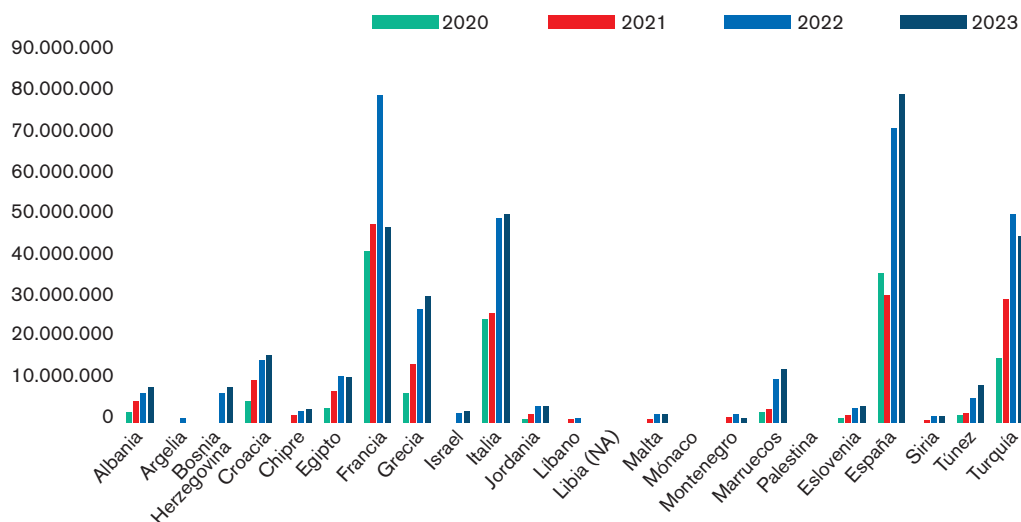
Teniendo en cuenta la próxima Estrategia de Turismo Sostenible de la UE, prevista para 2026 (Comisión Europea, 2025), junto con los marcos y mecanismos multilaterales existentes (por

ejemplo, la Unión por el Mediterráneo y la Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible), las oportunidades residen en aprovechar estos instrumentos para mejorar la gobernanza integrada en todos los países costeros del Mediterráneo. Esto permitiría dar respuestas proactivas a las necesidades de la comunidad y del ecosistema mediante la planificación turística. También permitiría el desarrollo de medidas compartidas de “éxito” que sitúen la resiliencia ecológica, la sostenibilidad y el bienestar de la comunidad en el centro, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad global de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

ESCALA DEL TURISMO AZUL Y PUNTOS CRÍTICOS

Tras un crecimiento estable en las últimas décadas, el turismo mediterráneo representa ahora el 13% de las exportaciones regionales y el 23% del sector servicios (ASCAME, 2022). En 2024, superando las cifras previas a la pandemia, la cuenca registró casi 360 millones de llegadas de turistas internacionales (UICN et al., 2025) en los 22 países costeros, de los cuales el 91,3% fue en el sur

Llegadas de turistas internacionales por país en la región mediterránea (2020-2023)



Fuente: *Towards a Sustainable Blue Economy in the Mediterranean Region 2024*, UpM.

de la Europa mediterránea y el 8,7% en el norte de África. Sin embargo, el 64% se concentra en los puntos costeros más populares de España, Francia e Italia (UICN et al., 2025; Turismo de las Naciones Unidas, 2025), lo que muestra una distribución desigual. El turismo mediterráneo sigue siendo predominantemente un modelo de “sol, arena y mar”, caracterizado por picos pronunciados de llegadas y actividades de ocio en verano.

Para satisfacer la creciente demanda, el Mediterráneo alberga el 20% de la capacidad hotelera mundial (ASCAME, 2022), lo que genera 24.000 millones de euros en valor añadido bruto y da empleo a más de 800.000 personas. Otros servicios relacionados con el turismo aportan otros 16.700 millones de euros, mientras que el transporte contribuye con 9.100 millones de euros (Comisión Europea, 2024).

El turismo de cruceros es uno de los segmentos turísticos azules más rentables de la región. El Mediterráneo acoge el 27% del tráfico marítimo mundial y el 10% de los cruceros, lo que genera 315.000 puestos de trabajo solo en Europa (Balestracci et al., 2025). En 2024, los puertos del Mediterráneo registraron 32,9 millones de pasajeros de cruceros (MedCruise, 2023), destacando los puertos del Mediterráneo occidental –en particular Barcelona y Palma de Mallorca en España, y Civitavecchia en Italia– seguidos por el Mediterráneo oriental y el Adriático (Comisión Europea, 2025).

Además de los cruceros, el Mediterráneo acoge alrededor del 70% de los megayates del mundo, junto con subsectores en crecimiento como la navegacion

recreativa, el buceo y los deportes acuáticos. Solo el buceo atrae a unos 800.000 viajeros europeos al año, lo que genera más de 1.400 millones de euros (UICN et al., 2025). Algunas de estas actividades traspasan las fronteras marítimas y se concentran en puntos de interés compartidos, lo que requiere una coordinación a escala mediterránea.

También existe un interés creciente por las experiencias basadas en la naturaleza, el ecoturismo y el turismo cultural marino. Estas oportunidades de nicho podrían incentivar el turismo en destinos secundarios, impulsar el turismo durante todo el año y reducir potencialmente la estacionalidad. Sin embargo, si no se gestionan bien, corren el riesgo de crear nuevos puntos de interés en ecosistemas frágiles.

El turismo azul sostiene millones de puestos de trabajo e impulsa el desarrollo socioeconómico de las zonas costeras. No obstante, su concentración estacional en corredores y puntos críticos específicos, su enfoque predominante en maximizar las llegadas y su contribución al aumento de las presiones ambientales y sociales amenazan los propios ecosistemas y comunidades de los que depende.

PRESIONES SOBRE LOS ECOSISTEMAS Y LAS COMUNIDADES

Con un 25-30% de las llegadas mundiales, el Mediterráneo es un punto caliente de biodiversidad mundial donde el turismo depende de mares limpios, costas estables, disponibilidad de agua dulce y

culturas locales vibrantes. Sin embargo, el turismo en la región es cada vez más objeto de escrutinio por sus impactos ambientales y sociales.

La expansión de las infraestructuras turísticas ha provocado la fragmentación del paisaje, el aumento del uso del suelo con fines turísticos y la alteración de la dinámica costera. Los puertos marítimos también afectan a las aguas circundantes y a sus especies endémicas y en peligro de extinción, en particular a la Posidonia oceánica, una especie de pastos marinos fundamental para la protección de las costas, la producción de oxígeno, la captura de carbono y los viveros marinos. A pesar de la normativa, la Posidonia oceánica sigue expuesta a los impactos del fondeo (Mediterranean Posidonia Network, 2026; Celis et al., 2026). La vulnerabilidad ecológica es mayor en algunas zonas del Mediterráneo occidental y del norte del Adriático, donde la densa actividad turística, el elevado número de turistas, el tráfico de cruceros y la expansión marina se superponen a ecosistemas frágiles (UICN y ETC-UMA, 2024).

Los recursos críticos también están sometidos a presión. El cambio climático agrava la escasez de agua en toda la cuenca, donde el turismo añade presión a los ya mermados recursos de agua dulce (Kibaroglu, 2017). Estas crisis son especialmente graves en las zonas del sur del Mediterráneo y en las islas, donde las infraestructuras hídricas suelen estar menos desarrolladas y las inversiones siguen siendo limitadas. La sequía también supone un reto para las actividades turísticas. En 2024, los niveles de los embalses en Sicilia des-

cendieron un 60%, lo que obligó a los hoteles a importar agua a un alto coste y supuso una carga para los presupuestos empresariales (Pappas et al., 2024), especialmente de las pymes.

La contaminación por plásticos añade una presión adicional, con unas 229.000 toneladas de residuos plásticos generados anualmente en todo el Mediterráneo (Boucher y Billard, 2020), debido en gran medida a las poblaciones costeras y a la actividad turística, que siguen un modelo de “tomar, fabricar y desechar”. Además, las tasas de reciclaje siguen siendo inferiores al 13% en la mayoría de los países mediterráneos (Plan Bleu, 2026). El plástico se infiltra en las redes tróficas marinas y degrada la calidad medioambiental que sustenta el turismo costero. Según WWF, la contaminación marina aumenta un 40% durante la temporada estival (WWF, 2018). Los impactos se ven agravados por la desigualdad en las infraestructuras de gestión de residuos y las estrategias de reducción de residuos en los distintos destinos. Mientras que algunos (por ejemplo, las Baleares) están reduciendo los residuos y promoviendo sistemas de reutilización y reciclaje, otros siguen careciendo de infraestructuras de clasificación y reciclaje.

El cambio climático agrava estos factores de estrés con repercusiones directas en los activos turísticos. Más de 100.000 millones de euros en infraestructuras turísticas se enfrentan a riesgos derivados del aumento del nivel del mar y la intensificación de las tormentas en todo el Mediterráneo, lo que socava directamente el atractivo “sol y mar” de la región. En Grecia, por ejemplo, el 40% de las playas han retrocedido entre cinco y 10 metros en la última década, lo que ha provocado pérdidas anuales de 50 millones de euros (Pappas et al., 2024). Además, las olas de calor están modificando los patrones turísticos, sobrecargando los recursos y reduciendo el confort de los visitantes y los trabajadores. Los turistas buscan cada vez más viajar durante las estaciones más frescas. Por ejemplo, Chipre y Malta han registrado un aumento del 10-15% en las reservas de primavera y otoño desde 2020. Este patrón puede incentivar la desestacionalización, pero sigue siendo fundamental equipar los destinos para acoger a los visitantes fuera de temporada (Pappas et al., 2024).

Desde el punto de vista socioeconómico, la demanda inmobiliaria impulsa

da por el turismo, en particular la de segundas residencias y alquileres a corto plazo, ha reducido el acceso a la vivienda. España es un caso ejemplar, donde las segundas residencias representan más del 14% del parque inmobiliario nacional y más del 30% en algunas provincias muy turísticas (Garriga, 2020). Por ejemplo, en 2022, Valencia registró 1,6 millones de visitas a segundas residencias (DATAESTUR, 2026).

Además, se ha documentado ampliamente la relación entre el exceso de turismo, el aumento del coste de la vida, el empleo estacional precario y el declive de sectores tradicionales como la pesca y la agricultura, lo que ha agravado las tensiones sociales (por ejemplo, el informe de 2025 publicado por la Comisión Europea sobre “Turismo desequilibrado”). Las recientes protestas en las Islas Canarias, bajo el lema “Las Islas Canarias tienen un límite”, ilustran el creciente descontento de la comunidad y la reacción contra el exceso de turismo y sus consecuencias socioeconómicas negativas en el archipiélago (Hughes, 2025).

Estas presiones medioambientales y socioeconómicas revelan que la prosperidad turística en toda la cuenca opera dentro de un sistema socioecológico sometido a estrés. Por lo tanto, las reformas deben ampliar los modelos turísticos existentes que son positivos para la naturaleza e impulsados por la comunidad –iniciativas piloto fragmentadas actualmente– para preservar y valorizar los activos naturales y culturales. Es esencial reforzar las estrategias en la cuenca mediterránea que integren la adaptación al clima, la protección de la biodiversidad y la planificación turística para alinear la vitalidad económica del turismo con la resiliencia ecológica.

RETOS DE GOBERNANZA Y APLICACIÓN

El turismo azul sostenible se enfrenta a retos estructurales. Dada la naturaleza transfronteriza del sector, que abarca toda la cadena de valor del turismo, desde los puertos deportivos hasta la gestión de residuos, es esencial una coordinación eficaz. Esto requiere la alineación de las partes interesadas a nivel local, nacional y del Mediterráneo para coordinar las políticas que abordan las dimensiones socioculturales, medioambientales y económicas del turismo (UICN et al., 2025). Sin embargo, la coordinación se ve dificultada por las múltiples jurisdicciones

del Mediterráneo, que presentan diferentes capacidades reguladoras, normas de aplicación y prioridades de desarrollo. Esta fragmentación se demuestra en muchas zonas vulnerables en las que los hábitats sensibles siguen sin estar suficientemente protegidos o en las que las normativas se aplican de forma deficiente a pesar de la alta intensidad de las actividades turísticas.

Los recursos financieros suelen seguir favoreciendo los modelos turísticos basados en el volumen, con inversiones que apoyan desarrollos costeros a gran escala y la expansión inmobiliaria. Mientras tanto, las medidas de restauración de la naturaleza, eficiencia hídrica y descarbonización sectorial siguen sin contar con la financiación necesaria. Por consiguiente, se necesitan mayores inversiones en el sector turístico para apoyar la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza (NbS), infraestructuras ecodiseñadas y restauración de la naturaleza (Plan Bleu, 2022), especialmente adaptadas a las pymes (UICN et al., 2025). Sin incentivos estructurales financieros y no financieros para descarbonizar las actividades e infraestructuras turísticas costeras y marinas –incluidas las operaciones de cruceros y los alojamientos que consumen mucha energía–, los objetivos climáticos sectoriales, como los establecidos en la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo, se enfrentarán inevitablemente a retos en su consecución (One Planet Network, 2026).

Muchos gestores turísticos no tienen acceso, o tienen un acceso limitado, a los datos esenciales sobre los riesgos climáticos, las proyecciones sobre el estrés hídrico y las evaluaciones de la biodiversidad necesarios para la planificación a largo plazo de los destinos. Sin sistemas de seguimiento localizados y un intercambio de conocimientos intersectorial, no es posible diseñar, aplicar, evaluar o ajustar de manera eficaz estrategias de turismo azul sostenible. También existe una necesidad creciente de herramientas digitales y sistemas inteligentes que permitan el seguimiento en tiempo real y el análisis predictivo para la toma de decisiones informadas (UICN et al., 2025).

En lo que concierne al sector empresarial, las pymes, que dominan la economía turística, suelen carecer de la capacidad técnica y el capital necesarios para invertir en instalaciones más sostenibles, adoptar soluciones de

energía renovable o implementar informes de sostenibilidad exhaustivos en sus operaciones. Desde la perspectiva del mercado, la inestabilidad sociopolítica aumenta aún más estos retos, ya que los conflictos regionales y las tensiones geopolíticas crean volatilidad en los flujos de viajeros y en la confianza de los inversores. En conjunto, la fragmentación de la gobernanza, los incentivos desalineados y las limitaciones de capacidad ralentizan la transición de un modelo turístico basado en el volumen a un desarrollo basado en el valor y de bajo impacto.

Para superar estas barreras es necesario llevar a cabo reformas coordinadas en toda la cuenca con el fin de armonizar las normas medioambientales, aplicar una gestión integrada de las zonas costeras, desarrollar una planificación de infraestructuras resistentes al clima, reforzar los sistemas de datos regionales y establecer mecanismos financieros que apoyen la conservación y la descarbonización. Lo que se necesita es una alineación sistémica en toda la cuenca entre los sistemas de gobernanza, finanzas y conocimientos que aproveche el impulso político actual.

IMPULSO POLÍTICO PARA EL TURISMO AZUL SOSTENIBLE

En toda la cuenca, el turismo azul debe ir más allá de los enfoques centrados solo en mitigar los impactos negativos y avanzar hacia modelos de resiliencia que protejan los ecosistemas, refuercen las comunidades y garanticen la estabilidad socioecológica de los destinos costeros. Para ello es necesario reposicionar el turismo no solo como fuente de ingresos, sino como palanca estratégica para el desarrollo sostenible de la región.

Una economía azul sostenible reconoce que unos mares sanos, unos ecosistemas que funcionen y unas comunidades empoderadas constituyen la base de la prosperidad a largo plazo. En consecuencia, los marcos de gobernanza del turismo en la cuenca deben incorporar la protección de la biodiversidad, la adaptación al clima, la gestión circular de los recursos y el desarrollo inclusivo en las políticas turísticas y las decisiones de inversión. Debe mejorarse la coherencia y la integración de las políticas para reducir la desconexión entre las políticas turísticas y los planes de conservación marina, los marcos de gestión del agua, los instrumentos de

ordenación del territorio y las estrategias de adaptación al clima. Esa fragmentación agrava la presión sobre los recursos, la degradación de los hábitats y la tensión sobre las infraestructuras en toda la cuenca compartida.

El Mediterráneo ya se beneficia de unas sólidas orientaciones estratégicas resultantes de la cooperación multilateral: el Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación (Convenio de Barcelona) ha establecido siete protocolos, entre ellos el protocolo sobre gestión integrada de las zonas costeras, especialmente relevante para la planificación y la gestión del turismo. El sistema del Convenio de Barcelona apoya la aplicación de la Estrategia Mediterránea para el Desarrollo Sostenible (MSSD) a través de la Comisión Mediterránea para el Desarrollo Sostenible (CMDS). Estos mecanismos promueven una economía verde y azul inclusiva basada en la restauración de los ecosistemas y la resiliencia climática.

Como complemento a estos marcos, la Declaración Ministerial de WestMED Malta (2023) y la Declaración Ministerial de la Unión por el Mediterráneo sobre la Economía Azul (2021), junto con su Hoja de ruta para la aplicación de la Declaración Ministerial de 2021 (2025), hacen hincapié en la armonización de las políticas sobre soluciones basadas en la naturaleza y la cooperación regional para una economía azul sostenible, incluido el turismo.

En el ámbito europeo, la Comunicación sobre la economía azul sostenible de 2021 supuso un cambio fundamental, pasando de un enfoque de "crecimiento azul" a un modelo orientado a la sostenibilidad en consonancia con el Pacto Verde Europeo (Comisión Europea, 2021). Este enfoque pone en práctica los compromisos a través de misiones concretas como "Restaurar nuestros océanos y aguas", cuyo objetivo es la reducción de la contaminación, el desarrollo neutro en carbono y la transformación de la economía azul circular. En 2022, la Comisión Europea publicó la "Vía de transición para el turismo", en la que se identifican 27 ámbitos de acción para mejorar la resiliencia del turismo de la UE, y se pide específicamente que los servicios del sector sean circulares y respetuosos con el medio ambiente.

Además, el Pacto por los Océanos de la UE para 2025 unifica las políticas oceánicas en un marco coordinado para promover economías azules prósperas

y el bienestar costero (Comisión Europea, 2025). Cabe destacar que su Pacto para el Mediterráneo establece objetivos de cooperación explícitos entre los Estados miembros de la UE y los socios del sur del Mediterráneo, lo que permite directamente la innovación regional y un desarrollo económico más sostenible e integrado (Comisión Europea, 2025).

En particular, la próxima Estrategia de Turismo Sostenible de la UE, prevista para mediados de 2026, tiene un potencial transformador para alinear y complementar estos mecanismos en una acción turística coherente. Se prevé que aborde el problema de la masificación en los lugares más visitados, así como la mejora de las competencias digitales y ecológicas, la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de la competitividad global del sector (Unión Europea, 2025). Su verdadero potencial reside en la integración sistémica coherente de la adaptación al clima, los objetivos de biodiversidad, los objetivos de economía circular y los de inclusión social en la política turística.

La estrategia también podría ayudar a abordar las limitaciones estructurales: las deficiencias en la coordinación de la gobernanza, los desajustes en la financiación, los déficits de datos y la descarbonización de los segmentos con altas emisiones mediante la coherencia en toda la cuenca. Es importante destacar que ofrece la oportunidad de reconocer mejor las vulnerabilidades específicas del Mediterráneo relacionadas con el turismo —incluidas las islas, las regiones con escasez de agua y los puntos críticos de biodiversidad— allanando el camino para mejorar las normas, las herramientas prácticas y la orientación en materia de inversiones para las autoridades locales y las pymes.

El Mediterráneo funciona como un sistema socioecológico interconectado que abarca 22 países costeros, en lugar de una colección de destinos aislados. Las presiones medioambientales, los flujos turísticos y la dinámica económica trascienden las fronteras nacionales, lo que requiere una gobernanza compartida que armonice la vitalidad económica, la resiliencia y el bienestar de la comunidad. Aprovechar los marcos existentes junto con la próxima Estrategia de Turismo Sostenible de la UE será esencial para reforzar la coordinación turística, resolver las presiones, superar las barreras de gobernanza y poner en práctica la sostenibilidad a gran escala./



Diálogos



**72 EL ISLAM EN AMÉRICA LATINA:
ESTADO DE LA CUESTIÓN**

Baptiste Brodard

76 EL ISLAM EN EL SUDESTE DE EUROPA

Ina Merdjanova

**80 ISLAM Y POLÍTICA EN EL ESPACIO
POSTSOVIÉTICO: CÁUCASO Y ASIA CENTRAL**

Bayram Balci

Musulmanes rezan la oración del Eid al Adha en la mezquita de los Mártires. Bakú, Azerbaiyán, 6 de junio de 2025./RESUL REHIMOV/ANADOLU VIA GETTY IMAGES

El islam latinoamericano tiende a presentarse como un fenómeno localizado y contextualizado, más que como la mera implantación de una religión percibida como extranjera.

Baptiste Brodard es profesor lector e investigador en islamología en la Universidad de Aix-Marseille.

EL ISLAM EN AMÉRICA LATINA: ESTADO DE LA CUESTIÓN

Durante mucho tiempo percibido como marginal o inexistente, el islam sigue siendo un gran desconocido en América Latina. En el imaginario colectivo, la región todavía se asocia mayoritariamente a una identidad cristiana omnipresente, heredada de la colonización ibérica y de la hegemonía secular de la Iglesia católica. Sin embargo, desde hace varias décadas, el islam se inscribe de manera creciente en los paisajes religiosos, culturales y sociales latinoamericanos. Esta presencia, aunque numéricamente minoritaria, se manifiesta a través de una pluralidad de fenómenos contemporáneos: el activismo de organizaciones islámicas transnacionales, dinámicas de conversión local, migraciones antiguas y nuevas, flujos culturales a través del cine y la música, o incluso discursos políticos de solidaridad Sur-Sur.

Lejos de constituir un bloque homogéneo, el islam en América Latina se caracteriza por una gran diversidad de trayectorias, de orígenes étnicos y de formas de religiosidad. Las primeras presencias musulmanas se remontan a la época colonial con la llegada de esclavos africanos, mientras que las grandes oleadas migratorias del siglo XIX y principios del siglo XX dieron lugar al asentamiento de poblaciones procedentes de Oriente Próximo (Líbano, Siria, Palestina). A estos legados se añaden hoy las conversiones locales, a menudo vinculadas a búsquedas espirituales individuales, a cuestionamientos identitarios o a una predicación islámica global a través de redes de organizaciones.

A pesar de la gran diversidad que caracteriza a América Latina, se observan dinámicas ampliamente convergentes en la organización del islam. Esta transversalidad

justifica el planteamiento de este artículo, que propone un panorama del islam contemporáneo en América Latina a partir de la pluralidad de sus comunidades musulmanas, tanto desde el punto de vista de sus orígenes como de sus prácticas y sus modos de organización. En una segunda parte, el foco se centrará en las dinámicas de expansión religiosa en la región, presentando los diversos factores sociales que favorecen o limitan la visibilidad y la institucionalización del islam en América Latina.

En el plano metodológico, el análisis se apoya –además de en el estudio de la literatura académica y periodística– en investigaciones empíricas de tipo cualitativo y etnográfico llevadas a cabo en centros islámicos y comunidades musulmanas de Colombia, México, Brasil, Chile, Argentina, Cuba, El Salvador, Honduras y Paraguay, así como en entrevistas en profundidad con musulmanes de estos diferentes países realizadas entre 2020 y 2026, que pretenden definir mejor las formas contemporáneas y las especificidades del islam latinoamericano.

CONTEXTO HISTÓRICO

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, es importante volver sobre la historia de la presencia musulmana en América Latina. Desde finales del siglo XV, la conquista hispánica de las tierras de América Central y del Sur y el establecimiento de las primeras colonias conllevó, a pesar de las precauciones de las instituciones políticas y religiosas coloniales, la llegada de moriscos, antiguos musulmanes forzados a convertirse al catolicismo. Una influencia sociocultural difusa arraigó en el nuevo con-



tinente, pese a la fuerte represión de la Inquisición y la prohibición oficial de toda religión no católica.

En el siglo XVI comenzó, además, la deportación de esclavos africanos hacia América, que duraría en ciertas zonas, como Brasil, hasta el siglo XIX. Un porcentaje significativo de estos esclavos era de confesión musulmana. La represión y prohibición de practicar el islam no impidieron que algunos grupos de esclavos –y posteriormente sus descendientes liberados– lograran mantener una práctica musulmana en ciertas épocas y entornos. En el siglo XIX se identificó una presencia musulmana consolidada en Brasil, concretamente en Salvador de Bahía, con el famoso episodio de la revuelta de los Malés, así como en Río de Janeiro y en la región de Recife, según atestigüa en su relato de viaje el imán otomano Al Baghdadi.

Un poco más tarde, las migraciones otomanas supusieron la llegada de personas originarias de Oriente Próximo, de las cuales solo una minoría era musulmana, principalmente a Brasil y Argentina. Nacieron así, a principios del siglo XX, los primeros centros islámicos oficiales. Sin embargo, solo una pequeña minoría de los descendientes de estos migrantes mantuvo su identidad musulmana, ya que la continuidad religiosa no se aseguró debido a los matrimonios mixtos y a lógicas de aculturación.

En suma, a pesar de una presencia histórica cimentada sobre estos tres pilares, apenas ha existido continuidad generacional entre los antiguos musulmanes del continente y la presencia musulmana contemporánea; al contrario, esta última deriva de migraciones mucho más recientes, así como de conversiones que se han multiplicado desde hace algunas décadas.

REALIDADES CONTEMPORÁNEAS

Desde los años setenta, nuevas oleadas migratorias de Oriente Próximo, sobre todo libanesas, traerán una presencia musulmana más marcada en ciertas regiones,

Celebración del Eid al-Fitr en la mezquita Abu Bakr Al-Siddiq, Bogotá, 30 de marzo de 2025./JUANCHO TORRES/ANADOLU VÍA GETTY IMAGES

especialmente en el norte de Colombia, Venezuela y en algunas ciudades de Brasil. Grandes mezquitas, como la de Maicao, son el resultado de la lógica de esta diáspora.

A partir de la década de 2000, se ponen en marcha nuevas dinámicas migratorias que contribuyen a una diversificación y a un aumento sensible de la presencia musulmana en América del Sur. Pakistaníes, magrebíes, africanos subsaharianos y nacionales de otros países de mayoría musulmana se instalan en Colombia, México, Argentina, Brasil y otros Estados de la región. Sus motivaciones son, en la mayoría de los casos, de orden económico, o se inscriben en trayectorias migratorias más amplias hacia Occidente, donde América Latina constituye una etapa más o menos duradera de su recorrido.

Paralelamente a estos fenómenos migratorios, se han producido conversiones al islam, en diversos grados, en el conjunto de los países de América Latina. Así, la ciudad colombiana de Buenaventura experimentó, ya desde los años sesenta, varios centenares de conversiones bajo la influencia sucesiva de la Nation of Islam, del sunismo y, posteriormente, del chiismo. Otro caso emblemático de conversiones colectivas se sitúa en Chiapas (México), en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde, desde 1995, varios centenares de indígenas han abrazado el islam y han contribuido al desarrollo de cinco centros islámicos distintos en una misma ciudad.

Más allá de estos casos particulares de conversiones colectivas –a los que pueden añadirse otros ejemplos en El Salvador, Brasil o Argentina–, desde los años ochenta se observan en casi toda América Latina numerosas conversiones individuales motivadas por factores variados, ya sean espirituales y religiosos, relacionales, socio-culturales o incluso políticos.

En resumen, la presencia musulmana actual se compone de personas procedentes de las diásporas de Oriente Próximo, de migrantes musulmanes instalados en América Latina durante las últimas décadas, de conversos de mayor o menor trayectoria, así como de descendientes directos de personas convertidas al islam. Todos ellos frecuentan las mezquitas y se relacionan entre sí en cierta medida, aunque algunos centros islámicos reúnen a una clara mayoría de conversos y otros son frecuentados casi exclusivamente por migrantes.

Esta complejidad, tanto histórica como contemporánea, que caracteriza la composición social de las poblaciones musulmanas de América Latina, desdibuja las estadísticas. Estas suelen estar desfasadas con respecto a la realidad, especialmente cuando confunden a los lejanos descendientes de migrantes árabes de principios del siglo XX con las personas que se identifican efectivamente como musulmanas.

Para dar respuesta a estas carencias, he optado por una cartografía de las congregaciones musulmanas a fin de censar el conjunto de los centros islámicos, mezquitas y grupos de creyentes en zonas seleccionadas. El censo de las personas que frecuentan estas congregaciones permite obtener una estimación mucho más precisa de la población musulmana de lo que permiten las estadísticas. No obstante, la conversión al islam de numerosas personas aisladas –a menudo por medio de internet y que viven a veces en zonas alejadas de cualquier mezquita– complica la estimación cuantitativa de los musulmanes. Así, aunque la mezquita de Salvador de Bahía solo acoge regularmente a una treintena de fieles, su imán estima en unos 800 el número de musulmanes en la región. Este desajuste se explica por el hecho de que muchos conversos, así como otros musulmanes, viven lejos de la mezquita o están absorbidos por sus actividades profesionales y familiares. A esto se añade la movilidad de muchos migrantes, que circulan de una región a otra sin establecerse necesariamente en ellas de forma duradera.

A pesar de estas limitaciones, el inventario de las congregaciones parece el único medio riguroso para disponer de una cartografía de la presencia musulmana en América Latina. En Colombia se han podido identificar una veintena de congregaciones musulmanas, no solo en las grandes ciudades, sino también en zonas más rurales y remotas como Guapi o Leticia.

LA DIVERSIDAD DE LAS COMUNIDADES MUSULMANAS

La presencia musulmana latinoamericana es especialmente heterogénea, no solo en el ámbito sociológico, como se ha mencionado anteriormente, sino también en el teológico.

Desde el punto de vista de sus componentes socio-culturales, algunas mezquitas locales acogen casi exclusivamente a musulmanes conversos, como ocurre en Buenaventura (Colombia), Chiapas (México), Itabaianinha (Brasil) o en algunas cofradías sufíes en Argentina. Otras, por el contrario, están controladas por la diáspora libanesa y acogen, de hecho, a una mayoría de árabes, especialmente en la región de la Triple Frontera (Argentina, Brasil, Paraguay), o en Maicao (Colombia).

Por último, algunos centros islámicos presentan un perfil mucho más mixto, reuniendo a migrantes recientes de orígenes diversos, conversos latinoamericanos y miembros de diásporas árabes más antiguas.

A esta diversidad sociológica se añade una pluralidad de anclajes doctrinales e ideológicos. Se registra en América Latina un número significativo de centros chiíes duodecimanos, inscritos en la línea teológica de la República Islámica de Irán, junto a una mayoría de mezquitas suníes pertenecientes a varias obediencias. El movimiento Ahmadía también está presente en varios países de América Latina a través de una red de mezquitas, misiones religiosas y proyectos caritativos.

En el seno del sunismo, se observa una diversidad doctrinal que polariza ciertas mezquitas y cubre un amplio abanico de tendencias, del salafismo al sufismo. Una vasta red de centros islámicos que se adscriben a un salafismo de inspiración sururista ha consolidado su influencia en numerosos países de América Latina, principalmente mediante el establecimiento de mezquitas abiertas para las cinco oraciones diarias y el desarrollo de actividades caritativas y de predicación (*dawa*). Otra corriente salafista, más restringida y exclusiva, a menudo calificada de madjalista, está representada por algunas pocas mezquitas, especialmente en Colombia y México.

Por otra parte, América Latina cuenta también con mezquitas suníes de tendencia más tradicionalista, a menudo abiertas al sufismo. Por último, el movimiento del Tabligh está activo en la región, no solo a través de la gestión de ciertos centros islámicos –especialmente su *markaz* en Panamá, además de algunas mezquitas en Argentina y Paraguay–, sino también mediante la circulación de pequeños grupos de predicadores en el marco del *khuruj*, práctica central del movimiento. Durante estas “salidas”, grupos de fieles permanecen en diferentes mezquitas de un país o región con el fin de ir al encuentro de los musulmanes y exhortarlos a una práctica “correcta” del islam.

Asimismo, en América Latina se despliega una red de estructuras musulmanas de Turquía con fines misioneros, como los Süleymançilar, que ponen en marcha escuelas e internados destinados a niños y adolescentes, y posteriormente envían a algunos de ellos a completar su formación religiosa en Turquía. También se encuentra la Jamaah Nur, que ha abierto algunos centros de culto y enseñanza para acoger a los musulmanes locales, especialmente a los conversos.

En cuanto al sufismo, algunas cofradías se han implantado de forma duradera en América Latina, como la Naqshbandiyah Haqqaniya, bien establecida en Argentina y también en México, o la orden sufí Halveti Yerrahi en Argentina y Chile. Existen otras comunidades sufíes más restringidas en muchos otros países, como por ejemplo en Cuba y Colombia.

Esta reciente diversidad doctrinal e ideológica interna del islam latinoamericano resulta principalmente de la implantación de organizaciones islámicas extranjeras y transnacionales a partir de las décadas de 2000 y 2010, aunque algunas de ellas –especialmente las afiliadas al chiismo de inspiración iraní y a diversas cofradías sufíes– están presentes en la región desde los años ochenta.

La llegada de nuevos misioneros, desde el salafismo hasta el ahmadismo, atestigua una percepción crecien-

te de América Latina como una "tierra de misión" para la *dawa* islámica. Esta representación ha favorecido la afluencia no solo de organizaciones islámicas estructuradas con fines proselitistas, sino también de actores independientes comprometidos en actividades de predicación.

Este fenómeno plantea una cuestión a menudo formulada pero rara vez examinada con rigor: ¿está el islam en expansión en América Latina? Y, en tal caso, ¿en qué proporciones y según qué dinámicas?

EXPANSIÓN DEL ISLAM EN AMÉRICA LATINA

La cuestión de la expansión del islam en América Latina ha sido tratada por algunos artículos periodísticos y académicos alimentando ciertos fantasmas, especialmente en lo relativo a una supuesta islamización de las favelas en Brasil o a una conversión masiva de indígenas wayúus en la Guajira. Mis estudios de campo rebaten algunas de estas alegaciones al relativizar la magnitud del fenómeno de las conversiones.

En primer lugar, las conversiones al islam en el seno de la juventud pobre de las favelas brasileñas –que afectan ante todo a la periferia de São Paulo– se han contado desde los años noventa por decenas o centenares de casos, y no por miles o millones como se ha sugerido en ocasiones. Además, estas conversiones no implican siempre compromisos duraderos con el islam, sino algunos tipos de religiosidad que concluyen a veces con el paso a otras religiones o el abandono del islam. Hoy en día, existe en las favelas una presencia islámica real pero muy minoritaria; hasta la fecha solo un centro islámico está presente en tales entornos. El fuerte crecimiento del número de mezquitas en Brasil deriva sobre todo de otras lógicas, principalmente migratorias. Así, numerosas mezquitas de los centros urbanos son frecuentadas por una mayoría de migrantes africanos, cuya presencia relativamente reciente en el país ha inducido un aumento de la visibilidad del islam. Paralelamente, las conversiones individuales son numerosas, si bien siguen siendo heterogéneas según el lugar. Finalmente, un dinamismo islámico, amplificado por el papel activista de movimientos islámicos extranjeros, a menudo conlleva la creación de nuevos centros islámicos en el país.

En otros lugares de América Latina se observa también un aumento del número de mezquitas, debido igualmente a la llegada de nuevos migrantes musulmanes y a las conversiones. No obstante, algunas congregaciones ven, paradójicamente, cómo disminuye su número de fieles. Si bien las conversiones al islam son numerosas y regulares, la perennidad de estos compromisos religiosos sigue siendo discutible. A raíz de decepciones relacionales, dificultades en la práctica de los ritos o la imposibilidad de integrarse en círculos comunitarios, algunos conversos se distancian del islam. Este fenómeno, que sigue siendo poco percibido y documentado, se relaciona frecuentemente con la dificultad de los nuevos musulmanes para consolidar su nueva identidad religiosa en un contexto sociocultural donde el islam sigue siendo muy minoritario. Además, a muchos musulmanes, ya sean conversos o migrantes, les cuesta casarse con una pareja de la misma confesión y transmitir el islam a sus hijos.

Las personas convertidas desempeñan un papel esencial en el desarrollo de un islam local, específico de América Latina

Con frecuencia, estos últimos terminan por distanciarse de la fe de sus padres, lo que explica también la evolución limitada de la presencia musulmana a lo largo de los años. Las propias diásporas arabo-musulmanas se ven afectadas por este declive debido a la asimilación cultural y, por extensión, religiosa de una parte de los jóvenes.

CONCLUSIÓN

En las tres últimas décadas, la expansión del islam en América Latina sigue siendo real pero fuertemente dispar según la región, experimentando incluso un declive en ciertas zonas. En promedio, se observa, no obstante, un claro aumento del número de congregaciones musulmanas y de conversiones regulares.

En este contexto, las personas conversas desempeñan un papel esencial en el desarrollo de un islam local, específico de América Latina. Poco a poco, la visión de una realidad musulmana exógena trasplantada a nuevas tierras cede el paso a la afirmación autóctona de un islam que se concibe y vive cada vez más a la luz del contexto latinoamericano.

Esta etapa de indigenización del islam, que siempre ha caracterizado la evolución de la presencia musulmana en nuevos territorios, se caracteriza especialmente por la emergencia de líderes comunitarios locales cuyos estudios islámicos –cursados a menudo en el mundo musulmán– les permiten cada vez con más frecuencia asumir la dirección y guía de comunidades compuestas esencialmente por conversos.

Paralelamente, un proceso de contextualización, tanto teórico –en los discursos– como práctico –en los comportamientos concretos de los musulmanes locales–, conduce a una reinterpretación de las normas islámicas a la luz de las realidades socioculturales circundantes. Esta dinámica implica una jerarquización de las referencias religiosas, en la que se destacan ciertos principios mientras que otros, considerados secundarios, se relativizan.

De este modo, las comunidades musulmanas latinoamericanas participan activamente en la negociación permanente del islam como tradición discursiva, dotada de fundamentos estructurantes y de una capacidad de adaptación que, históricamente, le ha permitido conectar con los contextos en los que se implanta.

En suma, si bien la presencia musulmana en América Latina sigue siendo cuantitativamente limitada, ha ganado en visibilidad y legitimidad en el curso de las tres últimas décadas. Más aún, el islam latinoamericano tiende ahora a presentarse como un fenómeno localizado y contextualizado, más que como la mera trasplatación de una religión percibida como extranjera./

Las identidades musulmanas en los Balcanes están definidas por factores como el legado histórico y las realidades poscomunistas; la presión económica y las inquietudes culturales, políticas nacionales, regionales y globales.

Ina Merdjanova es investigadora sénior en la Irish School of Ecumenics del Trinity College de Dublín. Este artículo retoma algunas ideas y argumentos de su libro *Rediscovering the Umma: Muslims in the Balkans between Nationalism and Transnationalism* (Nueva York: Oxford University Press, 2013).

EL ISLAM EN EL SUDESTE DE EUROPA

Los estudios y debates sobre el islam en Europa se han centrado principalmente en los musulmanes de los países occidentales y han estado dominados por la visión del islam como un fenómeno ajeno y relativamente nuevo en suelo europeo. Por lo general, han pasado por alto el hecho de que Europa cuenta con una considerable población musulmana autóctona en su parte sudoriental, en la región de los Balcanes, donde se han desarrollado modelos de coexistencia y negociación de las diferencias religiosas y culturales entre los seguidores locales del cristianismo ortodoxo, el catolicismo romano, el islam y el judaísmo.

Las comunidades musulmanas de esta parte del mundo son un legado del dominio otomano sobre la región entre finales del siglo XIV y principios del XX. La expansión masiva del islam se logró, por un lado, con la afluencia de poblaciones de habla turca y, por otro, con la conversión gradual de parte de la población eslava local. La organización social otomana se basaba en el llamado sistema *millet*, que dividía a las diversas poblaciones según su afiliación religiosa y no según su identidad lingüística o étnica. Los *millets* eran comunidades basadas en la fe, administradas por los respectivos líderes religiosos, con el *millet* musulmán en la cima, que gozaba de privilegios religiosos, administrativos y políticos. Las poblaciones ortodoxa cristiana, judía, armenia, ortodoxa siria y católica romana formaban sus propios *millets*. Con el tiempo, las divisiones étnicas se consolidaron dentro de los diferentes *millets* y, posteriormente, las identidades religiosas y étnicas se entrelazaron en los procesos de construcción de la nación.

El auge del nacionalismo desde el siglo XVIII inspiró las luchas locales por la liberación nacional. Esto condujo a la desintegración gradual del Imperio otomano y a la formación de varios Estados-nación independientes en los Balcanes entre 1829 y 1913. Los musulmanes perdieron la posición jurídica y social privilegiada de la que gozaban como seguidores de la religión dominante en el Imperio otomano y, por lo tanto, lucharon por definir su lugar como minorías religiosas dentro de los nuevos Estados, predominantemente cristianos. Poco a poco, las instituciones religiosas que representaban a los musulmanes locales ganaron independencia del centro otomano. Esto marcó el comienzo de la nacionalización del islam en los Balcanes.

En el periodo de entreguerras, los Estados balcánicos trataron de cooptar y controlar a sus poblaciones musulmanas a través de sus instituciones religiosas islámicas. Al mismo tiempo, los intelectuales musulmanes participaron activamente en los debates sobre un “islam europeo” y debatieron cuestiones relacionadas con la reforma religiosa, la modernización, la secularización y el papel de la mujer.

Bajo los regímenes comunistas, que llegaron al poder después de la Segunda Guerra Mundial y trataron de crear naciones socialistas seculares, los musulmanes, al igual que otras comunidades religiosas de la región, sufrieron diversas políticas de ateización que suprimían las identidades y costumbres religiosas. Estas políticas diferían de un país a otro y cambiaron con el tiempo.

Con la libertad religiosa surgida tras el fin de la guerra fría, las comunidades musulmanas experimentaron

notables transformaciones. Recuperaron activamente su fe islámica y sus tradiciones culturales, reconstruyeron sus estructuras institucionales y educativas y trataron de renegociar su lugar en entornos jurídicos y normativos anteriormente laicos, en sociedades mayoritariamente cristianas. Además, restablecieron las conexiones con el mundo musulmán en general y se vieron cada vez más expuestas a la circulación global de personas, fondos, ideas y prácticas musulmanas.

Es importante señalar que los musulmanes del sudeste de Europa distan mucho de ser una población homogénea. Difieren étnica y lingüísticamente, así como en términos de orientación ideológica, estatus social, afinidades culturales y educación, entre otros. En la actualidad, los países balcánicos albergan a unos 6,5 millones de musulmanes. La mayoría de ellos son suníes y siguen la *madhab* (escuela de derecho) hanafí, mientras que el islam sufí está representado a través de varias *tariqas* (hermandades religiosas), como Bektashiyya, Naqshbandiyya, Khalwatiyya, Qadiriyya y Rifaiyya, entre otras.

Geográficamente, los musulmanes están distribuidos de forma desigual, siendo la comunidad más grande la de Bosnia-Herzegovina (alrededor de 1,8 millones) y la más pequeña la de Croacia (50.000). Desde el punto de vista lingüístico, los musulmanes de los Balcanes se dividen en hablantes de albanés (cerca de tres millones), hablantes de lenguas eslavas (más de dos millones), hablantes de turco (alrededor de un millón) y romaníes (estimados en 0,5 millones, aunque las cifras reales podrían ser superiores). En general, los musulmanes están bien integrados en las sociedades locales y están representados tanto políticamente (a través de diversos partidos locales) como culturalmente (a través de numerosas asociaciones y organizaciones).

BULGARIA

Los musulmanes de Bulgaria constituyen alrededor del 10% de la población total de 6,5 millones de habitantes. Están muy diversificados tanto étnicamente (el grupo más numeroso es el de los turcos étnicos, seguido de los romaníes y los pomacos) como religiosamente (los musulmanes turcos se dividen en suníes y chiíes). Los chiíes, que representan alrededor del 7% de los musulmanes, son conocidos como *aliani* o *qizilbash* (“cabeza roja”) por su tradicional tocado con 12 rayas que representan a los 12 imanes, y viven principalmente en la parte noreste del país. Los pomacos son musulmanes de habla búlgara, también llamados musulmanes de origen étnico búlgaro. Son una población predominantemente rural, que vive principalmente en “enclaves pomacos” en las montañas Ródope.

Las políticas comunistas hacia las minorías musulmanas en el país fueron muy voluntaristas y sufrieron considerables alteraciones entre 1945 y 1989. Al percibir el islam como un serio obstáculo para la integración de los turcos y otros musulmanes en la sociedad búlgara, el partido comunista intentó crear una “minoría turca socialista”. Suprimió la identificación religiosa y fomentó el desarrollo de una élite secular entre los ciudadanos de etnia turca mediante la mejora de sus condiciones educativas y culturales. Como resultado de las

Los musulmanes del sudeste de Europa distan mucho de ser una población homogénea, difieren étnica y lingüísticamente, así como en términos de orientación ideológica, estatus social, afinidades culturales o educación

restricciones y la opresión del régimen comunista y bajo la influencia de la Turquía kemalista, el principal foco de identidad de la minoría turca del país pasó de ser la religión a la etnia.

En las décadas de los setenta y ochenta, los nombres tradicionales de los musulmanes fueron cambiados por la fuerza a nombres búlgaros, y se introdujeron medidas severas contra la práctica religiosa y el uso público de la lengua turca. Más de 350.000 turcos búlgaros abandonaron el país para irse a Turquía (de los cuales unos 100.000 regresaron más tarde). A pesar de los esfuerzos del gobierno comunista por socavar la afiliación religiosa de la población musulmana mediante propaganda antiislámica, la confiscación de los bienes de las fundaciones benéficas (*waqfs*), la reducción del número de mezquitas en funcionamiento y la persecución de los líderes religiosos, los turcos y otros musulmanes persistieron en la práctica de sus ritos tradicionales basados en el islam.

Después de 1989, Bulgaria logró revertir la asimilación de su población musulmana. Los musulmanes disfrutaron de un renacimiento de sus prácticas espirituales y culturales, además de participar activamente en la vida política del país. Los musulmanes de habla búlgara, en particular, experimentaron complejas transformaciones de identidad. Algunos de ellos hicieron hincapié en su afiliación étnica búlgara y se convirtieron al cristianismo, otros reivindicaron una identidad étnica turca y un tercer grupo intentó construir una nueva identidad étnica basada en el islam.

BOSNIA-HERZEGOVINA

Las complejas transformaciones de las identidades musulmanas en Bosnia-Herzegovina no pueden entenderse al margen de las realidades históricas y políticas de la ocupación austrohúngara del país (1878-1918), su consiguiente inclusión en el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (1918-1941), su conversión en república constituyente de la Yugoslavia socialista (1945-1990) y la guerra de secesión de 1992-1995.

La Bosnia-Herzegovina multinacional fue un campo de batalla para los nacionalismos serbio y croata desde finales del siglo XIX. En comparación, la nacionalización de las identidades musulmanas cobró importancia a partir de 1968, cuando el gobierno yugoslavo clasificó a los musulmanes bosnios como una nación.



Vista de la mezquita Sinan Pasha, construida en 1615 por Sinan Pasha, gobernador otomano de Bosnia. Prizren, Kosovo./YUNUS EMIRE GUNAYDIN/AGENCIA ANADOLU VIA GETTY IMAGES

En contraste con los musulmanes turcos de Bulgaria, que difieren de la población mayoritaria tanto en lo religioso como en lo lingüístico, los musulmanes de Bosnia-Herzegovina son eslavos y hablan el mismo idioma que sus compatriotas, los serbios ortodoxos y los croatas católicos. La incierta y tardía nacionalización del islam en el país se complicó aún más por dos tendencias contrapuestas: el enfoque explícito en la religión por parte de las élites panislamistas se enfrentó a la oposición de los intelectuales de orientación secular, que trataban de minimizar el lugar del islam en la identidad nacional.

Los musulmanes sufrieron la violencia y la destrucción de la guerra y la limpieza étnica después de que la república proclamara su independencia de la antigua Federación Yugoslava en 1992. Esto afectó significativamente a la construcción en curso de una nación bosnia basada en el islam. La guerra provocó, al menos durante un cierto período de tiempo, una reislamización de la identidad nacional y la solidaridad de los musulmanes bosnios con el mundo islámico en general. Los imanes siguieron a los combatientes en la batalla para proporcionarles apoyo moral y religioso. Varias organizaciones islámicas estatales y no estatales enviaron ayuda militar, ayuda humanitaria y yihadistas extranjeros. Los actores islámicos transnacionales a menudo difundían ideas y prácticas neosalafistas, que competían con el hanafismo bosnio y provocaban la pluralización de la vida religiosa.

En 1993, se disolvió la organización yugoslava Comunidad Islámica, que representaba a los musulmanes de las diferentes repúblicas yugoslavas y tenía su sede en Sarajevo. En su lugar se creó una institución bosnia

que encabezó la nacionalización del islam. Sin duda, como indicaban las encuestas, la mayor visibilidad del islam en el espacio público no se tradujo necesariamente en un aumento de la piedad religiosa.

Tras el fin de la guerra en 1995, las controvertidas transformaciones económicas y sociales neoliberales del país se fusionaron con la reconstrucción de la posguerra y exacerbaron las contradicciones de la construcción de la nación musulmana/bosnia (en 1993, la Asamblea Musulmana de Bosnia decidió sustituir el etnónimo “musulmán” por “bosnio”). Los musulmanes constituyen hoy en día alrededor del 50% de los 3,6 millones de ciudadanos de Bosnia-Herzegovina. Sus cinco líderes apoyaron activamente la integración euroatlántica del país y buscaron un papel protagonista en la definición del futuro del islam en Europa.

ALBANIA

Albania es uno de los Estados europeos más jóvenes. Creado en 1912, es un ejemplo típico de Estado-nación “tardío”. A diferencia del papel determinante del islam en el desarrollo del nacionalismo musulmán bosnio, el islam en Albania no fue un componente del proceso de construcción nacional, a pesar de que los musulmanes constituían alrededor del 70% de la población en ese momento. La diversidad religiosa, representada por el islam (suní y bektashi), el cristianismo ortodoxo y el catolicismo romano, se remonta a tiempos muy lejanos, lo que hizo que el idioma, más que la religión, fuera un factor central en los esfuerzos de los albaneses por definir su identidad nacional. Ya en la década de 1920, el Estado albanés trató de restar importancia al papel de la religión en nombre de un nacionalismo cívico descrito como “albanismo”.

Mientras que los musulmanes de otros Estados posotomanos trataban de mantener su autonomía co-

munitaria preservando sus vínculos con el califato otomano hasta su abolición por Kemal Atatürk en 1924, los musulmanes suníes de Albania buscaron la autonomía nacional rompiendo con él ya en 1923. La comunidad bektashi, una hermandad heterodoxa que abarca elementos chiíes, sufíes y preislámicos, y que constituye alrededor del 10% de la población musulmana de Albania, también fue “nacionalizada” tras la abolición de su sede en Turquía en 1925.

Albania sufrió posiblemente la dictadura comunista más dura de la región y fue el único país que se proclamó “ateo” en su Constitución. Las brutales medidas para erradicar la vida religiosa incluyeron la persecución del clero y la confiscación de las propiedades de las diferentes comunidades religiosas. Todas las iglesias, claustros, mezquitas y *tekkes* fueron destruidos o convertidos en almacenes, cines y centros culturales. La lucha contra la religión se desarrolló en el contexto del creciente aislamiento político y económico del país, lo que reforzó la representación del partido comunista de las comunidades religiosas como agentes de intereses extranjeros que debían ser eliminados.

Los ciudadanos de Albania redescubrieron su fe tras el colapso del régimen autoritario de partido único y la derogación de la prohibición legal de la religión en 1990. La comunidad islámica suní se reconstituyó activamente. Con la ayuda de países y organizaciones islámicos, construyó o reconstruyó cientos de mezquitas, abrió una docena de escuelas religiosas y creó diversas asociaciones e institutos. La comunidad bektashi también reconstruyó sus *tekkes* y restableció su vida religiosa. Sin embargo, la reaparición del islam en la esfera pública no supuso una reislamización a gran escala. La identidad etnonacional albanesa siguió siendo un paraguas global y casi sagrado, que minimizaba o remodelaba poderosamente las identificaciones según criterios religiosos.

Según el censo de 2023, alrededor del 51% de los 2,4 millones de habitantes del país se identifican como musulmanes (el 46% son suníes, incluidas varias hermandades sufíes, y el 5% son bektashis), el 16% como cristianos (católicos romanos y ortodoxos) y más del 30% como no religiosos o sin declarar. Las relaciones entre las diferentes comunidades religiosas son, en general, distendidas y tolerantes.

KOSOVO

Tras el auge del nacionalismo en la provincia otomana de Kosovo, la religión se entrelazó con las divisiones étnicas entre las principales comunidades locales de serbios cristianos ortodoxos y albaneses musulmanes mayoritarios, reforzándolas poderosamente.

Una revuelta de los albaneses de Kosovo contra el Imperio otomano en 1912 condujo a la ocupación de la provincia por Serbia y a la posterior inclusión de Kosovo en el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Durante el periodo de entreguerras, las políticas de asimilación del Reino de Yugoslavia provocaron el cierre de las escuelas de lengua albanesa. Las *tekkes* sufíes se convirtieron gradualmente en centros educativos clandestinos, que generaron y difundieron el nacionalismo albanés.

En 1945, Kosovo se convirtió en una región autónoma de la República Popular de Serbia dentro de la recién formada federación yugoslava. Si bien los derechos de los albaneses se vieron restringidos inicialmente, entre 1967 y 1981 se produjo un mayor reconocimiento de los derechos de las minorías y se creó la primera universidad de lengua albanesa en Pristina en 1970. La provincia obtuvo la autonomía en 1974, lo que reforzó aún más la movilización política de los albaneses.

Con la descentralización de la federación yugoslava en la década de los ochenta y su posterior desintegración, Serbia recuperó su dominio sobre Kosovo y abolió su condición de provincia autónoma en 1989. Los albaneses respondieron creando un Estado alternativo en 1990, la República de Kosovo. Su resistencia pacífica inicial no logró grandes avances y el Ejército de Liberación de Kosovo inició una violenta lucha por la independencia, que culminó en la guerra de 1998-1999. Tras el bombardeo de Serbia por parte de la OTAN, Kosovo se convirtió en un protectorado internacional *de facto* y declaró su independencia en 2008.

Hoy en día, los musulmanes albaneses constituyen una abrumadora mayoría (95%) de los 1,6 millones de habitantes de Kosovo, en parte como resultado del éxodo masivo de la población serbia después de la guerra. Tras los acontecimientos de 1989, la Comunidad Islámica de Kosovo reconstruyó su infraestructura institucional y social. En 1992 se inauguró en Pristina una Facultad de Estudios Islámicos. Se convirtió en un importante centro de la vida religiosa musulmana, promoviendo el islam tradicional con una fuerte base albanesa y atrayendo a estudiantes albaneses de diferentes partes de los Balcanes (Albania, Macedonia, Montenegro).

Aunque el islam fortaleció la oposición a los serbios ortodoxos y la guerra reforzó las fronteras religiosas, siguió marginado en la esfera pública. Los musulmanes albaneses de Kosovo siguieron centrados sobre todo en su identidad étnica, mientras que los partidos políticos dominantes se opusieron a la politización del islam y enfatizaron el carácter secular del nacionalismo albanés.

CONCLUSIÓN

Históricamente, el islam en el sudeste de Europa, incluso cuando no se practicaba activamente, ha seguido siendo un marcador esencial de identidad y de fronteras grupales, al tiempo que ha actuado ocasionalmente como fuente simbólica para la movilización y la reestructuración del espacio político. En general, las comunidades musulmanas de los Balcanes han logrado un equilibrio eficaz entre la secularización y la reislamización, por un lado, y entre la globalización, la “europeización” y la localización, por otro. Los musulmanes de los Balcanes han gestionado con fluidez sus múltiples identidades, así como sus representaciones del islam.

Sin duda, la transformación de las identidades musulmanas en los Balcanes tras 1989 está lejos de haber concluido. Seguirá estando definida por una variedad de factores internos y externos, como el legado histórico y las realidades poscomunistas; la presión económica y las inquietudes culturales, y las preocupaciones políticas nacionales, regionales y globales./

El islam en el espacio postsoviético, reconfigurado en función de las correlaciones de poder, ilustra las tensiones entre la herencia histórica, las limitaciones políticas y las dinámicas transnacionales.

Bayram Balci es investigador del CNRS/CERI Sciences Po, París.

ISLAM Y POLÍTICA EN EL ESPACIO POSTSOVIÉTICO: CÁUCASO Y ASIA CENTRAL

El islam está presente desde hace muchos siglos en Asia Central, pero también en el Cáucaso y en Rusia. La conquista árabe, que destaca por su rapidez, se implantó en estas regiones en una época relativamente temprana. Ya en el año 751, los ejércitos árabes lograban la victoria en la batalla de Talas, en el actual Kirguistán. En el Cáucaso, la penetración árabe fue aún más rápida: la ciudad de Derbent, en el actual Dagestán, fue tomada desde 654. Si bien la islamización de las poblaciones no fue ni inmediata ni uniforme, su impronta marcó estas regiones desde los primeros siglos de la Hégira.

Cabe destacar, además, otro elemento que atestigua la plena pertenencia de Asia Central a la civilización islámica: esta fue en parte moldeada por intelectuales originarios de dicha región. Por citar solo algunos, Ibn Sīnā –conocido en Occidente como Avicena–, figura tutelar de la medicina medieval, nació en el actual Uzbekistán. Del mismo modo, Muhammad ibn Mūsā al Khwārizmī, fundador del álgebra y cuyo nombre dio lugar al término “algoritmo”, también era nativo de Asia Central, nacido en Termez, donde se le dedica un gran mausoleo. Desde la disolución de la URSS, tanto las élites como los ciudadanos de a pie de Asia Central reivindican con orgullo esta filiación intelectual para recordar que no son periféricos al islam, sino que han contribuido activamente al desarrollo de su civilización.

No obstante, aunque el espacio caucásico y centroasiático ocupa un lugar de pleno derecho en el mundo musulmán, también estuvo marcado de forma duradera por la influencia de una potencia no musulmana: la

Rusia imperial y, posteriormente, su heredera, la Unión Soviética.

En Asia Central, la conquista rusa comenzó ya en el siglo XVII en las estepas kazajas antes de extenderse a los centros urbanos de la región. Así, las tres entidades políticas musulmanas –el emirato de Bujará, el janato de Jiva y el janato de Kokand– cayeron sucesivamente bajo dominio ruso entre la toma de Tashkent en 1865 y la batalla de Göktepe en 1881, que supuso el fin de la resistencia armada de los pueblos centroasiáticos. En el Cáucaso, el avance ruso fue igualmente rápido. Debilitadas y en declive, las dos grandes potencias musulmanas ribereñas –el Imperio otomano y el Imperio de los sahs de Irán– no lograron frenar la progresión rusa y todo el Cáucaso pasó a control zarista en 1828.

En este espacio colonial, hasta el advenimiento de la Unión Soviética, la gestión del islam fue singular. En gran medida, la política de los zares consistió en no inmiscuirse excesivamente en la vida interna de las comunidades musulmanas: las autoridades religiosas pudieron administrar a sus fieles de manera relativamente autónoma, conservar sus mezquitas, sus fundaciones piadosas y sus madrazas. Sin embargo, los vínculos entre los musulmanes del imperio ruso y los de otros espacios islámicos –otomano, persa, indio o árabe– estuvieron supervisados de cerca. La peregrinación a La Meca, aunque se mantuvo, fue objeto de una vigilancia creciente destinada a limitar las solidaridades transnacionales. No obstante, es importante destacar que, incluso ante la ausencia de una represión frontal, la dominación colonial ejerció una influencia notable sobre el islam de



Mezquita central Imam Sarakhsi en Bishkek, Kirguistán, febrero de 2026./NAZIR ALIYEV TAYFUR/ANADOLU VIA GETTY IMAGES

la región. La creación de centros escolares modernos, inicialmente destinados a la población europea pero a los que en ocasiones asistían también los autóctonos, contribuyó a transformar la relación de las élites musulmanas con su propia tradición. Así, los intelectuales reformistas del siglo XIX, los jadidistas, recibieron gran influencia de las corrientes modernizadoras rusas y, a través de ellas, las europeas. Con la llegada de la URSS, esta relación experimentaría, sin embargo, cambios aún más profundos.

EL ISLAM Y LOS MUSULMANES EN LA ÉPOCA SOVIÉTICA

La Unión Soviética, heredera del imperio de los zares, que sin embargo pretendía presentarse como modelo contrario, adoptó una política ambivalente respecto al islam. En un primer momento, las autoridades bolcheviques se mostraron respetuosas con las tradiciones y culturas de los pueblos que integraban el nuevo Estado. Tras proceder a la división del espacio turco-iraní en repúblicas soviéticas distintas, el poder mostró cierta conformidad hacia el islam caucásico y centroasiático. Por su parte, las élites locales reformistas –el movimiento jadidista– apoyaron a los bolcheviques esperando negociar, a cambio, una mayor autonomía política o incluso la independencia para los pueblos musulmanes de la Unión. Esta primera

entente entre la intelectualidad local y el poder soviético fue, sin embargo, efímera. A medida que consolidaban su dominio, los bolcheviques faltaron a sus compromisos y adoptaron una actitud netamente más autoritaria hacia las repúblicas de mayoría musulmana.

No obstante, la política religiosa soviética fue cautelosa, al menos en sus primeras décadas. A partir de la década de los treinta, se llevó a cabo una campaña de difusión del ateísmo en toda la Unión, en la que los partidos comunistas republicanos se emplearon en combatir la influencia de las religiones en la sociedad. Sin embargo, incluso durante este periodo de “lucha contra el oscurantismo religioso”, la práctica islámica no desapareció de la vida cotidiana, tampoco entre los cuadros del partido en Asia Central y el Cáucaso. La circuncisión nunca fue obstaculizada; las bodas y los funerales continuaron siguiendo ritos islámicos, y a menudo los imanes acompañaban a los difuntos con sus oraciones.

La Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión significativo: para movilizar con más eficacia a las poblaciones en la lucha contra el invasor nazi, el régimen flexibilizó su política religiosa, abandonó la propaganda ateísta e incluso autorizó delegaciones de musulmanes soviéticos a viajar a países musulmanes para dar fe de la compatibilidad entre el islam y el comunismo. Esta relativa tolerancia se prolongó y profundizó a partir de 1985 con la llegada al poder de Mijaíl Gorbachov. El clima de libertad instaurado por la *glásnost* favoreció la emergencia de debates abiertos sobre cuestiones medioambientales, identitarias, étnicas y religiosas. Estas reformas, concebidas para revitalizar el sistema soviético, en realidad condujeron a su desinte-

A partir de 1991, el islam, largamente reprimido o marginado, pasó a integrarse en la construcción de las nuevas identidades nacionales

gración en 15 repúblicas independientes, abriendo una era completamente nueva en la gestión del islam.

ESTADO, ISLAM Y SOCIEDAD EN ASIA CENTRAL Y EL CÁUCASO DESDE LAS INDEPENDENCIAS

Las independencias de 1991 no fueron el resultado de luchas armadas de liberación nacional, sino la consecuencia directa del colapso del centro soviético. No obstante, las élites dirigentes –todas procedentes de los aparatos políticos del periodo soviético– percibieron el fin de la URSS como un momento fundador, punto de partida de una nueva política identitaria en la que la dimensión religiosa constituía un eje central. El islam, largamente reprimido o marginado, pasó a integrarse en la construcción de las nuevas identidades nacionales. Los jefes de Estado, aunque fueran antiguos *apparatchiks* comunistas, no dudaron en mostrar ostensiblemente su religiosidad, cumpliendo la peregrinación a La Meca y señalando así la entrada en un nuevo registro simbólico.

En la misma línea, se rehabilitaron y erigieron como héroes nacionales figuras del pasado que habían sido ocultadas por el poder soviético debido a su arraigo religioso. En Kazajistán, Al Farabi fue promovido al panteón de la nación. En Uzbekistán, el imán Al Bujari –célebre en todo el mundo musulmán por haber autenticado los hadices del Profeta– se convirtió en símbolo de la identidad uzbeka recobrada. Fenómenos análogos se produjeron en el conjunto de las nuevas repúblicas, donde lo que antaño había sido estigmatizado como retrógrado fue rehabilitado en nombre del patrimonio nacional. Pero esta integración del islam en la retórica nacional no carecía de ambivalencia. También respondía a una preocupación estratégica: frente al auge de un islamismo contestatario, a veces radical y violento, los dirigentes trataron de regular el hecho religioso para prevenir posibles derivas. El valle de Ferganá, entre Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán, ilustró de manera emblemática esta dinámica. Organizaciones como Adolat, lideradas por figuras como Tohir Yoʻldoshev y Juma Namangani, futuros dirigentes del Movimiento Islámico de Uzbekistán (MIU), una de las facciones yihadistas más radicales de la región, desafiaban abiertamente la autoridad del presidente Karimov. Ante la popularidad local del movimiento, el poder uzbeko, tras una indecisión momentánea, optó por la represión, obligando a los islamistas a exiliarse en Tayikistán y posteriormente en Afganistán, donde los talibanes los acogieron a partir de 1996. Debilitado por la intervención militar estadounidense tras los atentados del 11-S de

2001, el MIU, como otros movimientos radicales de Asia Central, se vio atraído hacia los escenarios sirio e iraquí durante el auge de Estado Islámico, cuando las primaveras árabes se sumieron en el caos.

UNA GESTIÓN CONTROLADA DEL ISLAM AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL

Durante el periodo soviético, la totalidad del islam centroasiático se administraba desde una instancia única, la Dirección de Asuntos Espirituales, con sede en Tashtkent, cuyo gran muftí nombraba a los pocos imanes todavía en ejercicio. Para el Cáucaso, esta función recaía en el Sheij-ul Islam de Bakú, cuya autoridad se extendía a los musulmanes de Azerbaiyán, Georgia, Armenia y el Cáucaso Norte. Con las independencias, cada república se dotó de sus propias instituciones religiosas nacionales, reproduciendo a escala estatal un modelo estructural muy similar.

Este modelo se basa en un doble aparato regulador. Por un lado, una dirección de asuntos espirituales encabezada por un muftí nacional, nombrado por el presidente, encargado de supervisar la vida religiosa. Por otro, un comité estatal para asuntos religiosos –una suerte de ministerio técnico– compuesto por funcionarios que, sin tener siempre formación teológica, disponen de experiencia en gestión administrativa. Ambas instancias trabajan conjuntamente para que el islam sea compatible con la ideología de Estado. Esta se articula en torno a una forma original de laicidad que no es el modelo anglosajón de separación estricta entre la Iglesia y el Estado, ni una desaparición total de lo religioso del espacio público. El modelo predominante en el espacio postsoviético se asemeja más al caso turco: un Estado oficialmente secular que, en la práctica, regula y fomenta un islam suní dispuesto a someterse a la autoridad política.

Esta política tiende a poner en valor lo que los gobiernos califican como “islam tradicional” –es decir, el islam mayoritario heredado del pasado, sujeto a las prácticas locales y que acepta la tutela estatal–, mientras se combaten las corrientes consideradas exógenas o desestabilizadoras. Los movimientos salafistas o wahabíes están prohibidos en casi todos los países, aunque algunas corrientes endógenas de rigorismo acentuado podrían legítimamente asimilarse a ellos. Este control estricto del islam hace imposible la existencia de partidos políticos islamistas; en el conjunto del espacio postsoviético, solo el Partido del Renacimiento Islámico –actor clave del acuerdo de reconciliación de 1997 en Tayikistán– gozó de existencia legal antes de ser disuelto en agosto de 2015. En Azerbaiyán, el Partido Islámico de Azerbaiyán, fundado en la localidad de Nardaran, fue prohibido en 1995.

Como complemento a este dispositivo de control, todos los Estados han puesto en marcha una política educativa islámica destinada a formar élites religiosas nacionales fieles a la ideología oficial. Se han creado universidades islámicas, institutos y escuelas coránicas en cada país. En Estados como Uzbekistán y Tayikistán, donde la demanda social en materia religiosa se ha revelado particularmente intensa, los poderes públicos han tolerado, e incluso fomentado, cierta visibilidad del islam en el espacio público, velando al mismo tiempo por

controlar muy de cerca su contenido. El objetivo último sigue siendo la formación de sociedades permeables a la influencia del Estado, pero impermeables a las influencias islámicas exteriores.

Sin embargo, esta ambición ha debido enfrentarse a sus propias limitaciones. La apertura de las fronteras tras la disolución de la URSS volvió a poner en contacto inevitablemente al islam postsoviético con el resto del mundo musulmán tras varias décadas, incluso siglos, de ruptura parcial. Este islam denominado "global" ha penetrado en el espacio postsoviético desde cinco grandes focos de influencia.

UN ISLAM, PESE A TODO, BAJO LA INFLUENCIA DE CORRIENTES EXTRANJERAS

Turquía, debido a su proximidad cultural, étnica y lingüística con las poblaciones túrquicas de Asia Central y el Cáucaso, fue uno de los primeros agentes en invertir en este espacio. El Estado turco, a pesar de su identidad oficialmente laica, no dudó en movilizar a la Diyanet –su administración de asuntos religiosos– para acompañar su política de influencia en las nuevas repúblicas túrcicas. Se enviaron imanes, se construyeron mezquitas y se apoyó a centros de formación religiosa, con el objetivo de difundir un islam suní hanafí, respetuoso con el Estado y favorable al acercamiento entre Ankara y el mundo turco postsoviético. A esta influencia oficial se sumaron las de las habituales cofradías turcas, en particular el movimiento Nur, fundado por Saïd Nursî, y la red gülenista, que, bajo una fachada decididamente laica, difundió un islam suní proturco a través de sus centros educativos, antes de ser prohibida en Turquía y en varios países de Asia Central tras el intento fallido de golpe de Estado de julio de 2016 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan. La cofradía Naqshbandiya, muy influyente en Turquía, también ha permitido la implantación de corrientes como las Süleymanci en algunos países de la región.

Irán, otra referencia histórica de Asia Central y el Cáucaso debido a su patrimonio cultural turco-persa común, también intentó ejercer su influencia. Sin embargo, su tradición mayoritariamente chií le impidió llevarla a cabo de una manera eficaz en las sociedades centroasiáticas, predominantemente suníes. Fue en Azerbaiyán –país de mayoría chií, integrado durante mucho tiempo en el espacio iraní antes de la conquista rusa– donde la influencia de Teherán fue más perceptible, sin que por ello se ejerciese libremente. Las tensiones políticas entre ambos países, así como la imagen desfavorable del régimen de los mulás en la escena internacional, llevaron a Bakú a vigilar de cerca las relaciones entre el chiismo azerbaiyano e Irán.

El mundo árabe constituyó el tercer polo de influencia, a través de las ideas procedentes de Egipto y los países del Golfo, en particular de Arabia Saudí. El auge de la peregrinación a La Meca y Medina, muy limitada durante el período soviético, favoreció la difusión de ideas de inspiración wahabí en la región, aunque la realidad del fundamentalismo local resulta mucho más compleja y plural de lo que esta etiqueta da a entender.

El subcontinente indio –India, Pakistán y Bangladesh– constituye un cuarto foco de influencia, cuyos

La tensión entre el islam nacional controlado y el islam transnacional sigue siendo uno de los grandes retos a los que se enfrentan los Estados de la región

vínculos históricos con Asia Central son antiguos y profundos. La dinastía mogol, fundada por descendientes timúridas, y la cofradía Nakshibendiyya, nacida en Asia Central antes de extenderse por el mundo indio, dan testimonio de estos intercambios seculares. Tras la ruptura impuesta por la dominación ruso-soviética, el fin de la URSS permitió su parcial renacimiento. En particular, el movimiento transnacional Jamāat al Taḥlīgh, cuyo centro neurálgico se encuentra en el barrio de Nizamuddin, en Nueva Delhi, se vuelve a expandir en el espacio centroasiático, implantándose en Tayikistán, Kazajistán y, de forma más duradera, en Kirguistán, donde sigue activo en la actualidad.

CONCLUSIÓN

El islam en el espacio postsoviético constituye un objeto de estudio particularmente revelador de las tensiones entre el legado histórico, las limitaciones políticas y las dinámicas transnacionales. Lejos de ser un factor inalterable, el hecho religioso en esta región se ha reconfigurado constantemente en función de las sucesivas correlaciones de poder: conquista árabe, dominación ruso-soviética y posterior recomposición nacional tras 1991.

Si bien la disolución de la URSS permitió un renacimiento del islam en el Cáucaso y Asia Central, este se produjo bajo una estrecha vigilancia estatal. Los nuevos regímenes, herederos de las prácticas autoritarias soviéticas, han instrumentalizado lo religioso con fines de legitimación nacional, al tiempo que han tratado de neutralizar las expresiones consideradas subversivas. El resultado es un modelo singular de gestión del islam, ni verdaderamente liberal ni abiertamente represivo, en el que el Estado se afirma como árbitro último de lo que es lícito en materia religiosa.

Al mismo tiempo, la reapertura de las fronteras ha vuelto a situar inexorablemente a estas sociedades en el seno de una umma globalizada, exponiendo al islam local a múltiples influencias externas –turcas, iraníes, árabes o del sur de Asia– que los poderes tienen dificultades para contener de forma duradera. Esta tensión entre el islam nacional controlado y el islam transnacional sigue siendo uno de los principales retos estructurales a los que se enfrentan los Estados de la región.

En el fondo, la cuestión del islam en el espacio postsoviético nos encamina a cuestionar de manera más amplia la capacidad de los Estados para definir y contener la identidad religiosa de sus sociedades en la era de la globalización./

Lecturas de afkar/ideas



El ascenso de China. Una mirada a la otra gran potencia.

Rafael Dezcallar, Deusto, Barcelona, 2025. 352 p.

El ascenso de China pertenece a esa afortunada estirpe de libros que revelan un país, en vez de explicarlo. En él, Rafael Dezcallar no se limita a ordenar datos, cronologías y conceptos, sino que deja entrever el pulso íntimo de una realidad compleja, esquiva y a menudo mal entendida desde Occidente. En un momento histórico en el que abundan los análisis apresurados –idealizadores o alarmistas, fascinados o temerosos–, el libro ofrece algo mucho más infrecuente: una mirada templada, informada y profundamente ecuánime.

Las múltiples experiencias profesionales del autor, desarrolladas en contextos culturales, políticos y humanos muy distintos a lo largo de cuatro décadas, le han concedido una mirada poliédrica que se percibe en cada página: una capacidad poco común para comparar sin simplificar, comprendiendo que los sistemas políticos y las culturas nacionales no se explican desde una sola variable. De este modo, *El ascenso de China* aparece así, no como una anomalía exótica, sino como el resultado coherente de una historia larga, traumática y extraordinariamente ambiciosa.

Dezcallar sabe que China no es un eslogan ni una amenaza abstracta, sino un país con una densidad histórica, cultural y política que exige tiempo, paciencia y mucha humildad intelectual. Esa actitud atraviesa todo un texto donde se deja notar, desde el primer párrafo, que este no es su primer libro. Hay en *El ascenso de China* un estilo trabajado, una prosa ágil de mirada panorámica, que combina la claridad del analista con la respiración del narrador. Dezcallar escribe con vocación explicativa, pero también con oído literario. Sabe cuándo detenerse en una escena, cuándo dejar hablar a un dato elocuente, cuándo introducir una reflexión personal sin invadir el terreno del lector. Esa mezcla –poco frecuente en los ensayos sobre geopolítica– convierte este libro en una lectura fluida, incluso absorbente, sin sacrificar por ello el rigor.

En mi opinión, uno de los grandes méritos del libro es mostrar cómo el llamado “modelo chino” no surge de la nada ni es un mero artificio ideológico. El tránsito desde la China empobrecida del maoísmo al actual capitalismo de Estado se presenta como un proceso lleno de contradicciones, pragmatismo y decisiones audaces. Dezcallar explica ese recorrido con una claridad que no infantiliza al lector, y con una honestidad que evita tanto la admiración acrítica como la condena automática.

Pero quizá donde el libro alcanza mayor densidad es en los capítulos que se nutren directamente de la experiencia vivida en Pekín entre 2018 y 2024. La pandemia, con su carga de incertidumbre, control extremo y decisiones drásticas, supuso una prueba de estrés para cualquier diplomático. Para el autor, fue además una oportunidad –difícil, exigente, incómoda, excepcional– de observar desde primera fila el ADN del sistema chino: su capacidad de movilización, su obsesión por el control, su desconfianza estructural hacia el exterior, pero también la disciplina social y el sentido colectivo que atraviesan a buena parte de la población. Esta vivencia extrema dota al análisis de una profundidad poco común. Gracias a ello, Dezcallar no teoriza sobre China en abstracto:

describe cómo funciona cuando todo se tambalea. Cómo decide, cómo comunica, cómo prioriza. Y, sobre todo, cómo se percibe a sí misma frente al mundo. En ese sentido, el libro es también una reflexión sobre el poder, la soberanía y el miedo; sobre un país que se siente de nuevo fuerte tras un largo “siglo de humillación” y que exige que ese nuevo equilibrio de fuerzas se traduzca en un orden internacional distinto.

China fue, para Dezcallar, el culmen de una trayectoria diplomática excepcional. No solo por el peso específico del destino, sino porque allí confluyen todas las preguntas que han marcado su carrera: el poder y sus límites, la cultura como factor político, la tensión entre principios y pragmatismo. Desde su posición como máximo representante de España en el gigante asiático, el autor no elude los aspectos más incómodos de la relación bilateral y multilateral: la asimetría y el desequilibrio, la falta de reciprocidad, la opacidad en determinados ámbitos aparecen sin estridencias, pero sin eufemismos. Hay en estas páginas una defensa serena, firme, de la necesidad de transparencia y reglas compartidas, consciente de que el diálogo con China es inevitable, pero también de que no puede basarse en la ingenuidad. *El ascenso de China* es, en ese sentido, algo más que un ensayo sobre una gran potencia emergente: es el libro de alguien que ha mirado el mundo desde muchos ángulos y que, al final del camino, ofrece al lector una visión amplia, compleja y profundamente honesta de uno de los grandes protagonistas de nuestro tiempo.

Tras dos décadas conviviendo con China y su realidad, recomiendo encarecidamente leer *El ascenso de China*. Su lectura, evidentemente, no garantiza entender China del todo –nadie puede prometer eso–, pero sí evita el error más común: creer que ya la entendemos. Y en los tiempos que corren, ese es un logro nada menor.

– *Julio Ceballos, consultor de negocio en China y autor de los libros “Observar el arroz crecer” y “El calibrador de estrellas” (Ed. Ariel)*



Un siglo de expolio y abandono en Palestina. Bichara Khader, La Catarata, CEARC, Madrid, 2025. 173 p.

La célebre frase de Theodor Adorno "escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie" puede completarse hoy con esta otra de *El mundo después de Gaza*, de Pankaj Mishra: "Gaza ha extendido la sombra de la Shoah sobre mucha más gente que la totalidad de los judíos del mundo". Se trata de un desbordamiento de la memoria de las víctimas del pasado que sirve a Israel para justificar la estrategia de tierra quemada aplicada en la Franja y para opacar Holocaustos anteriores en tierra de Palestina. Una asimetría que se agrava en la llamada por Mary Fullbrook "sociedad de espectadores" cuando ocupan las portadas otras crisis – ahora la guerra de Irán– y la tragedia gazatí cae, si no en el olvido, sí en prolongados silencios.

La lectura de *Un siglo de expolio y abandono en Palestina*, del profesor Bichara Khader, tiene la virtud de abordar el desposeimiento del que ha sido víctima la comunidad palestina, que es la suya –nació cerca de Yenin en 1944–, desde la desigualdad de fuerzas en el conflicto con Israel, la ocupación y anexión de tierra y la justificación bíblica o sacralización de todo ello, invocada por el fundamentalismo mosaico. "Israel sigue siendo el único país del mundo que nunca ha declarado sus fronteras ni ha reconocido el Golán, Cisjordania,

Gaza y Jerusalén Este como territorios ocupados –escribe Khader. Al contrario, los reclama como tierras liberadas, prometidas por Dios al pueblo elegido de Israel".

Hace más de 40 años, en *Les palestiniens*, el periodista y diplomático francés Éric Rouleau concretó en el verbo sobrevivir la primera misión de la sociedad palestina, a la que llamó "un pueblo de más" (a ojos del sionismo), "a merced de conflictos armados, masacres o persecuciones". De la larga y documentada exposición de Bichara Khader es fácil colegir que esa condición de "pueblo de más" ha sido determinante en dos direcciones: la limpieza étnica, descrita por autores como Ilan Pappé, y "la ocupación israelí y su política de colonización progresiva", que cita Khader y que enlaza con los rasgos esenciales de la crítica de Edward W. Said a los acuerdos de Oslo (1993), que definió en cierta ocasión como "el camino que conduce al precipicio".

"Un siglo de expolio" corrige la tendencia muy extendida de entender la crisis gazatí como algo que empezó el 7 de octubre de 2023"

Es difícil oponer argumentos a tal diagnóstico después de más de 70.000 muertos en Gaza por la respuesta israelí al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023: 1.195 muertos y 251 rehenes. Ni la tregua o alto el fuego pergeñado por Estados Unidos, ni la creación de una Junta de Paz pilotada por Donald Trump, ni los proyectos inmobiliarios para la Franja contienen elementos que corrijan a Said. Khader lo resume así: "Se percibe un sentimiento creciente de que Occidente ha traicionado a los palestinos al dar la espalda a sus reivindicaciones legítimas". Con una derivada europea: "El problema de la UE no es su falta de claridad o de visión, sino su incapacidad

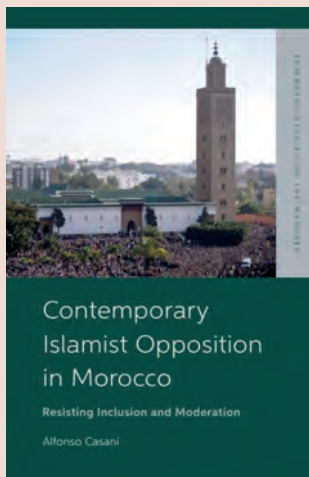
para traducir sus declaraciones en acciones concretas".

La reciente publicación de *Cuando el mundo duerme*, de Francesca Albanese, la relatora de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, humaniza sin asomo de grandilocuencia el relato estructural de la crisis desde 1897 que firma Khader. Las historias de los diez personajes a partir de los que se articula el libro de Albanese emiten una señal de auxilio, un requerimiento a convertir las grandes proclamas en compromisos efectivos. Hay en su testimonio una ratificación de primera mano de cuanto se deduce del inacabable conflicto contado por el politólogo palestino.

El libro de Albanese es, en cierto sentido, complementario del de Khader al poner rostros y vidas al drama humano y paliar la inevitable sensación de insuficiencia que se experimenta siempre que se intenta explicar cuáles son las dimensiones del agravio palestino. Hacer referencia a la proliferación de la lógica del *apartheid* según se multiplican los asentamientos en Cisjordania o a la transformación de Gaza en un inmenso campo de concentración devastado por las bombas adquiere una nueva dimensión si lo acompaña la voz de las víctimas.

Por lo demás, *Un siglo de expolio* corrige la tendencia muy extendida de entender la crisis gazatí como algo que empezó el 7 de octubre de 2023. Se diluye así en el torrente de la historia más de un siglo de conflictividad, episódica al principio, más tarde frecuente y hoy permanente. El periodista Miguel Ángel Bastenier dio a la imprenta en 2002 *Israel-Palestina, la casa de la guerra*, un título tan categórico como vigente. Un año después, en el transcurso de una sesión académica, afirmó que cuanto más represión hubiera en Gaza, más crecería Hamás, y cuanto menor fuese, menor sería la influencia de Hamás; luego, en 2006, Hamás ganó las elecciones en la Franja. Así estaban y están las cosas y el libro de Bichara Khader lo ratifica.

– Albert Garrido, periodista



Contemporary Islamist Opposition in Morocco. Resisting Inclusion and Moderation.

Alfonso Casani, *Edinburgh University Press, Edimburgo, 2025. 240 p.*

El análisis de la vida política marroquí ha ocupado durante años un espacio privilegiado en el debate público español. El libro *Contemporary Islamist Opposition in Morocco. Resisting Inclusion and Moderation*, de Alfonso Casani, emerge como referencia indispensable para comprender el pasado y el presente de un actor de oposición clave en el país vecino, el movimiento islamista Justicia y Espiritualidad (*al-Adl wa-l-Ihsane*, AWI).

¿Qué es AWI y qué buscan sus integrantes? ¿Cómo actúan y cómo se organizan? ¿Cómo hacen converger la esfera política y la religiosa? ¿Cómo se relacionan con otros actores? A partir de estas preguntas, Alfonso Casani analiza las estructuras de movilización, el desarrollo organizativo y la elección de recursos religiosos y políticos de AWI en su labor de oposición desde sus orígenes hasta el contexto actual, marcado por el cierre de la ventana de oportunidad después de 2011. Casani traza el recorrido de AWI y, al hacerlo respetando su secuencia temporal y presentando el contexto de cada momento, no solo nos adentra en la toma de decisiones de este movimiento antisistema, sino también en las estrategias del régimen para controlar la arena religiosa y política del país. El enfoque secuencial de la politización

de AWI permite observar cómo impactan en él hitos de la historia reciente del país –y de la región.

Para Casani, la politización de AWI es “una reacción a las oportunidades políticas y el cierre de la arena política y religiosa” (p.6). En este sentido, subraya varios momentos determinantes. Entre ellos, los atentados de Casablanca en el año 2003, cuando, en un contexto “restrictivo” y marcado por la “polarización entre islamistas y modernistas” y ante la imposibilidad de crear una “tercera vía”, AWI “gira su estrategia hacia un foco más político” (p.87). Casani plantea así un diálogo entre lo religioso y político y muestra cómo AWI se sitúa en estas dos dimensiones frente a la monarquía, que no olvidemos reclama para sí una doble legitimidad política y religiosa.

El análisis de la politización de AWI muestra, además, cómo se transforman las lógicas de alianza-contestación dentro del campo político (y religioso) marroquí y cómo evolucionan los clivajes a lo largo de las últimas décadas. La denominada primavera árabe –o mejor, las revueltas antiautoritarias de 2011– aparece(n) como un punto de inflexión: para AWI y su construcción como movimiento político antisistema, para la región y su mirada sobre el islamismo, para el régimen y su capacidad de resiliencia y para la propia ciudadanía. En este momento, AWI se suma al Movimiento 20 de Febrero y a sus demandas “que giran en torno a tres ejes centrales: libertad, justicia social y dignidad” (p.109), mientras busca de forma paralela marcar su impronta individual combinando “demandas políticas socio-económicas con referencias religiosas” (p.112). A partir de entonces, AWI se presenta como un actor capaz de tejer una alianza clave con la izquierda antisistema a la vez que preserva su autonomía e identidad.

Este estudio de las dinámicas de oposición en contextos no democráticos es, probablemente, una de las principales aportaciones de este libro. Analizando la politización de AWI y sus estrategias de alianzas, movilización y resistencia, Casani reflexiona de

forma más amplia sobre los espacios no institucionales de contestación en entornos autoritarios, sobre los repertorios de acción disponibles y sobre la construcción de discursos capaces de movilizar y congregar apoyos.

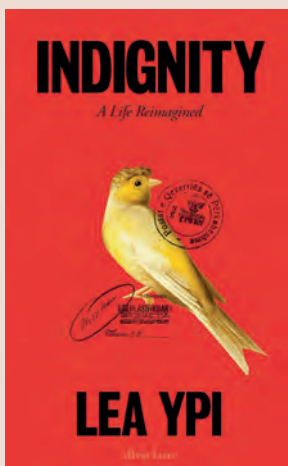
Casani no olvida la dimensión más interna y presta atención igualmente al desarrollo organizativo de AWI y las tensiones que emergen entre las diferentes posiciones dentro de este movimiento cuyo estatus sigue siendo no legal. La muerte de Abdessalam Yassine en 2012, fundador del movimiento y figura central en torno a la que AWI se constituye, funciona como catalizador del “proceso de politización que AWI llevaba desarrollando en los años anteriores” (p.125). A partir de aquí, se produce una reestructuración del movimiento mediante un “fórmula de consenso” que “preserva la influencia de la vieja guardia y su fuerte dimensión espiritual (...) mientras acomoda las inclinaciones políticas de la segunda generación de miembros” (p.169).

Esta mirada sobre las lógicas internas de AWI, sobre su proceso de toma de decisiones y sobre el impacto que en éstas tiene el contexto político del país y las estrategias del régimen solo es posible a partir de un profundo conocimiento del movimiento (y del país).

Las entrevistas con actores relevantes de AWI que Casani expone a lo largo del texto ponen en evidencia que el libro está avalado por un extenso trabajo empírico y por el acceso a las fuentes originales. Es precisamente esta combinación entre originalidad, análisis empírico y argumentación teórica la clave del éxito de un libro que cuestiona la tan manida tesis de la inclusión-moderación referida a los partidos y movimientos islamistas.

Alfonso Casani, en definitiva, trasciende el estudio de un movimiento político-religioso eminentemente marroquí para convertir su libro en referencia sobre los estudios de inclusión-exclusión-oposición-resistencia en entornos no democráticos.

– Beatriz Tomé-Alonso, UNED



Indignity. A Life Reimagined. Lea Ypi, Penguin, Londres, 2025. 368 p.

A caballo entre la ficción y el ensayo, la historia y la filosofía, la nueva novela de Lea Ypi, *Indignity. A Life Reimagined*, pone de relieve el papel de las decisiones individuales en las grandes convulsiones socio-políticas que sacudieron los Balcanes a principios del siglo XX. En el centro de la narración se encuentra una reflexión sobre la dignidad, la esencia absoluta e intangible de todo ser humano.

La historia comienza con la publicación en las redes sociales de una foto de la abuela de la escritora, Leman Ypi. Miembro de la clase burguesa otomana, Leman pasa su luna de miel en los Dolomitas. Mira a la cámara y sonríe. Año 1941. Se desata una oleada de críticas en las que se acusa a Leman de traidora al estilo de Nerón, ya que se divertía mientras Albania era devastada por la invasión de Mussolini.

Conmocionada, Ypi investiga en los archivos albaneses para averiguar cómo vivió realmente su abuela aquellos acontecimientos. Espera restaurar la dignidad de Leman y sacar a la luz las pruebas de sus motivaciones durante esos "años llenos de sufrimiento". Pero los archivos no ofrecen una solución fácil. En una región de imperios que se derrumbaron unos sobre otros, desatar el nudo gordiano de la Historia es delicado. La investigación pone de manifiesto la extrema politización de los archivos: la integridad de los Estados modernos se sustenta decididamente en una

amnesia institucionalizada.

Las omisiones y el olvido oficial son especialmente llamativos en el caso de las mujeres. En un giro borgesiano, Ypi se da cuenta de que gran parte de los documentos que había leído probablemente se referían a otra Leman Ypi, otra mujer burguesa y otomana que vivió en la misma época y con una trayectoria paralela, pero que falleció 30 años antes que su abuela. Es imposible distinguirlas en los documentos oficiales.

Así, se desarrolla una doble historia: la de Lea Ypi en los archivos como marco para la narración de la vida de un personaje que integra a las dos Leman Ypi. A través de la ficción, y no de un empirismo inflexible, se llega a comprender más profundamente la naturaleza humana.

"Este libro es una herramienta indispensable para desnaturalizar el Estado-nación y comprender su ascenso hacia la hegemonía en su contexto"

Pocos libros mezclan novela y ensayo político con tanta habilidad, sin embargo, la narración pierde a veces fuerza. Escenas en las que cabría esperar una intensidad emocional vertiginosa, como el suicidio de Selma, la tía de Leman, la noche antes de su boda, se caracterizan más bien por una sobriedad fría, incluso clínica.

En cambio, las reflexiones más abstractas de Leman tras la muerte de Selma, en forma de soliloquio sobre la elección entre la lucha contra un clima social opresivo, la adaptación (quizás de mala fe) y el abandono total, son de un virtuosismo fascinante. Se trata de una exégesis kantiana de la dignidad, concebida como la capacidad moral inherente a los seres racionales a la vez que dependiente del contexto sociohistórico.

Las figuras que gravitan en torno a Leman permiten una comparación apasionante de las distintas perspectivas sobre la dignidad humana. A menudo de manera inverosímil, enuncian máximas incisivas al estilo de Dostoievski: "No

se puede cambiar el pasado; solo se puede intentar recordarlo de otra manera". Estos aforismos son, sin embargo, bellos en su complejidad, y se perdona de buen grado que rompan la credibilidad literaria.

El libro alcanza una perspectiva caleidoscópica sobre los debates políticos y culturales que sacudían el sudeste de Europa a principios del siglo XX. Aunque Ypi nos ahorra las comparaciones fáciles, no podemos evitar notar –en la inestabilidad y el sufrimiento generalizados, en la ortodoxia incoherente del nacionalismo, en la violación de la dignidad humana al servicio de ideologías estériles– paralelismos inquietantes con nuestra época.

Las preguntas sobre su abuela quedan sin respuesta, pero la investigación abre la vía a cuestiones existenciales para toda la región balcánica que confieren al libro una dimensión expansiva: es un viaje deslumbrante de lo específico hacia lo universal.

Bajo el prisma de los brutales intercambios de población y las guerras sucesivas, el relato pone de relieve la cronología de la imposición sobre las cenizas de los imperios plurinacionales, del Estado-nación como único modelo de organización política: una tecnología que entonces era novedad y que hoy rara vez se cuestiona. Se muestra cómo, en el Mediterráneo, la imposición del modelo nacional en regiones en las que resultaba contradictorio, e incluso nefasto, ha marcado profundamente la geopolítica actual.

Indignity. A Life Reimagined es una herramienta indispensable para desnaturalizar el Estado-nación y comprender su ascenso hacia la hegemonía en su contexto. Al cuestionar la supuesta inevitabilidad de esta evolución, se puede abrir un espacio conceptual para construir nuevas instituciones capaces de promover la paz y la prosperidad en el Mediterráneo. Por lo tanto, el papel de la historia no sería revelar verdades irrefutables ni tratar de condenar o absolver a las personas. Quizás, subraya Ypi, nos permita escapar de los paradigmas que limitan nuestra imaginación e inventar un futuro digno de nuestra humanidad.

— Juan Fueyo, IEMed



POLÍTICA EXTERIOR

**Ya conoces la noticia.
Ahora descubre lo que hay detrás.
Y lo que viene después.**



POLÍTICA EXTERIOR

Un año (6 números)

Papel: 70€

Digital: 55€

+ **Papel+digital: 85€**



SUSCRIPCIÓN TOTAL

Un año

Suscripción total digital: 145€

Política Exterior + Informe semanal

+ **Suscripción papel / digital: 168€**

Política Exterior papel + Informe semanal



INFORME SEMANAL

Un año (48 números)

Digital: 140€



AFKAR / IDEAS


Un año (3 números)

Papel: 20€

Toda la información en politicaexterior.com ¿Te ayudamos?

Llámanos o escríbenos: +34 91 431 26 28 // suscripciones@politicaexterior.com

**Consultar gastos de envío fuera de España*



**Cuando exploramos todas
las energías, hacemos avanzar
a todas las personas.**

Con toda la energía

repsol



► Complejo de energía renovable en Huelva.
Producción de energía eléctrica y térmica renovable con biomasa.



► Complejo de energía renovable en Puertollano.
Impulso del proyecto para producir combustibles renovables.



► Planta de biofertilizantes y biometano
La Galera en Tarragona.